

**FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE
INFRAESTRUCTURA REGIONAL**

**MARCO DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y SOCIAL**

VERSIÓN FIT FOR DISCLOSURE

**Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación**

República Argentina

Mayo 2019

Contenido

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....	5
1. INTRODUCCION	7
1.2 Presentación del Marco de Gestión Ambiental y Social	7
1.3 Objetivos y alcance del MGAS	8
1.3.1 Objetivos del MGAS.....	8
1.3.2 Alcances del MGAS.....	8
2. EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL.....	9
2.1. Presentación	9
2.2. Programas Gestionados por el FFFIR.....	11
2.3. Proyectos a ser financiados por el BID – FFFIR.....	12
2.4. Elegibilidad de inversiones.....	12
2.4.1. Criterios de elegibilidad según el ROyMP	12
2.4.2. Criterios ambientales y sociales de elegibilidad.....	13
2.5. Criterios de No elegibilidad	14
3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL FFFIR.....	15
3.1 Arreglos institucionales del FFFIR a nivel nacional y provincial	15
3.2 El FFFIR y la Sustentabilidad Ambiental y Social	16
3.3 Responsabilidades institucionales específicas nacionales y provinciales. Autoridades de aplicación relevantes.....	17
3.4 Marco institucional para la implementación del MGAS a nivel nacional y provincial 18	
3.5. Procedimientos específicos a nivel nacional y provincial.....	18
4. MARCO NORMATIVO	19
4.1 Marco Normativo Ambiental Nacional.....	19
4.2 Marco Legal del FFFIR.....	20
4.3. Políticas Operacionales, Ambientales y Sociales del BID, aplicadas en los programas 21	
4.3.1. Introducción	21
4.3.2. Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)	21
4.4. Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP-704)	24
4.5. Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710)	24
4.6. Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761).....	27
4.7. Política sobre Pueblos Indígenas (OP-765)	27
4.8. Política de Acceso a la Información (OP-102).....	28

5. PRINCIPALES RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES PREVISIBLES PARA PROYECTOS A SER FINANCIADOS	29
5.1. Introducción.....	29
5.2. Principales riesgos e impactos ambientales y sociales	29
6. EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS	35
6.1. Introducción.....	35
6.2. Procedimientos, metodologías e instrumentos de evaluación ambiental y social	35
6.3. Elegibilidad de proyectos	37
6.4. Etapa de identificación preliminar y categorización.....	39
6.4.1. Perfil Ambiental y Social (PAS) de proyectos	39
6.4.2. Delimitación del área de influencia (AI)	40
6.4.3. Categorización de proyectos.....	41
6.5. Etapa de anteproyecto	42
6.6. Etapa de proyecto ejecutivo	42
6.6.1. Estudios ambientales y sociales	42
6.6.2. Estudios Ambientales y Sociales acuerdo a la clasificación de proyectos	45
6.6.3. Etapas de Análisis, Evaluación y Aprobación	45
6.7. Etapa de construcción (ejecución y monitoreo de las obras).....	46
7. COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL MGAS, DIVULGACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA.....	51
7.1. Requerimientos de Consulta Publica	51
7.4. Buenas Prácticas para la Consulta Pública de un proyecto	53
8. SISTEMA DE INTERACCIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL MGAS.....	54
8.1. Objetivos y alcances.....	54
8.2. Procedimientos e instrumentos generales.....	55
8.3. Aspectos complementarios.....	55

ANEXOS

Anexo 1. Perfil Ambiental y Social (PAS)

Anexo 2. Informe de Seguimiento Socio Ambiental (ISSA)

Anexo 3. Informe Semestral del Desempeño Ambiental y Social de Proyectos (ISDASP)

Anexo 4. Legislación Ambiental y Social Nacional

Anexo 5. Contenidos Mínimos para la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de los Proyectos (EIAS)

Anexo 6. Contenidos mínimos y requisitos de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Anexo 7. Plan de Manejo Ambiental y Social de Obras (PMAS)

Anexo 8. Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Pueblos Indígenas

Anexo 9. Términos de Referencia para elaborar el Plan de Reasentamiento Involuntario

Anexo 10. Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales de Resolución a Cargo del Contratista (MGRAS)

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

AID	Área de Influencia Directa
All	Área de Influencia Indirecta
ANP	Área Natural Protegida
AO	Área Operativa
AP	Audiencia Pública
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BO	Boletín Oficial
CA	Consejo de Administración del FFFIR
CITES	Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres
CMAF	Convenio Mutuo de Asistencia Financiera
CMS	Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres
COFEMA	Consejo Federal de Medio Ambiente
COP's	Compuestos Orgánicos Persistentes
CP	Consulta Pública
CPI	Consejo de Participación Indígena
DSA	Departamento Socio Ambiental del FFFIR
DNV	Dirección Nacional de Vialidad
Dpto.	Departamento
EAS	Evaluación Ambiental y Social
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
IAS	Estudio de Impacto Ambiental y Social
FFFIR	Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
GAF	Gerencia de Administración y Finanzas
GAL	Gerencia de Asuntos Legales
GEP	Gerencia de Evaluación de Proyectos
IASO	Inspector Ambiental y Social de Obras
LGA	Ley General del Ambiente
MAYDS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
MGAS	Marco de Gestión Ambiental y Social
MINPLAN	Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación

MIOPyV	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
MMES	Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente
NCA	Nivel de complejidad ambiental
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OP / PO	Políticas Operacionales
OTBN	Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
PAS	Perfil Ambiental y Social
PGAS	Plan de Gestión Ambiental y Social
PMAS	Plan de Manejo Ambiental y Social (Contratista)
PPI	Plan de Pueblos Indígenas
PRI	Plan de Reasentamiento Involuntario
RA	Responsable Ambiental
RAS	Responsable Ambiental y Social
RENACI	Registro Nacional de Comunidades Indígenas
RN	Ruta Nacional
ROyMP	Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos del FFFIR
RP	Ruta Provincial
RS	Responsable Social
SAO	Seguro Ambiental Obligatorio
SF	Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación
SAYDS	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
SHL	Seguridad e Higiene Laboral
SMT	Servicio de Medicina del Trabajo
SSN	Superintendencia de Seguros de la Nación
TdR	Término de Referencia
UE	Unidad Ejecutora

1. INTRODUCCION

1.2 Presentación del Marco de Gestión Ambiental y Social

Este Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) fue elaborado de manera conjunta entre el Gobierno de la República Argentina, a través del **Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional** (FFFIR) y el **Banco Interamericano de Desarrollo** (el BID, o “El Banco”). Está dirigido a los proyectos de financiamiento externo en que esté involucrado el Programa de Obras Viales y el Programa de Energía, Agua y Saneamiento del FFFIR en distintas provincias del país.

El presente **Marco de Gestión Ambiental y Social** (MGAS) refleja el compromiso del FFFIR con los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo como mira la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental y social de sus proyectos, haciendo efectivos los derechos y obligaciones contenidos en las Declaraciones y Convenios Internacionales ratificados por el Gobierno de Argentina.

El FFFIR entiende que el crecimiento económico debe ser sostenible a efectos de no perjudicar a las futuras generaciones, y que el mismo debe ir de la mano del desarrollo social y de la inclusión, promoviendo la prosperidad y la paz para todos.

El MGAS debe ser aplicado por el **Departamento Socio-Ambiental** (DSA) del FFFIR, a todos los proyectos del Programa de Obras Viales del FFFIR y del Programa de Energía, Agua y Saneamiento que podrían ser financiados en las diferentes provincias argentinas, con recursos financieros del BID.

El MGAS contiene los principales aspectos ambientales y sociales que deben considerarse e incorporarse durante la preparación, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos propuestos en el marco del Programa de Obras viales del FFFIR, incluyendo la participación temprana y continuada de las partes interesadas de las comunidades alcanzadas.

El MGAS del FFFIR define los principios, reglas y procedimientos aplicables para la evaluación y gestión de los impactos ambientales y sociales de los proyectos considerados, así como los lineamientos requeridos para el establecimiento de planes y medidas de mitigación y compensación de aquellos impactos ambientales y sociales adversos que pudieran producirse, así como la potenciación de aquellos impactos positivos que pudieran derivarse del proyecto, maximizando los beneficios del desarrollo.

Contiene los lineamientos para la determinación del alcance de los impactos del proyecto y su consecuente nivel de riesgo en función de la naturaleza y magnitud de los mismos, incluyendo riesgos e impactos ambientales, con especial consideración del cambio climático, y riesgos e impactos sociales, con énfasis en

aquellos individuos o grupos más vulnerables, a fines de evitar su discriminación y/o el agravamiento de su situación, a la vez que tratando de promover su desarrollo y acceso a los beneficios de los proyectos considerados.

El MGAS define la metodología de clasificación ambiental y social de los proyectos, así como los estudios requeridos y los procedimientos de gestión en función a la misma. Fija asimismo las responsabilidades institucionales y el sistema de atención de reclamos y resolución de conflictos.

El MGAS se encuentra organizado en 8 Capítulos y 10 Anexos, incluidos los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Pueblos Indígenas y los Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Reasentamiento Involuntario y el Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales de Resolución a Cargo del Contratista. De ser necesario, se actualizará este MGAS.

1.3 Objetivos y alcance del MGAS

1.3.1 Objetivos del MGAS

El objetivo general de este MGAS es servir como instrumento de gestión, en el que se definen las responsabilidades institucionales y los principales aspectos ambientales y sociales a implementarse durante el ciclo de los proyectos.

Sus objetivos particulares son:

- Contar con herramientas que aseguren un adecuado manejo de los aspectos ambientales y sociales durante todo el ciclo de los proyectos
- Cumplir con la normativa vigente a nivel nacional, provincial y local
- Dar cumplimiento a las Salvaguardas del BID
- Presentar una metodología para el análisis socioambiental de los proyectos a fin de definir su nivel de riesgo socioambiental
- Identificar los estudios ambientales y sociales requeridos, que satisfagan los estándares de los organismos multilaterales de crédito y su sistema de salvaguardias
- Definir los procedimientos y las responsabilidades institucionales internos en esta materia

1.3.2 Alcances del MGAS

El MGAS será de cumplimiento obligatorio para todos los proyectos que se financien en el marco del **Programa de Obras Viales** y del **Programa de Energía, Agua y Saneamiento** del FFFIR, a fines del adecuado manejo de los aspectos ambientales y sociales de los mismos, asegurando tanto el cumplimiento de la legislación nacional como el de los estándares requeridos por el Banco. Se espera que el mismo se aplicara a futuros programas financiado por el BID.

Este MGAS pasa a formar parte de los documentos licitatorios de los proyectos del Programa de Obras Viales y el Programa de Energía, Agua y Saneamiento del FFFIR a ser financiados por el BID.

2. EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

2.1. Presentación

El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) es un organismo autárquico creado en el año 1997 mediante Ley N° 24.855 (“Ley de Desarrollo Regional y Generación de Empleo. Creación del FFFIR y privatización del Banco Hipotecario Nacional”), producto de la privatización del Banco Hipotecario Nacional, asignándosele la tarea de administrar los fondos provenientes de la venta de acciones del Banco Hipotecario Nacional S.A. El Decreto 924/97 a su vez, reglamenta la Ley 24.855.

Desde el año 2015, a través del dictado del Decreto 212/15, el Fondo funciona en el ámbito del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

Constituye la **misión** del Fondo, la asistencia financiera a las Provincias, al Estado Nacional y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindándoles financiamiento para la ejecución de obras de infraestructura económica y social, tendientes a la utilización de mano de obra intensiva, la integración nacional, la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el desarrollo regional y el intercambio comercial.

Es la **visión** del Fondo trabajar para acercarse a todas las jurisdicciones de manera eficaz y eficiente, con la excluyente finalidad de continuar siendo un instrumento para el mejoramiento de la vida cotidiana de los argentinos en todo el territorio nacional, invirtiendo en la capacitación de su personal, la renovación de la estructura tecnológica y la mejora constante de sus sistemas informáticos.

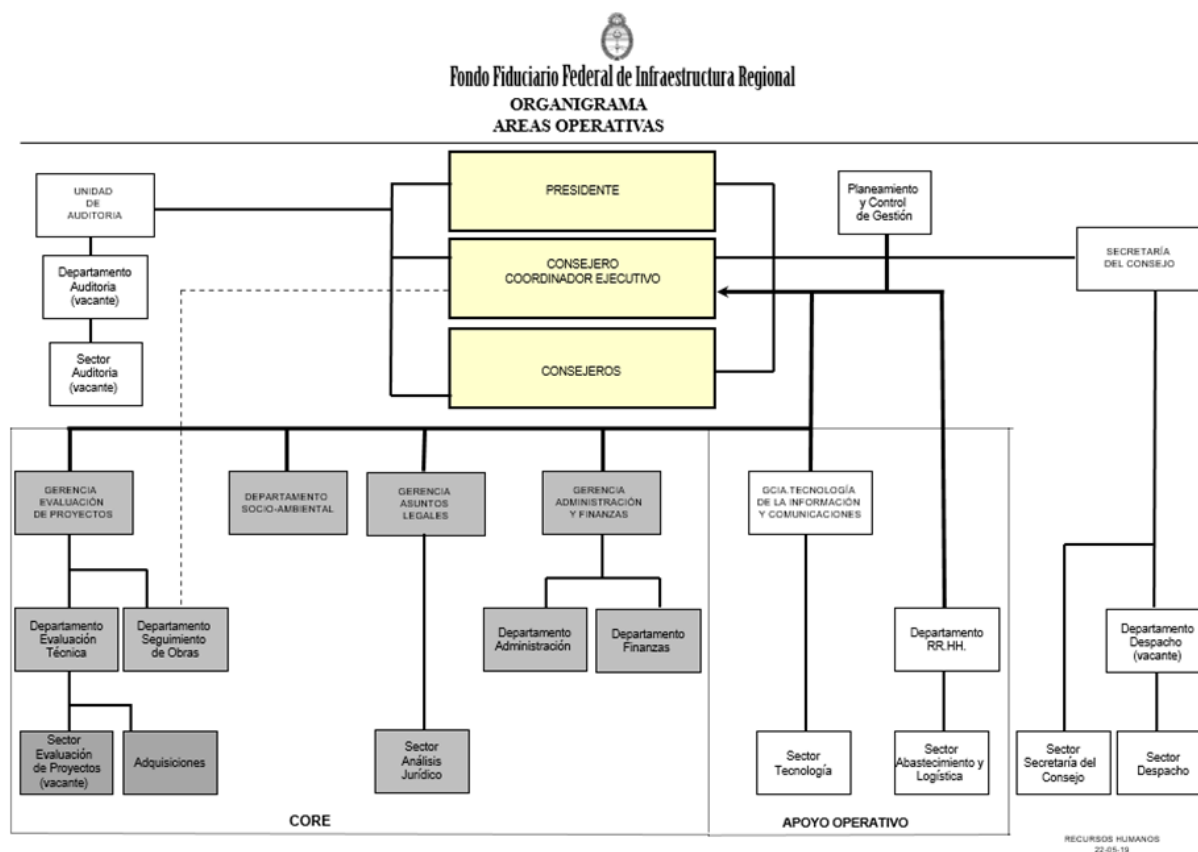
Desde el FFFIR se efectúa el acompañamiento y seguimiento de cada proyecto financiado, de modo de asegurar que se priorice:

- el bienestar general,
- la integración regional,
- la creación de empleo,
- la preservación del medio ambiente,
- la disminución de los desequilibrios socioeconómicos
- y el respeto a la legalidad en la contratación y ejecución de las obras.

El Fondo busca promover el desarrollo regional, priorizando la financiación de aquellos proyectos tendientes a la utilización de mano de obra intensiva y a la disminución de los desequilibrios socioeconómicos. En este sentido, al 2019 se han financiado más de 600 proyectos en todo el país, generando más de 8.658.000 jornales.

La multiplicidad de obras de infraestructura financiadas por el FFFIR abarca un amplio listado de categorías: viales, arquitectura, energía, hidráulica, saneamiento y urbanismo, manteniendo siempre el objetivo de incidir positivamente en las comunidades, fortaleciendo sus economías y apuntalando el desarrollo y la generación de empleo genuino.

La estructura del FFFIR, conformada por una Presidencia, un Consejo Coordinador Ejecutivo, cuatro Gerencias y una Unidad de Auditoría es la siguiente:



Los integrantes del Consejo de Administración del FFFIR son designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El fideicomisario son el Estado Nacional; los beneficiarios, las jurisdicciones que adhieran (Decreto 924/97reglamentario).

Sus facultades son:

- Aprobar los proyectos de obras de infraestructura económica y social que le sean presentados por las jurisdicciones y disponer su

financiamiento conforme al reglamento operativo y al manual de procedimientos mencionados en el Artículo 14 inciso b) del presente Decreto. La evaluación de los proyectos deberá contemplar criterios de valoración que garanticen el objetivo de incentivar la generación de nuevos empleos a nivel nacional.

- Auditar la ejecución de los proyectos de obras de infraestructura económica y social respecto de los cuales hubiera dispuesto su financiamiento conforme el reglamento operativo y el manual de procedimientos.
- Requerir informes, evaluaciones y dictámenes de organismos competentes y contratar a terceros a los mismos efectos.
- Disponer la creación e implementación de un régimen de reservas.

2.2. Programas Gestionados por el FFFIR

Desde su creación en 1997, las obras de infraestructura financiadas por el FFFIR abarcan un amplio listado de categorías: viales, arquitectura, energía, hidráulica, saneamiento y urbanismo; siempre con el objetivo de incidir positivamente en las comunidades, fortaleciendo sus economías y apuntalando el desarrollo y la generación de empleo genuino. Se prioriza la financiación de aquellos proyectos tendientes a la utilización de mano de obra intensiva y a la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, este Organismo ha financiado más de 600 proyectos en todo el país.

Según el **Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos** (ROyMP) del FFFIR

(<http://www.fffir.gob.ar/images/NormativaFFFIR/ReglamentoOperativoYMP.pdf>), “la solicitud de asistencia financiera será elevada por la jurisdicción donde se localiza el proyecto a través de una nota rubricada por el señor Gobernador o Representante Legal, dirigida al señor Presidente del FFFIR, quien la pondrá a consideración del Consejo de Administración (CA).

Conjuntamente o con posterioridad a la solicitud de asistencia financiera, las jurisdicciones presentarán toda la documentación del proyecto, conforme lo establecido en la "Guía de Elaboración de Proyectos", así como el "Formulario de Información de Proyecto" firmado por el responsable técnico del proyecto y el máximo representante del área solicitante. En el caso de la Nación, por el representante del Estado Nacional ante el FFFIR. (conf. art. 23 del Decreto N° 924/97).”

“Los proyectos serán analizados desde el punto de vista técnico, económico, legal y financiero, debiendo la jurisdicción acompañar, según corresponda, la documentación que se detalla en el Anexo I”, de dicho Reglamento.

2.3. Proyectos a ser financiados por el BID – FFFIR

A los efectos de este MGAS, los proyectos que se presentan para ser financiados por el BID corresponden al Programa de Obras Viales del FFFIR, que incluye diferentes tipologías de obra, como, por ejemplo: obra básica, pavimentación y repavimentación, y el Programa de Energía, Agua y Saneamiento, que incluye obras de infraestructura eléctrica, como la expansión y el mejoramiento de los sistemas de distribución y transmisión de energía eléctrica, entre otras; y de agua y saneamiento, como la ampliación y mejoramiento de sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable, redes de recolección y tratamiento de aguas residuales y sistemas de drenaje y control de inundaciones.

El Programa vial permitirá ampliar la capacidad de financiamiento del FFFIR a fin de poder aumentar la ejecución de obras de infraestructura vial, dado que, el deterioro en la calidad de las vías ha generado, no solo demoras en la circulación y disminución en la seguridad vial, sino también incrementos en los costos de logística: tiempo y mantenimiento de vehículos. Los diseños obsoletos que impactan en demoras, eficiencia y seguridad vial y la falta de conexión entre puntos estratégicos, dentro y fuera de los sectores urbanos, implican mayores costos de transporte.

Por su parte, el Programa de Energía, Agua y Saneamiento, permitirá ampliar la capacidad de financiamiento del FFFIR a fin de ampliar el acceso y mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de infraestructura de energía, agua y saneamiento.

2.4. Elegibilidad de inversiones

2.4.1. Criterios de elegibilidad según el ROyMP

Según el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos del FFFIR, “se considerarán como factores preponderantes para la priorización de la asistencia financiera, aquellos proyectos que:

1. Sean intensivos en el empleo de mano de obra.
2. Promuevan la integración regional.
3. Estén vinculados con el Programa Nacional de Obra Pública.
4. Respondan a legislación de emergencia o situación de emergencia.
5. Estén en estado más avanzado (con factibilidad técnica, económica y **ambiental**) y con documentación de obra.
6. **Tengan consideraciones respecto del cuidado del medio ambiente.**
7. El financiamiento otorgado por el FFFIR. represente el menor porcentaje de los requerimientos de fondos totales para la concreción de la obra.

8. *Tengan factibilidad económica aprobada de organismos de crédito nacionales y/o internacionales.*
9. *Constituyan obras paralizadas de alto impacto en el desarrollo regional.*
10. *Cuando las solicitudes de asistencia financiera de las jurisdicciones superen la capacidad financiera del Fondo, la disponibilidad de cupos de aquellas se tomará como criterio para la priorización de los créditos”*

Según el ROyMP la presentación al FFFIR del proyecto para el cual se solicita financiación por las autoridades jurisdiccionales debe incluir el Estudio de Impacto Ambiental y/o factibilidad Ambiental emitida por el área jurisdiccional correspondiente.

2.4.2. Criterios ambientales y sociales de elegibilidad

En el marco de presente Programa serán elegibles los proyectos que cumplan con los requerimientos del presente MGAS, además de respetar los preceptos de la normativa ambiental y social nacional y local, así como con las políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID.

Los proyectos deberán presentar una Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS), que incluya las pertinentes medidas de mitigación y compensación, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) requerido para las diferentes etapas del proyecto, y un Plan de Consulta Pública. Si se considerara necesario, deberán presentarse otros estudios y/o planes ambientales o sociales que fueran requeridos.

Si los proyectos implicasen reasentamiento involuntario o afectasen a pueblos originarios, deberá presentarse asimismo un Plan de Reasentamiento Involuntario o un Plan para Pueblos Indígenas, según corresponda (ver **Anexos 8 y 9**).

El proyecto deberá considerar especialmente la prevención de:

impactos negativos permanentes en

- áreas protegidas
- áreas de importancia para la conservación
- que afecten el patrimonio cultural

impactos negativos significativos

- sobre especies en peligro
- sobre especies amenazadas de extinción
- impactos ambientales que no puedan ser mitigados aceptablemente
- costos sociales que afecten de manera significativa la capacidad de resiliencia de las comunidades alcanzadas o sean considerados inaceptables para la autoridad de aplicación, el FFFIR y para el BID.

2.5. Criterios de No elegibilidad

El MGAS no contempla el desarrollo de actividades excluidas en la Política de Gestión y en las Salvaguardas del BID.

No serán elegibles para ser financiados por el **Programa de Obras Viales o el Programa de Energía, Agua y Saneamiento** del FFFIR aquellos proyectos considerados de **Categoría A**¹ de acuerdo a la categorización del BID, si correspondiera:

- Impactos adversos irreversibles: proyectos que generan impactos ambientales o sociales para los cuales se requiere un periodo de tiempo significativo para revertir determinado efecto.
- Impactos sin precedentes: proyectos en los que a raíz del desconocimiento o falta de experiencia sobre la tecnología y/o acciones del proyecto se genera un grado de incertidumbre alto respecto a los riesgos ambientales o sociales reales o potenciales que conlleva dicha tecnología/acción
- Impactos de naturaleza diversa: proyectos que exacerben de manera significativa los impactos potenciales sobre el medio natural y/o riesgo de desastres naturales potenciales. Esta situación resulta cuando se genera una alteración en el ambiente a causa de la presencia de diversos agentes de forma simultánea, o cuando suceden diversas acciones que producen impactos acumulativos o sinérgicos.
- Hábitats naturales críticos: proyectos que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales críticos o de importancia para la conservación.
- Pueblos indígenas y/o minorías étnicas: proyectos que signifiquen la pérdida de hábitats naturales y/o áreas de uso de comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad, importantes para su supervivencia. Entre las situaciones que se deberán considerar para determinar los impactos negativos significativos sobre pueblos indígenas, se encuentran las siguientes:
 - disrupciones culturales significativas que afecten seriamente prácticas y modos de vida tradicionales.

¹ El Grupo BID clasifica todos los proyectos en una de las cuatro categorías de impacto ambiental y social. La categoría A incluye proyectos cuyos impactos ambientales y sociales son más pronunciados y en su mayoría permanentes, mientras que los proyectos de la categoría B generan principalmente impactos locales y a corto plazo, y los de la categoría C tienen impactos mínimos o negativos. Una cuarta categoría, B13, se reserva a préstamos distintos de los de inversión e instrumentos de financiamiento flexible, como operaciones con intermediarios financieros y préstamos en apoyo de reformas de política.

- impactos sobre tierras comunitarias y recursos naturales de uso tradicional afectando irreversiblemente los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas.
- afectaciones sobre recursos y prácticas culturales de valor cultural o espiritual, entre otras cuestiones.
- Reasentamiento involuntario de comunidades y/o familias: proyectos que generen la relocalización y/o pérdida de hogares y/o pérdida de medios de subsistencia de un número de personas significativo o de personas vulnerables.
- Sitios y/o patrimonio cultural crítico: proyectos con impactos negativos no mitigables que afecten en forma significativa al patrimonio y/o bienes culturales críticos, incluyendo sitios arqueológicos, históricos, etc.
- Tratados y/o convenios internacionales: proyectos que contravengan las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, tratados o convenios ambientales internacionales firmados por el país y relacionado a las actividades del proyecto o sus impactos.
- Planificación territorial: proyectos que interfieren con pautas específicas de planificación territorial, áreas previstas para urbanización y/o expansión urbana.
- Riesgos de colapso sobre infraestructura y/o servicios existentes: proyectos que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y/o servicios existentes en un área determinada y cuyos riesgos/impactos asociados no puedan ser mitigados a través de acciones de mitigación adecuadas.

3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL FFFIR

3.1 Arreglos institucionales del FFFIR a nivel nacional y provincial

Por medio de la suscripción de Convenios el FFFIR otorga préstamos a las jurisdicciones que así lo soliciten con el objetivo de realizar diferentes obras de infraestructura que resulten prioritarias para el cumplimiento de sus objetivos.

La participación de las provincias en el FFFIR está regulada por la Ley 24.855 Artículo 11 que establece que (...) *“Las provincias podrán adherir al fondo y celebrar convenios, en los que detallarán el listado y cronograma de ejecución de las obras a financiar total o parcialmente por el fondo”*.

En los considerandos del Decreto 924/97, que reglamenta la Ley N° 24.855 se señala que las jurisdicciones deben adherir al régimen instituido por esta ley a los fines de permitir la administración de los recursos del FFFIR conforme a los cupos de participación que a cada una de ellas corresponda. (artículo sustituido por Decreto N°1098/98 B.O. 24/9/98).

El mismo decreto, establece que, a los efectos de solicitar asistencia financiera, las jurisdicciones deberán dictar la norma jurídica que corresponda, aprobando el o los proyectos propuestos, autorizando el endeudamiento de la jurisdicción con el FFFIR, otorgando en garantía los fondos de coparticipación que le correspondieren y aprobando formal y sustancialmente los instrumentos contractuales celebrados relativos a cada operación. El Estado Nacional, a los mismos efectos, deberán dictar la norma jurídica que corresponda, aprobando el o los proyectos propuestos y autorizando el endeudamiento con el FFFIR.

3.2 El FFFIR y la Sustentabilidad Ambiental y Social

El **Departamento Socio-Ambiental (DSA)** del FFFIR, ha sido creado a efectos de la evaluación, seguimiento y control de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos y programas a ser financiados por la institución, en el marco de su política de sustentabilidad

Asimismo, será el área responsable de la evaluación, gestión y seguimiento ambiental y social de los proyectos financiados por el BID, particularmente de los procedimientos y requisitos establecidos en el presente MGAS.

El DSA estará conformada por profesionales especializados en la temática ambiental y social, a cargo de la evaluación y seguimiento de los aspectos ambientales y sociales de los proyectos enmarcados en el Programa, quienes trabajarán de manera transversal con las demás áreas del FFFIR.

Son responsabilidades del DSA:

- La revisión preliminar de los EIAS, PGAS, los Planes e Informes de Consulta y Planes de Reasentamiento Involuntario (PRI) y de los Planes de Pueblos Indígenas (PPI), estos últimos si correspondieran (en casos donde no hay impactos significativos), así como de otros estudios/planes ambientales o sociales que resultaren necesarios para la evaluación.
- La aprobación de los documentos enunciados en el apartado anterior, en función de su calidad y contenido.
- Asegurar que los proyectos, así como las medidas de mitigación ambientales y sociales propuestas cumplan con los requerimientos ambientales y sociales del Programa y que estos se incorporen en los Pliegos de Licitación Pública.
- Obtener la No Objeción (NO) del BID de los EIAS/PGAS, los Planes e Informes de Consulta, los PRI, los PPI, así como de otros estudios/planes ambientales o sociales, si fueran requeridos.
- Controlar que los proyectos cuenten con las autorizaciones ambientales y sociales requeridas por la normativa de aplicación según la jurisdicción que corresponda.

- Asesorar a las Provincias y participar en los procesos de consulta significativa.
- Revisar y aprobar los Pliegos y TdR de cualquier actualización de los PGAS, PRI o PPI, si se requirieran, a ser actualizados por el Contratista.
- Visitar periódicamente las obras, en coordinación con las Provincias, a efectos de supervisar la implementación de los PGAS, PRI o PPI aprobados.
- Monitorear y supervisar la implementación de las medidas de mitigación y los Programas de Monitoreo ambiental y social identificados en los EIAS.
- Elaborar y elevar Informes de seguimiento del área para ser elevados al BID.
- Llevar registro actualizado de toda la documentación ambiental y social del Programa.
- Participar de las Misiones de Supervisión del BID.

3.3 Responsabilidades institucionales específicas nacionales y provinciales. Autoridades de aplicación relevantes

En el ámbito nacional del FFFIR, se creará una **Unidad Ejecutora (UE)** a cargo de un Coordinador Ejecutivo que organizará las tareas de las áreas Técnica, Ambiental y Social, Legal y Administrativo/Contable, acorde a la estructura y funciones de las mismas. El organigrama de esta UE incluirá un Coordinador Ejecutivo, un Coordinador Técnico, un Coordinador Ambiental y Social, un Coordinador Legal y un Coordinador Administrativo/Contable.

La Unidad Ejecutora tendrá a su cargo la coordinación y supervisión del Programa, oficiando de nexo entre el Fondo y las autoridades y organismos públicos, nacionales y provinciales responsables de la implementación de cada proyecto.

Serán funciones de la Unidad Ejecutora:

- Poner en funcionamiento el equipo técnico para su implementación eficaz y eficiente a lo largo de su ejecución
- Gestionar los recursos necesarios para la ejecución del Programa
- Desarrollar las tareas necesarias para el cumplimiento de las condiciones contractuales acordadas con el BID
- Comunicar e informar al BID el cumplimiento de obligaciones contractuales acordadas en el marco del Programa
- Efectuar la supervisión y seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por las Provincias, incluyendo los aspectos ambientales y sociales.
- Procesar las solicitudes de desembolsos y las rendiciones de gastos del Programa
- Auditar el correcto desempeño del Programa

En el ámbito provincial la implementación será responsabilidad de cada organismo ejecutor, designados formalmente por la provincia, en el marco de los convenios e instrumentos formales de acuerdo entre el FFFIR y la contraparte.

Esta contraparte tendrá a su cargo la confección de los pliegos, la aprobación de los mismos, la realización del llamado y su posterior adjudicación, el control de los trabajos conforme lo establece el convenio oportunamente firmado con el FFFIR. Cada organismo ejecutor instrumentará el pago de la obra, conforme lo celebrado con el organismo nacional.

3.4 Marco institucional para la implementación del MGAS a nivel nacional y provincial

A nivel nacional, la UE, a través del DSA, será la responsable del cumplimiento del MGAS y de la inclusión de los compromisos ambientales y sociales en cada convenio e instrumento formal de financiación que se defina con las provincias.

A nivel local, en cada caso, la contraparte adjudicataria de la financiación, dando respuesta a los compromisos establecidos en el Convenio con el FFFIR, deberá definir la entidad responsable de la gestión ambiental y social y de la implementación del MGAS. Esto deberá incluir la disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de estas funciones, incluyendo la designación de un responsable ambiental y uno social.

La implementación del MGAS complementa las obligaciones derivadas del cumplimiento de las normativas ambientales y sociales definidas en los ámbitos nacional, provinciales y municipales, según corresponda en cada caso.

3.5. Procedimientos específicos a nivel nacional y provincial

El programa será co-ejecutado por: 1) el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, órgano descentralizado del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación (SAF 954); y 2) el Ministerio de Hacienda de la Nación a través de la Dirección de Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio, en adelante denominada (DPPEESA), dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales de la Secretaría de Hacienda (SAF 354).

La DPPEESA será responsable de solicitar y recibir los fondos del BID y transferir los mismos al FFFIR de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Transferencia y Ejecución Financiera.

El FFFIR será responsable de la gestión de todos los recursos transferidos y de todo lo relativo a la ejecución física y contable - financiera de los proyectos de obras a ser ejecutados con los recursos del Programa, por parte de las jurisdicciones subnacionales.

Coordinación y supervisión a nivel nacional

La coordinación y supervisión del Programa a nivel nacional se realizará a través de la UE, quien será responsable de la administración, implementación, seguimiento, evaluación y monitoreo del mismo, tanto en sus aspectos técnicos como ambientales y sociales

Coordinación interinstitucional a nivel nacional y provincial

Corresponderá a la UE, la coordinación interinstitucional con organismos de la administración pública nacional (central y descentralizada), con las contrapartes provinciales y organismos de la administración pública provincial, así como con organismos internacionales, en todas aquellas cuestiones inherentes a la ejecución del Programa.

4. MARCO NORMATIVO

4.1 Marco Normativo Ambiental Nacional

En Argentina, son tres los niveles de gobierno que tienen competencia y legislación con respecto a la gestión y control ambiental y social: la nación, las provincias y los municipios. Sin embargo, la legislación y los niveles de fiscalización ambiental y social son muy dispares entre los dos últimos niveles. También los aspectos sociales, particularmente los vinculados al Reasentamiento Involuntario (RI) y a los Pueblos Indígenas (PI), cuentan con normativa de aplicación a distintos niveles.

La nación ha elaborado y está implementando legislación fundamental para proteger y mejorar los bienes y servicios naturales y la calidad de vida de la población. En este sentido, la Ley General del Ambiente N° 25.675/02 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del medio ambiental y social, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

El Gobierno de Argentina ha divulgado la articulación entre ésta y otras Leyes de protección del medio socio ambiental. Las provincias y los municipios cuentan con distintos instrumentos normativos para manejar temas ambientales y sociales en el desarrollo de proyectos de infraestructura.

El **Anexo 4**, presenta un relevamiento preliminar y clasificado, aunque no exhaustivo y de carácter orientativo, del marco legal y normativo nacional de los principales tópicos en materia ambiental y social (especialmente EIA, participación, reasentamiento involuntario/pueblos indígenas y otros temas relevantes).

Durante la ejecución del Programa, en todos los proyectos deberá considerarse, como mínimo, la legislación indicada en el Anexo y sus actualizaciones. La información completa al respecto y los requisitos específicos que de ella se

desprendan, así como las de las correspondientes autoridades provinciales / municipales de aplicación para cada proyecto, serán acabadamente identificadas y presentadas por los Organismos Provinciales intervinientes durante la fase de Identificación y Clasificación de los proyectos, tal como se prevé en los procedimientos que se describen en este MGAS. Lo anterior aplica también, cuando fuera necesario, para la elaboración de los PRI, y PPI.

En todos los TdR de EIAS para proyectos de cualquier categoría, se incluirá una matriz legal de cumplimiento de acuerdo a la legislación Nacional, provincial y municipal que corresponda al proyecto.

4.2 Marco Legal del FFFIR

El marco normativo aplicable referido al FFFIR es el siguiente:

- LEY 24855 (25/07/1997): Ley de Desarrollo Regional y Generación de Empleo. Creación del FFFIR y privatización del Banco Hipotecario Nacional
- DECRETO 677/97 (25/07/1997): Promulgación de la ley 24.855. Diversos artículos fueron observados
- DECRETO 924/97 (19/09/1997): Reglamentación de la Ley 24.855. Definiciones. Administración y operativa general del FFFIR. Transformación del Banco Hipotecario Nacional en Banco Hipotecario S.A. Estatuto y actividades. Capitalización del Fondo. Función del BNA. Disposiciones complementarias
- RES.JGM. 366/97 (07/11/1997): Aprobación del "Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo de Administración" y el "Reglamento de Contrataciones" del FFFIR
- RES.JGM. 427/97 (18/12/1997): Aprobación del "Reglamento Operativo y el Manual de Procedimientos para brindar Asistencia Financiera" del FFFIR
- DECRETO 228/98 (06/03/1998): Aprobación "Contrato de Fideicomiso" y "Contrato de Fideicomiso de Asistencia".
- DECRETO 408/03 (24/07/2003): Transferencia del FFFIR del ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación al ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
- RESOLUCIÓN MINPLAN 1034/04 (20/12/2004): Delegación en la Secretaría de Obras Públicas de la representación de la Jurisdicción Estado Nacional ante el FFFIR
- RESOLUCIÓN C.A. FFFIR 01/05 (29/03/2005): Resolución del Consejo de Administración del FFFIR, modificación del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos
- DECRETO 875/12 (07/06/2012): Se modifican los organigramas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio del Interior y Transporte. Se modifican los Decretos 27/03 y 357/02.

4.3. Políticas Operacionales, Ambientales y Sociales del BID, aplicadas en los programas

4.3.1. Introducción

Para la preparación de este MGAS y de la operación en su conjunto, se han considerado las siguientes salvaguardas ambientales y sociales del BID, que serán de aplicación a todos los proyectos financiados por el BID.

En el sitio web <https://www.iadb.org/es/temas/sostenibilidad/acerca-de-nosotros> se presenta mayor información sobre las salvaguardias, sus alcances, directrices de implementación y guías operativas.

- OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias.
- OP-704 Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres
- OP-710 Política de Reasentamiento
- OP-761 Política sobre de Igualdad de Género en el Desarrollo
- OP-765 Política de Pueblos Indígenas
- OP-102: Política de Acceso a Información

Las Políticas OP-703, OP-761 y OP-102 son de aplicación obligatoria en todos los casos.

La aplicación de las restantes Políticas OP-704, OP-710 y OP-765 estará condicionada a las características de cada caso, como resultado del proceso de evaluación y clasificación de cada proyecto.

4.3.2. Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)

El objetivo de esta Política es impulsar la misión del BID en América Latina y el Caribe para lograr un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo.

Los objetivos específicos de la Política son: (i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política y (iii) incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo.

Dentro de esta Política, debe analizarse la activación de las siguientes Directivas:

- Políticas del Banco (B.1). El Banco financiará únicamente operaciones y actividades que cumplan con las directrices de esta Política, y que sean consistentes con las disposiciones relevantes de otras Políticas del BID.
- Legislación y regulaciones nacionales (B.2). El Banco requerirá además que el prestatario garantice que la operación en cuestión se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país en el que se está desarrollando la operación, incluidas las obligaciones ambientales establecidas bajo los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM). En este sentido, y debido a que el desarrollo del Proyecto implica la realización de actividades susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, se ha requerido la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y Social que dará cumplimiento a las normativas ambientales provinciales y nacionales.
- Pre-evaluación y Clasificación (B.3). La Política del Banco requiere que todas las operaciones que éste financie deben ser pre-evaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos ambientales y sociales potenciales. Esta pre-evaluación se ha realizado y se ha clasificado la intervención como “Categoría B” pues, aunque se estima que la construcción puede causar ciertos impactos ambientales y sociales negativos localizados y de corto plazo, se dispondrán de medidas de mitigación efectivas para atenuarlos.
- Otros factores de riesgo (B.4). Además de los riesgos que representan los impactos ambientales, el Banco identificará y manejará otros factores de riesgo que puedan afectar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Entre los factores de riesgo figuran elementos como la capacidad de gestión de las agencias ejecutoras/patrocinadores o de terceros, riesgos derivados del sector, riesgos asociados con preocupaciones sociales y ambientales muy delicadas, y la vulnerabilidad ante desastres. Dependiendo de la naturaleza y gravedad de los riesgos, el Banco diseñará, junto con la agencia ejecutora/patrocinador o terceros, las medidas apropiadas para manejar tales riesgos. En este caso, se han detectado como principales riesgos, el riesgo sísmico y de aluviones, por lo cual se ha elaborado un documento específico con un análisis de estas problemáticas, que incluye las medidas de prevención y mitigación previstas en caso de su eventual ocurrencia.
- La preparación de evaluaciones ambientales, planes de gestión asociados y su implementación son responsabilidad del prestatario (B5). La evaluación ambiental deberá prepararse con un nivel de detalle adecuado en relación con los posibles efectos y riesgos del proyecto o programa. Las EIAS deberán incluir, como mínimo: evaluación previa y caracterización de impactos; consulta adecuada y oportuna y proceso de difusión de información y examen de alternativas, entre las que se incluye como opción la alternativa sin proyecto. El EIAS debe estar respaldado por los análisis económicos de las alternativas al programa y, si correspondiera, por evaluaciones económicas de costo-beneficio del impacto ambiental del plan y/o de las medidas de protección pertinentes. En esta directiva se estipulan, además, los requisitos para los programas de gestión ambiental y social (PGAS), incluidos la base institucional, el

reforzamiento de la capacidad, los plazos, los presupuestos, las consultas y los procedimientos de seguimiento para el éxito de la implementación. La elaboración del presente documento, el EIAS, responde a esta directiva.

- Consultas (B.6). Tomando en cuenta esta directriz, se incluyen los procedimientos y alcances de los procesos de consulta y participación ciudadana, para ser aplicados en cada uno de los subproyectos que se financie con recursos del Proyecto. Los requerimientos o alcance de estos procesos de consulta están en función de la Categoría Ambiental y Social de los subproyectos. Las directrices de implementación para la OP-703 definen la consulta como "diálogo constructivo entre las partes afectadas" y observan que: "las consultas provechosas reflejan que las partes involucradas están dispuestas a dejarse influenciar en sus opiniones, actividades y planes". Esta política requiere consultas con las partes afectadas y afirma que otras partes interesadas que expresaron apoyo o dudas sobre un proyecto determinado también pueden ser consultadas para obtener una gama más amplia de especialidades y perspectivas. Se recomienda que las consultas sean precedidas por un análisis de las partes involucradas para identificar quienes tienen interés en la cuestión y pueden ser afectadas por ella. En este caso no se ha identificado población indígena entre los afectados por la expropiación de terrenos y por ello no será necesario la realización de consultas adicionales.
- Supervisión y Seguimiento (B.7). El Banco será el responsable de supervisar el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardias y que estarán plasmados en el respectivo acuerdo de préstamo del Programa.
- Hábitats Naturales y Sitios Culturales (B.9). De acuerdo a esta directriz, el Banco no apoyará operaciones y actividades que en su opinión afecten negativamente hábitats naturales críticos o sitios de importancia cultural y física. Debe destacarse que, dentro del área de influencia directa del Proyecto, no se localizan bosques nativos ni masas forestales de importancia.
- Materiales peligrosos (B.10). Las operaciones financiadas por el Banco deberán evitar los impactos adversos al medio ambiente, a la salud y a la seguridad humana derivados de la producción, adquisición, uso y disposición final de materiales peligrosos, entre ellos sustancias tóxicas orgánicas e inorgánicas, plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes (COP).
- Prevención y Reducción de la Contaminación (B.11). Se deberá cumplir con los estándares de emisiones y vertimientos reconocidos por los Bancos multilaterales y con base en las condiciones locales y la respectiva legislación y normativas en el ámbito de la provincia donde se implemente el proyecto. Esta directiva será cumplida mediante la adopción del Programa de Gestión Ambiental de la Obra y Control de la Contaminación Ambiental detallado en el PGAS presentado en este documento, el cual incluye medidas para la reducción de contingencias durante la construcción y operación de la vía, con especial atención a minimizar las afectaciones relacionadas con generación de residuos sólidos, ruidos, emisiones a la atmósfera, contaminación de las aguas y movimientos de tierras.

- Adquisiciones (B.17). Se deberá asegurar que haya un proceso ambientalmente responsable de adquisiciones. Se fomentarán enfoques que contribuyan a que los bienes y servicios adquiridos para las operaciones financiadas por la institución se produzcan de manera ambiental y socialmente sostenible en lo que se refiere al uso de recursos, entorno laboral y relaciones comunitarias. Esta directiva será cumplida mediante la inclusión en los documentos de adquisiciones y licitación de los proyectos, en los que se exigirá que estos se ejecuten en cumplimiento con las Políticas del Salvaguardias del Banco activadas para el Proyecto.

4.4. Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP-704)

La política del BID sobre gestión del riesgo de desastres tiene por propósito orientar la acción de la institución para asistir a sus prestatarios en la reducción de riesgos derivados de amenazas naturales y en la gestión de desastres, a fin de favorecer el logro de sus objetivos de desarrollo económico y social.

La política tiene dos objetivos específicos, que están relacionados entre sí:

- Dar mayor eficacia al BID en la tarea de ayudar a sus prestatarios a realizar una gestión sistemática de los riesgos relacionados con amenazas naturales mediante la determinación de esos riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y la prevención y mitigación de los consiguientes desastres antes de que ocurran.
- Facilitar la prestación de asistencia rápida y adecuada del BID a sus países miembros prestatarios en casos de desastre, en un esfuerzo por revitalizar eficientemente sus iniciativas de desarrollo y evitar que se vuelva a crear una situación de vulnerabilidad.

Específicamente en el área de influencia del proyecto, deberán identificarse amenazas de desastres naturales como sismos, inundación, aluviones, incendios, movimientos en masas, vulcanismo, etc. tanto aquellos que puedan afectar el proyecto como aquellos cuyas consecuencias puedan ser agravadas por los efectos del proyecto. En los casos que corresponda, el proyecto deberá incluir en las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento las medidas necesarias para prevenir, mitigar o compensar las consecuencias negativas respecto a los desastres naturales.

4.5. Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710)

Esta política abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por un proyecto del Banco.

El objetivo de la política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso

de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento”.

Se aplica a todas las operaciones financiadas por el Banco, tanto del sector público como del privado, en las cuales el financiamiento del Banco esté encauzado directamente (como en el caso de los préstamos de inversión) o sea administrado por intermediarios (programas de obras múltiples, por etapas o de crédito multisectorial)”.

Para lograr los objetivos globales de esta política, las operaciones que puedan requerir reasentamiento serán evaluadas y preparadas conforme a dos principios fundamentales.

- Se tomarán todas las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento involuntario. Se deberá realizar un análisis profundo de las alternativas del proyecto para identificar soluciones que sean viables desde el punto de vista económico y técnico, eliminando a la vez, o disminuyendo al mínimo, la necesidad de reasentamiento involuntario. Al examinar las ventajas y desventajas de las alternativas, es importante que se cuente con un cálculo razonable del número de personas que probablemente se verán afectadas y con una estimación de los costos del reasentamiento. Se deberá prestar especial atención a los aspectos socioculturales, tales como la trascendencia cultural o religiosa de la tierra, la vulnerabilidad de la población afectada o la disponibilidad de sustitución en especie de los activos, particularmente cuando tengan consecuencias intangibles importantes. Cuando un número considerable de personas o una proporción significativa de la comunidad afectada tendrían que ser reasentados y/o los impactos afecten bienes y valores que son difíciles de cuantificar y compensar, después de haber explorado las otras posibles opciones, se debe considerar seriamente la alternativa de no seguir adelante con el proyecto.
- Cuando el desplazamiento sea inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y adecuada. La indemnización y la rehabilitación son consideradas equitativas y adecuadas cuando aseguren que, en el plazo más breve posible, las poblaciones reasentadas y las receptoras: i) lograrán unos estándares mínimos de vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios (tales como agua potable, saneamiento, infraestructura comunitaria, titulación de tierras) que sean, como mínimo, equivalentes a lo que tenían anteriormente; ii) recobrarán todas las pérdidas causadas por dificultades transitorias; iii) experimentarán un mínimo desmantelamiento de sus redes sociales, oportunidades de trabajo o

producción y del acceso a recursos naturales y servicios públicos; y iv) dispondrán de oportunidades para el desarrollo social y económico”.

Existen ciertas características de contexto que afectarán a la preparación de los componentes de reasentamiento de una operación del Banco, a saber:

- Magnitud.

Cuando el número de personas que haya que reasentar sea pequeño (determinación que depende del marco de referencia concreto y del grado de desmantelamiento que represente para la comunidad), el grupo afectado no sea vulnerable y la titulación de los activos afectados sea clara, o el entorno institucional y el mercado ofrezcan oportunidades razonables para la sustitución de los activos o ingresos, y los factores intangibles no sean importantes, puede ser innecesaria la preparación de un plan de reasentamiento. En esos casos, se podrá tratar la reubicación por medio de disposiciones contractuales acordadas mutuamente antes de que avance el proyecto.

- Análisis del Riesgo de Empobrecimiento

Cuando la información de base indique que un número importante de las personas que se reasentarán pertenecen a grupos marginales o de bajos ingresos, se prestará especial consideración al riesgo de empobrecimiento que enfrentarán como consecuencia del reasentamiento debido a: i) la pérdida de vivienda, tierras, acceso a propiedad común u otros derechos a bienes raíces, debido a la falta de titulación transparente, presiones económicas u otros factores; ii) la pérdida de empleo; iii) la pérdida de acceso a los medios de producción; iv) la inseguridad alimentaria y el aumento de la morbilidad y mortalidad; v) la desarticulación de las redes sociales; y vi) la pérdida del acceso a la educación. Se llevará a cabo tan pronto como sea posible, un análisis detallado que abarque consideraciones de género, étnicas, ingreso y otros factores socioeconómicos, a fin de determinar los riesgos y elaborar medidas preventivas para reducirlos al mínimo. En esas circunstancias, se ofrecerá como opción la indemnización en efectivo, sólo si las condiciones económicas y sociales de la población afectada, el entorno institucional y del mercado de vivienda, o los servicios complementarios incluidos en el plan de reasentamiento permitan que su inversión asegure el restablecimiento del nivel de vida de la población afectada.

- Reasentamiento Temporal

Cuando un proyecto requiera la reubicación temporal de personas, las actividades de reasentamiento estarán sujetas a consideraciones y criterios que sean congruentes con esta política y, a la vez, se tomará en cuenta la naturaleza temporal del desplazamiento. El objetivo

continúa siendo reducir al mínimo la perturbación de la población afectada. Se dedicará especial atención a evitar los impactos negativos e irreversibles (tales como la pérdida permanente de empleo), a la prestación de servicios temporales adecuados y, cuando sea apropiado, a la indemnización por dificultades causadas por la transición.

4.6. Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761)

La presente política operativa toma en consideración la experiencia del BID en su apoyo a la integración de las mujeres como líderes, participantes y beneficiarias del desarrollo; refleja los avances en el estatus de la mujer y la igualdad de género ocurridos en la región, así como los desafíos emergentes; integra una perspectiva de género que busca que mujeres y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales; y acuerda mecanismos concretos para asegurar su aplicación efectiva y la evaluación de sus resultados.

El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del BID a los objetivos y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

La Política identifica dos líneas de acción: 1) la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y 2) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras.

La aplicación de esta OP se expresa a en las diferentes etapas de la obra, especialmente en el EslAS, al identificar los eventuales impactos con efectos diferenciados por género; al proponer las medidas de mitigación, asegurando equidad en la prevención y en el acceso a los beneficios; en el acceso a la información sobre el proyecto y en las posibilidades de expresar sus opiniones en las instancias de consulta pública.

4.7. Política sobre Pueblos Indígenas (OP-765)

El objetivo de la presente política es potenciar la contribución del Banco al desarrollo de los pueblos indígenas mediante el apoyo a los gobiernos nacionales de la región y a los pueblos indígenas² en el logro de los siguientes objetivos:

² Pueblos indígenas:, para los fines de esta política, es un término que se refiere a los pueblos que cumplen los siguientes tres criterios: (i) son descendientes de los pueblos que habitaban la región de América Latina y el Caribe en la época de la Conquista o la colonización; (ii) cualquiera que sea su situación jurídica o su ubicación actual, conservan, parcial o totalmente, sus propias instituciones y prácticas sociales, económicas, políticas, lingüísticas y culturales; y (iii) se autoadscriben como pertenecientes a pueblos o culturas indígenas o precoloniales.

- Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades de gestión.
- Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales y de la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.

Las actividades e instrumentos sujetos a la presente política abarcan todas las operaciones y actividades del FFFIR apoyadas con recursos del Banco, incluyendo productos financieros y no financieros.

La política contiene dos series de directrices. La primera requiere que el Banco emplee sus mejores esfuerzos para apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas. La segunda establece salvaguardias diseñadas para evitar o minimizar la exclusión y los impactos negativos que puedan generar las operaciones del Banco con respecto a los pueblos indígenas y sus derechos.

4.8. Política de Acceso a la Información (OP-102)

Mediante la aplicación de esta política el Banco quiere demostrar el uso transparente que hace de los fondos públicos y, al estrechar sus relaciones con los interesados, mejorar la calidad de sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento de capacidad. La política se aplicará a la información generada por el BID y a cierta información en su poder, con sujeción a una lista de excepciones.

Esta Política se aplica poniendo a disposición del público toda información relevante relacionada con cada proyecto del FFFIR en proceso de ser financiado por el BID. Esta información debe ser divulgada en el tiempo y la forma apropiada para mejorar la transparencia. La Política identifica dos requisitos particulares de divulgación de información: (i) la divulgación de documentos clasificados como “públicos” en el momento de su distribución al Directorio del BID; y (ii) la divulgación de información, por parte de los prestatarios, a las partes afectadas en un lenguaje y formato que permita la realización de consultas de buena fe.

Como parte de la implementación de esta Salvaguarda, se elabora un **Plan de Consulta pública** que, en base a un mapa de actores, define las modalidades, alcances, modalidades de convocatoria, lugares y fechas y formas de implementación de las correspondientes reuniones.

En el caso de que durante la fase de ejecución de la operación fueran elaborados nuevos documentos ambientales y sociales relevantes asociados a necesidades de las obras actuales o de eventuales nuevas adecuaciones de obra, también se harán públicos.

5. PRINCIPALES RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES PREVISIBLES PARA PROYECTOS A SER FINANCIADOS

5.1. Introducción

En este capítulo se describen los principales impactos ambientales y sociales que podrían ser generados por los diferentes proyectos del Programa de Obras Viales y el Programa de Energía, Agua y Saneamiento. La identificación de los impactos ambientales y sociales se aborda considerando actividades propias de la etapa de pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento de las obras viales. Para el desarrollo del análisis de esta sección se considerarán tanto impactos ambientales y sociales negativos como positivos, puesto que es importante gestionar los primeros como potenciar los segundos. Los impactos incluidos en el presente capítulo han sido identificados considerando las obras incluidas en la muestra de proyectos y los objetivos del Programa.

El impacto ambiental se define como la modificación neta significativa, sea positiva o negativa, de las condiciones, cualidades y/o aptitudes de un componente o proceso ambiental producida como consecuencia de una acción, proyecto u obra, en sus distintas etapas (pre-construcción, construcción, operación y/o mantenimiento). Dicho de otro modo, es la diferencia entre la situación del ambiente modificado como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación. Esta modificación puede afectar a los componentes y a los procesos que tienen lugar en el sistema ambiental considerado, tanto en sus aspectos naturales como socio-económicos.

Los impactos ambientales y sociales se identifican, valoran y evalúan en base al análisis de la multiplicidad de relaciones que tienen lugar entre las acciones del Proyecto y el medio receptor natural, social y económico. Ello se realiza basándose en la información disponible, en los detalles de los procesos intervinientes, en las características de la nueva obra y en la información generada a través de trabajo de campo en el sitio donde se realizará el Proyecto. Los impactos identificados en este capítulo deben tomarse como orientativos puesto que para cada obra deberá realizarse un análisis particular de riesgos e impactos en base al cual se desarrollará el PGAS específico. Es crucial que todos los impactos identificados que sean considerados relevantes tengan medidas asociadas en el PGAS.

5.2. Principales riesgos e impactos ambientales y sociales

Se presenta a continuación un listado de potenciales impactos ambientales y sociales asociados a proyectos viales, de energía, agua o saneamiento. Se destaca que dicho listado es genérico a los proyectos de referencia, variando conforme las características socioambientales del área de afectación, las cuales deben ser estudiadas detalladamente para realizar una identificación y valoración de impactos precisa.

Tabla 1. Listado de potenciales impactos ambientales y sociales asociados a proyectos del Programa de Obras Viales y Programa de Energía, Agua y Saneamiento del FFFIR

ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN		
<p>En esta etapa se pueden identificar impactos a la población y a las actividades (económicas, turísticas, etc.) asociados a la compra, expropiación de terrenos, viviendas y actividades (por ej. económicas), como así también vinculados al desplazamiento físico de viviendas y actividades económicas (y su posterior reasentamiento) para la liberación del derecho de vía.</p> <p>Asimismo, en esta etapa debe llevarse a cabo la difusión del proyecto y la consulta o audiencia pública, lo cual podrá ser valorado como un impacto positivo.</p>		
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN		
SISTEMA	FACTOR	IMPACTOS
MEDIO FÍSICO NATURAL	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la calidad del aire por la emisión sonora y vibraciones; emisiones gaseosas, de material particulado y generación de olores.
	AGUA	<ul style="list-style-type: none"> Calidad del agua Modificación de patrones de drenaje y escorrentía superficial por movimientos de suelos, levantamiento de árboles y vegetación, junto con la impermeabilización de suelos, terraplenes, entre otros.
	SUELOS Y GEOFORMA	<ul style="list-style-type: none"> Modificación de la topografía actual Afectación de estructura y calidad de suelos (compactación, erosión, contaminación), como, por ejemplo, incremento de procesos erosivos por pérdida de cobertura vegetal y modificación de la escorrentía superficial. Modificación de la estructura edáfica, a partir de la extracción de tierra vegetal (Horizonte O y A) Deterioro de la capacidad productiva de los suelos Afectación por excavaciones de trincheras para el tendido de redes subterráneas
	VEGETACIÓN Y FAUNA	<ul style="list-style-type: none"> Afectación a la vegetación por desbroce y tala de arbolado. Afectación sobre la fauna silvestre por pérdida de hábitat de espacios verdes, sitios de nidificación y alimentación. Perturbaciones a la fauna silvestre por la generación de ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas y de material particulado a la atmósfera.

ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN		
MEDIO ANTRÓPICO		<ul style="list-style-type: none"> Afectos de mitigación de pasafaunas en el proyecto vial o de mitigación de aves en proyectos de líneas de transmisión.
	PAISAJE	<ul style="list-style-type: none"> Modificación de la percepción y condiciones paisajísticas naturales (en este punto debe analizarse también desde la perspectiva del paisaje antrópico, conforme dónde se desarrolle el proyecto). Mejoras por reforestación (en los casos aplicables).
	POBLACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Molestias a pobladores y frentistas por las siguientes acciones y afectaciones: <ul style="list-style-type: none"> Actividades comerciales, turísticas y culturales Servicios Implantación de obrador y oficinas Circulación de equipos y maquinarias Preparación del sitio y accesos Limpieza del terreno Movimiento de suelos, construcción de terraplén, nivelación en cabeceras puente Construcción de paquete estructural y Pavimentación Generación y disposición de residuos Obras complementarias Ruidos y vibraciones Emisiones gaseosas y de material particulado Generación de olores y Calidad de aire Cortes y reducción de calzada Desplazamiento vial Riesgo de incremento de riesgo de accidentes viales Conectividad urbana Modificación en el paisaje Riesgos a la salud por emisiones Excavaciones en veredas y aceras
	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de demanda de servicios (energía eléctrica, agua, combustibles, recolección de residuos) Afectación de servicios por interferencias con las nuevas redes
	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS	<ul style="list-style-type: none"> Afectación a la actividad comercial e industrial de la zona. Por ejemplo, por limitaciones de acceso y molestias generadas por las acciones de obras como ruidos y vibraciones. Modificación y demoras de tránsito vinculado a las actividades productivas y económicas de la zona Restricciones de accesibilidad

ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN		
		<ul style="list-style-type: none"> • Dinámica productiva y comercial de la zona • Generación de empleo
	ASPECTOS SOCIO-CULTURALES	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación temporaria del acceso a viviendas, servicios y comerciantes (frentistas) • Afectación a comunidades originarios • Impactos de genero • Afectación de monumentos y sitios de culto por reubicación y limitaciones de acceso • Afectación a establecimientos educativos. Por ejemplo, por limitaciones de acceso y molestias generadas por las acciones de obras como ruidos y vibraciones. • Afectación a establecimientos hospitalarios. Por ejemplo, por limitaciones de acceso y molestias generadas por las acciones de obras como ruidos y vibraciones. • Afectación a establecimientos policiales. Por ejemplo, por limitaciones de acceso, circulación y molestias generadas por las acciones de obras como ruidos y vibraciones. • Afectación a estaciones de bomberos. Por ejemplo, por limitaciones de acceso, circulación y molestias generadas por las acciones de obras como ruidos y vibraciones. • Limitaciones de acceso a equipamiento y servicios públicos
	TURISMO Y ESPARCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación de establecimientos, sitios turísticos y de esparcimiento. Por ejemplo, por limitaciones de acceso y molestias generadas por las acciones de obras como ruidos y vibraciones. • Desarrollo económico vinculado a actividades turísticas y de esparcimiento
	ACTIVIDADES Y USO DEL SUELO	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación de las actividades y usos del suelo
	TRÁSITO Y TRANSPORTE	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación al tránsito y transporte por aumento de tiempos de desplazamiento, variación de flujo vehicular, posibles cortes viales y/o reducción de calzadas, molestias por circulación de equipos y maquinarias de obras, molestias por acciones de obras. • Afectación sobre la seguridad vial • Afectaciones del tráfico urbano, congestión.
	CONECTIVIDAD URBANA, MOVILIDAD E INTEGRACIÓN TERRITORIA	<ul style="list-style-type: none"> • Afectación de tiempos de desplazamientos • Afectación a la accesibilidad vial, de bicicletas y peatonal • Molestias para el acceso fluido a predios linderos a la zona de obra. Por ejemplo, a viviendas, campos, comercios. • Molestias para el acceso fluido a establecimientos educativos, hospitales, sitios culturales y turísticos • Afectación de la seguridad vial

ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN		
		<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la conectividad urbana por cortes de calles

ETAPA DE OPERACIÓN		
SISTEMA	FACTOR	IMPACTOS
MEDIO FÍSICO NATURAL	AIRE	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la calidad del aire por la emisión sonora y vibraciones; emisiones gaseosas, de material particulado y generación de olores, en los casos de proyecciones viales en zonas sin intervención vial previa. Mejora en la calidad del aire vinculado a las mejoras viales y la reducción de tiempos de circulación vehicular, en carreteras ya existentes.
	AGUA	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la escorrentía superficial por efecto barrera del terraplén Mejora de la calidad de aguas superficiales o subterráneas por la reducción de la descarga de efluentes cloacales sin tratamiento
	SUELOS Y GEOFORMA	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de los procesos de erosión por cambios en la escorrentía superficial
	VEGETACIÓN Y FAUNA	<ul style="list-style-type: none"> Afectación a fauna por efecto barrera del proyecto, o aumento de efecto barrera. Atropellamientos de fauna.
	PAISAJE	<ul style="list-style-type: none"> Afectación por las nuevas obras y el tráfico asociado
MEDIO ANTRÓPICO	POBLACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Desplazamiento vial Conectividad urbana y movilidad Calidad de aire vinculado a las mejoras viales Seguridad Menores riesgos de enfermedades hídricas Mejor calidad de vida por el acceso a nuevos servicios
	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Acceso a servicios y equipamientos

ETAPA DE OPERACIÓN		
SISTEMA	FACTOR	IMPACTOS
	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades productivas y económicas • Modificación de tránsito y actividades productivas y económicas de la zona • Mayor accesibilidad • Dinámica productiva y comercial de la zona
	ASPECTOS SOCIOCULTURALES	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a monumentos y sitios de culto • Acceso a establecimientos educativos • Acceso a establecimientos hospitalarios • Acceso a establecimientos policiales
	TURISMO Y ESPARCIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad a sitios turísticos y áreas de esparcimiento • Desarrollo económico vinculado a actividades turísticas y de esparcimiento
	ACTIVIDADES Y USOS DEL SUELO	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a equipamiento y servicios públicos • Accesos viales desde zonas rurales y urbanas
	TRÁNSITO Y TRANSPORTE	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempos de desplazamiento • Variación de flujo vehicular
	CONECTIVIDAD URBANA, MOVILIDAD E INTEGRACIÓN TERRITORIA	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilidad vial, de bicicletas y peatonal • Tiempos de desplazamientos • Seguridad vial • Acceso a zonas rurales y urbanas • Acceso a bienes y servicios básicos • Acceso a establecimientos educativos, hospitales, puntos culturales y turísticos

6. EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS

6.1. Introducción

Con el objetivo de realizar una adecuada evaluación y gestión ambiental y social, este capítulo presenta el procedimiento a seguir para los proyectos que podrían ser financiados por los programas que el FFFIR gestione, o a los que ésta presta servicios, una lista de criterios de elegibilidad, la delimitación del Área de Influencia de los proyectos (AI), tanto directo como indirecto, la metodología de categorización de los mismos (tipos de análisis, estudios y medidas de gestión requeridos en función de las diferentes categorías) y los procedimientos y responsabilidades de gestión socio-ambiental a lo largo del ciclo de los proyectos.

Los proyectos primeramente se categorizarán según su tipo, en diferentes niveles de riesgo ambiental y social, y de acuerdo con esta categorización, complejidad e impactos, se planeará el alcance de los distintos estudios y planes de gestión requeridos.

El procedimiento de evaluación ambiental y social (EAS) se ha definido como un ciclo subdividido en las siguientes etapas:

- Identificación preliminar
- Anteproyecto
- Diseño ejecutivo
- Ejecución/Construcción
- Operación/ mantenimiento

Las Provincias y/u organismos interesados en presentar proyectos bajo la supervisión y asistencia del FFFIR, deberán dar cumplimiento a lo estipulado por este MGAS para cada una de las fases.

El DSA deberá acompañar todo el proceso hasta la emisión formal del dictamen por la autoridad de aplicación correspondiente, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, los lineamientos de este MGAS y asegurando también la participación de todos los organismos intervinientes, brindando asistencia técnica cuando sea necesario.

6.2. Procedimientos, metodologías e instrumentos de evaluación ambiental y social

En esta sección se presentan los procedimientos y herramientas de gestión ambiental y social, así como los detalles de los estudios y planes de gestión, requeridos para cada tipo de proyecto y para cada etapa de los mismos, además de identificar a los responsables de cada acción. Se considerará su potencial grado de impacto sobre el medio ambiente y social circundante para lo cual se desarrolló una clasificación.

En la Tabla a continuación se presenta una síntesis del proceso, con los responsables de cada etapa, así como las herramientas que se utilizan (variables en función de la categoría en la que se haya clasificado al proyecto y de los programas especiales que se implementen en cada uno).

Tabla 2. Resumen de los procedimientos

Etapas del Proyecto	Etapas de Procedimiento	Entidad Responsable	Herramienta metodológica	Entidad Supervisora
Identificación preliminar	Identificación y clasificación ambiental y social	Org. Provincial u otro / FFFIR	Perfil Ambiental y Social (PAS)	DSA
Anteproyecto	Análisis de factibilidad ambiental y social / Análisis de alternativas TDR de estudios	Org. Provincial u otro / FFFIR	Análisis de Factibilidad Ambiental y Social (AFAS)	DSA
Proyecto Ejecutivo	Elaboración de estudios ambientales y sociales	Org. Provincial u otro, o consultora contratada	TDR, EIAS, PGAS, PRI, PPI (de ser aplicables), y Consultas	DSA
	Comunicación y participación	Org. Provincial u otro, o consultora contratada	EIAS / PGAS y PRI, PPI (de ser aplicables), y Plan de Consultas	DSA
	Revisión	Organismo Ejecutor – FFFIR / Banco	EIAS / PGAS y PRI, PPI, (de ser aplicables), y Plan de Consultas	DSA
	Aprobación y (No Objeción del Banco)	Org. Provincial Competente y (Banco)	EIAS / PGAS y PRI, PPI, (de ser aplicables) y Informe de Consultas	DSA
Pre construcción	Divulgación	Org. Provincial u otro – FFFIR / Banco.	EIAS / PGAS y PRI, PPI, (de ser aplicables), y Consultas	DSA

Etapa del Proyecto	Etapa de Procedimiento	Entidad Responsable	Herramienta metodológica	Entidad Supervisora
Construcción	Implementación PGAS/PMAS	Contratista Org. Provincial Competente	Pliegos y Contratos de Obras y Supervisión, y Divulgación	DSA
	Inspección de obra	Inspección por el Organismo Provincial Competente o en quien se delegue	Informe de Seguimiento Socio Ambiental (ISSA) Informe Semestral del Desempeño Ambiental y Social de Proyectos (ISDASP) Informe Ambiental y Social de cierre	DSA
Operación / Mantenimiento	El seguimiento es responsabilidad de cada área operativa, según sea establecido en cada programa y proyecto.			

6.3. Elegibilidad de proyectos

Todos los proyectos que formen parte de los distintos programas gestionados por el FFFIR serán evaluados en cuanto a sus impactos ambientales y sociales por el DSA.

El financiamiento de estos proyectos se pondrá a disposición de las provincias sobre la base de una demanda dirigida, y bajo el cumplimiento de criterios de elegibilidad técnicos, financieros, económicos, ambientales y sociales.

Criterios ambientales y sociales de elegibilidad de proyectos

Los proyectos serán considerados elegibles desde el punto de vista de la EAS sobre la base del cumplimiento de las previsiones del presente MGAS, que surjan del Perfil Ambiental y Social (PAS) (ver Anexo 1). Adicionalmente a estos criterios, cada proyecto deberá cumplir con la legislación ambiental y social aplicable. Los principales criterios, que se desarrollan en los siguientes capítulos, son los siguientes:

- El proyecto debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) (ver anexo 5), así como otros tipos de estudios que, a criterio del DSA, fueran necesarios, los que deben ser revisados y aprobados por el DSA, la autoridad ambiental de la provincia y el programa bajo el cual sean financiados; además deberán ser acordes a las políticas de salvaguardia del Banco. El EIAS deberá incorporar los resultados de las consultas públicas realizadas.
- El EIAS debe incluir medidas de mitigación y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que contenga programas para las fases de construcción y

operación (ver Anexo 6). En el caso de proyectos que involucren reasentamiento involuntario o que afecten a pueblos originarios, incluirá un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) (ver Anexo 9), incluyendo la Compensación Final (salvo acuerdo en contrario incluido en el Contrato de Préstamo), y un Plan para Pueblos Indígenas (PPI) (Ver Anexo 8).

- Todos los costos asociados con la implementación de PGAS, PFRI o PFPI de proyectos o cualquier programa de medidas de mitigación, deberán ser contemplados en el presupuesto del proyecto y estar incorporados en el pliego de licitación de obra.
- El proyecto deberá demostrar sostenibilidad desde su evaluación ambiental y social (EAS), que incluye la prevención de: (a) impactos negativos permanentes en áreas protegidas, áreas con importancia para la conservación o que afecten al patrimonio cultural; (b) impactos negativos sobre especies en peligro o amenazadas de extinción; (c) impactos negativos ambientales y sociales que no puedan ser mitigados a niveles aceptables; y (d) costos sociales que se consideren inaceptables para la autoridad de aplicación, para el FFFIR conforme al MGAS y para el Banco, o que superen la capacidad de resiliencia de las comunidades afectadas.

Los proyectos se considerarán como no elegibles si presentan, por lo menos, una de las siguientes características:

- Los proyectos categorizados como de tipo A, no serán elegibles para ser financiados por el BID.
- Proyectos nuevos que generen impactos ambientales y/o sociales negativos sin precedentes, que resulten en transformaciones masivas del contexto social, de los recursos naturales y su capacidad de provisión de servicios y/o del medio natural y que no puedan ser mitigados con prácticas y acciones adecuadas.
- Que contravengan las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos, tratados o convenios ambientales y sociales internacionales firmados por el país;
- Que interfieren con pautas específicas de planificación territorial, áreas previstas para urbanización y/o expansión urbana;
- Que involucren impactos negativos no mitigables que afecten en forma significativa a hábitats naturales o al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueológicos e históricos;
- Que signifiquen la pérdida o degradación parcial de hábitats naturales críticos o de importancia, entre ellos, áreas con algún tipo de protección;
- Que signifiquen la pérdida de áreas de uso de comunidades indígenas u otros grupos humanos en situación de vulnerabilidad;
- Que generen riesgos de colapso sobre la infraestructura y servicios existentes en un área determinada;
- Que impliquen la construcción o utilización de presas existentes que superen los 10 metros de altura;

6.4. Etapa de identificación preliminar y categorización

Con el objetivo de realizar una adecuada gestión ambiental y social de los proyectos a ser presentados por los organismos participantes del Programa de Obras Viales del FFFIR, se realizará una primera etapa de Identificación y Clasificación de los mismos.

Así, será factible categorizarlos según su riesgo ambiental y social y, consecuentemente, identificar los estudios básicos requeridos. En aquellos casos donde la legislación aplicable determine la realización de otros estudios adicionales a los establecidos en este MGAS, estos deberán ser cumplimentados por las provincias durante la fase de elaboración de anteproyecto y proyecto ejecutivo.

6.4.1. Perfil Ambiental y Social (PAS) de proyectos

Los proyectos, de acuerdo a sus características, ubicación y condicionantes técnicos, serán identificados y clasificados inicialmente en 3 categorías (A, B o C) a partir del PAS (**Anexo 1**).

El PAS deberá ser completado por el personal técnico/ambiental/social del organismo provincial y/o municipal designado para interactuar con el proyecto y revisado por el DSA, quien analizará su alcance y pertinencia. De no contar con las capacidades institucionales para realizar esta primera etapa, se podrá solicitar al DSA abordar esta evaluación en conjunto con personal designado del organismo.

El PAS será presentado al FFFIR y deberá incluir fotos, planos y/o mapas, así como información obtenida en visitas de campo que ayuden a visualizar los aspectos ambientales y sociales más relevantes.

Es condición previa verificar que el proyecto cumpla con los requerimientos de elegibilidad de este MGAS. En caso de que la clasificación determine que el proyecto corresponde a la categoría A, el mismo no podrá ser financiado por el BID en el Programas de Obras Viales o el Programa de Energía, Agua y Saneamiento, por lo cual, en estos casos, aquí concluirá el proceso.

El PAS incluirá la identificación de la legislación ambiental y social provincial (y municipal si correspondiera) aplicable al proyecto.

El PAS concluye, básicamente, con la propuesta de categorización del proyecto en función del nivel de riesgo socio ambiental. De modo que sea posible determinar si es necesario desarrollar un EIAS, un PPI y/o un PRI como así también si se requieren otros estudios ambientales y/o sociales para cumplir con las Políticas de Salvaguardia del Banco y la normativa legal argentina pertinente.

En el caso de que surjan discordancias en el llenado del PAS del proyecto y/o sobre la clasificación ambiental y social del mismo, el DSA hará el análisis necesario y el cambio de categoría resultante será informado a los responsables del proyecto. Se prevé la realización de reuniones con los especialistas a cargo del PAS.

6.4.2. Delimitación del área de influencia (AI)

La delimitación del AI es el primer paso del proceso de EAS del proyecto, y es parte fundamental para la elaboración de su PAS. Es decir, todos los instrumentos de EAS, desde el más expeditivo hasta el más complejo dependerán de la delimitación apropiada del AI, la que deberá realizarse en el inicio del proceso, conjuntamente con la identificación preliminar, facilitando la retroalimentación entre tal definición y los aspectos ambientales y sociales susceptibles de ser impactados por el proyecto. Se presentan a continuación las definiciones constitutivas de dicha área.

- El AI para las evaluaciones ambientales y sociales debe tener en cuenta, dependiendo de la escala y localización del proyecto, la cuenca hidrográfica (superficial y/o subterránea), las condiciones climáticas, la pertenencia cultural de la población involucrada a comunidades más amplias, la conectividad del sitio del proyecto con entornos de diversas escalas, etc., No obstante, los aspectos a considerar para su delimitación dependerán de cada proyecto en particular. Una vez definida el AI, deberá ser plasmada cartográficamente.
- La delimitación del AI debe ser realizada por un equipo interdisciplinario cuya diversidad y cantidad de integrantes dependerá de la escala y complejidad del proyecto. Implica la evaluación de la extensión del territorio donde se manifiestan en forma significativa los impactos socio ambientales del proyecto. Se puede considerar que el AI es la envolvente del alcance territorial de la integración de los diversos impactos, tanto positivos como negativos, ambientales y sociales. Los impactos pueden manifestarse durante o luego de finalizadas las obras por la acción de cadenas de causa-efecto o cadenas causales complejas, que incluyen más de un eslabón en la relación entre proyecto y medio socio ambiental. Estos impactos, positivos o negativos, además de su temporalidad compleja, pueden producirse en forma difusa o concentrada, como consecuencia de la acción de uno o más procesos socio ambientales que pueden actuar en forma independiente, concurrente o sinérgica.
- Para la determinación del AI, se deben considerar los impactos socio ambientales del proyecto, prestando especial atención a los posibles impactos acumulativos de múltiples actividades. Asimismo, deben considerarse las características de los grupos sociales (especialmente aquellos más vulnerables como los pueblos indígenas o en condiciones de pobreza), desde el punto de vista de la ocupación del territorio, del uso de los recursos naturales y de las interacciones sociales y sus modos de vida, existentes a nivel local, incluyendo la visión y estrategia de desarrollo local de las instituciones gubernamentales.
- Dentro de esta AI se definen usualmente las áreas de influencia directa (AID), que incluye el Área Operativa (AO), y las de influencia indirecta (AII) y se realiza un diagnóstico socio ambiental o línea base (LBAS) de éstas. Los límites de estas áreas deben definirse en función de la probabilidad de interacción proyecto-medio socio ambiental. Esta relación depende de la

escala considerada, de la dinámica de los procesos socio ambientales, y de la intensidad de los impactos esperados.

Delimitación del área de influencia (AD)

A una escala local o AID (orden de magnitud espacial de hectáreas) se espera una probabilidad alta de interacción entre los proyectos y el medio socio ambiental, y la ocurrencia de impactos ambientales y/o sociales, directos e inmediatos.

Delimitación del área de influencia (AO)

El área operativa (AO), que estará incluida en el AID, comprende el territorio donde se ejecutan las acciones principales y complementarias necesarias para la construcción y operación del proyecto. Aquí se concentran los impactos socioambientales directos e inmediatos, vinculados fundamentalmente a la etapa de construcción, aunque también de funcionamiento.

El AO es el principal escenario de los impactos del proyecto, lo que exige conocer su situación socio ambiental (diagnóstico socio ambiental o LBAS) en mayor detalle que para el AI

Delimitación del área de influencia (AI)

A una escala regional (AI), en cambio, la probabilidad de interacción es, normalmente, de baja a media, y el orden de magnitud espacial es, habitualmente, de varias decenas o cientos de km². Los impactos son, generalmente, indirectos. Un ejemplo es la captación de grandes volúmenes de agua en relación a su disponibilidad en un arroyo, cuyos efectos pueden manifestarse incluso a distancias considerables de la toma de agua afectando otros usos.

6.4.3. Categorización de proyectos

Las categorías en las que se clasificarán inicialmente los proyectos son las siguientes:

Tabla 2. Categorización de los proyectos

<p>Categoría A</p>	<p>Proyectos con potencial capacidad de causar impactos ambientales y sociales negativos significativos (alta magnitud) e irreversibles, o que tengan implicaciones profundas que afecten los recursos naturales.</p> <p>Se considerarán los que involucren hábitats naturales, áreas protegidas, ecosistemas sensibles, y los que afecten áreas habitadas por comunidades indígenas o con recursos de patrimonio cultural, arqueológico o histórico de especial relevancia.</p>
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Los proyectos A requieren una EIAS) que incluya el PGAS y dos instancias de consulta pública (CP). Como se ha indicado, esta categoría de proyecto no es compatible para ser financiada por el BID en este Programa de Obras Viales o el Programa de Energía, Agua y Saneamiento, y su inclusión en esta tabla y en otras partes del MGAS, sólo tienen carácter informativo y contextual.
Categoría B	Proyectos que puedan causar principalmente impactos ambientales y sociales negativos moderados y reversibles al corto plazo, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas. Requieren una EIAS que incluya el PGAS y una instancia de CP.
Categoría C	Proyectos que no causen impactos ambientales y sociales negativos, o que los mismos sean de baja magnitud y reversibles al corto plazo. Requieren elaboración del PAS y PGAS. Eventualmente se evaluará la necesidad de una instancia de Participación Pública.

6.5. Etapa de anteproyecto

El anteproyecto deberá incluir un Análisis de Factibilidad Ambiental y Social (AFAS) donde se complementen, profundicen y puntualicen los aspectos identificados en el PAS. Se realizará un análisis de alternativas y en todos los casos se realizará un análisis de los impactos ambientales y sociales, con y sin proyecto, y se fomentará la participación o consulta de los actores involucrados. En el caso de que los TDR soliciten la presentación de alternativas de diseño, se presentará para todas ellas una evaluación comparativa de los potenciales impactos ambientales y sociales.

6.6. Etapa de proyecto ejecutivo

6.6.1. Estudios ambientales y sociales

A continuación, se presenta una síntesis de los Instrumentos de Evaluación y Gestión Ambiental y Social (IEGAS) que deberán ser desarrollados en función de la categoría que se asigne a cada proyecto.

EIAS

Corresponde su elaboración solamente para los proyectos de categoría B³. Entre sus objetivos básicos pueden mencionarse los siguientes:

- Identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales positivos y negativos del proyecto en su AI, incluyendo impactos acumulativos.

³ Los proyectos de categoría A no son elegibles para ser financiados por el BID según este MGAS.

- Elaborar y proponer alternativas (ver **Anexo 5**) para evitar, atenuar, mitigar o compensar los impactos negativos identificados y potenciar los positivos.
- Proponer planes y programas de gestión y seguimiento ambiental y social del proyecto durante su construcción y operación, con metas cuantitativas y recursos requeridos para su cumplimiento.
- Identificar y caracterizar el procedimiento de autorización ambiental y social específica según el proyecto en evaluación, y la legislación de la provincia y/o municipio que lo presenta, incluyendo todas sus etapas y los organismos públicos y privados que deberían participar para producir la certificación ambiental y social del proyecto. Efectuar un proceso semejante, considerando las salvaguardias ambientales y sociales del BID.

El EIAS contará, como mínimo, con los siguientes contenidos genéricos (**Anexo 5**):

- 1) Resumen Ejecutivo
- 2) Marco de política, legal y administrativo, tanto de los niveles nacional, provincial y, eventualmente, municipal, como de las Políticas de Salvaguardia del BID;
- 3) Una descripción sintética del proyecto, incluyendo planialtimetría y soporte cartográfico; ítems principales y cronograma de obra
- 4) Descripción de la línea de base, ambiental y social (LBAS), en el AI del proyecto, incluyendo una clara identificación, de corresponder, de los Pasivos Ambientales y Sociales existentes en el sitio de emplazamiento del proyecto y/o su AI;
- 5) Discusión de alternativas (y al menos la alternativa sin proyecto)
- 6) Identificación y evaluación de los probables impactos ambientales y sociales, de salud y seguridad, y de desastres naturales, incluyendo impactos acumulativos en toda el AI;
- 7) PGAS que contendrá una serie de programas, entre ellos, especialmente dos: uno que incluya todas las medidas de mitigación y otro que incluya el monitoreo del proyecto. Deberá también incluir un presupuesto.

Para estandarizar y asegurar la calidad de los EIAS y los PGAS de los proyectos a ser financiados por el Banco, en el **Anexo 5 y el Anexo 6** del presente MGAS se presentan los contenidos mínimos para desarrollarlos. Estos TDR serán particularizados para cada proyecto y consensuados con el DSA. Estos estudios pueden formar parte del proceso legal de EIAS en los casos de las jurisdicciones con legislación al respecto. Deben ser – en lo posible-- realizados por equipos independientes de profesionales especializados, con la participación de profesionales oriundos del área de ubicación del proyecto.

En cuanto a PPI y/o PRI, si fuera el caso, el EIAS deberán incluir los estudios de base necesarios para fundamentarlos. Estos estudios y los correspondientes Planes serán realizados por Especialistas Sociales y de acuerdo a sus TDR (**Anexos 8 y 9**).

PGAS

Las medidas de mitigación identificadas en el EIAS, con sus plazos/cronogramas, características y responsables, deben estar reunidas conformando cada uno de los programas del PGAS que complementa el sIAS. Este PGAS debe incluir también los procedimientos de monitoreo y control del cumplimiento y efectividad de las medidas de mitigación de la construcción y operación/mantenimiento de los proyectos.

El PGAS deberá establecer una línea de base ambiental y social actualizada al momento del inicio de la etapa de construcción para el seguimiento/monitoreo de los aspectos susceptibles de impacto en el AI del proyecto. Asimismo, el PGAS debe incluir, tanto los cronogramas de las actividades a realizar, que deben estar vinculadas al cronograma de las obras, como el organigrama de responsabilidades (en función de la envergadura de cada proyecto: responsable del plan; encargados de la implementación de cada medida y, la articulación institucional necesaria para ejecutarlo). También, según se establezca en cada programa, incluir una estimación de los costos de las medidas y de la operación del PGAS (un presupuesto en base al costo estimado para la implementación de las medidas).

Cada PGAS identificará los programas de monitoreo y gestión ambiental y social de las fases de construcción y operación/mantenimiento y, deberá contar con la conformidad del DSA y con la No Objeción del Banco. Estos deberán ser incorporados en los pliegos, de modo que, el Contratista una vez seleccionado y formalmente puesto en funciones, elabore un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) para la etapa de obras, que implementará como parte de sus responsabilidades y actualizado en base a las propuestas de la empresa contratista respecto del proyecto ejecutivo, localización del obrador, localización de canteras y préstamos, vías de acceso, etc. (**Anexo 7**).

En el **Anexo 6** se presenta una Lista General de Contenidos de un PGAS aplicable a un proyecto. Los PPI y/o PRI, cuando sean pertinentes, serán documentos complementarios a los PGAS, y lo mismo vale para otros planes o medidas de mitigación que surjan de los análisis sociales específicos.

Estudios Ambientales y Sociales Complementarios

Existe una gama de Estudios Complementarios que podrían requerirse si, para un proyecto en particular, se activa(n) alguna(s) de las Políticas de Salvaguardia Ambiental y Social del BID. Por ejemplo, algunos proyectos requieren: PRI, PPI, Plan de Protección del Patrimonio Físico Cultural, Plan de Gestión del Riesgo de Desastres naturales o Política Operativa Sobre Igualdad de Género en el Desarrollo.

Los Programas de Manejo Especial (PME) que se deriven de estos estudios complementarios, deberán ser incorporados a los PGAS a los fines de su implementación efectiva durante la ejecución de los proyectos.

6.6.2. Estudios Ambientales y Sociales acuerdo a la clasificación de proyectos

Los proyectos con clasificación A, deberán ser sometidos a un EIAS cuyo contenido mínimo se detalla en este MGAS (**Anexo 5**). La evaluación de la identificación de Pueblos Indígenas (PI) y de Reasentamiento Involuntario (RI) formará parte de la evaluación, y sus resultados, debidamente documentados, deberán ser aceptables para el Banco (véanse el PPI y el PRI).

Para los proyectos que involucren PI o RI, deberán formularse un PPI y/o PRI, como anexo a los ESIAS/PGAS según corresponda y de acuerdo a los siguientes lineamientos.

- Cuando exista afectación a PI, el responsable del EIAS verificará la necesidad de PPI, con base en: (i) la identificación de los PI potencialmente afectados/beneficiados; (ii) la implementación de procesos socio-culturalmente apropiados y efectivos de consulta con dichos pueblos y; (iii) el diseño de las medidas y actividades complementarias mediante negociaciones de buena fe con las comunidades indígenas afectadas.
- En el caso de potencial reasentamiento involuntario de personas, familias y/o actividades productivas (RI), igualmente será necesario elaborar un PRI, considerando: (i) evitar –en lo posible-- el reasentamiento o reducirlo al mínimo; (ii) dar tratamiento igualitario a todos los afectados por el proyecto, en correspondencia al grado de afectación; (iii) evitar el empobrecimiento de los afectados; (iv) proporcionar la participación de todos en la decisión de elegibilidad de soluciones ofrecidas y en el proceso de desafectación del área; (v) considerar positivamente los aspectos de género como oportunidad de desarrollo familiar; (vi) propiciar alternativas adecuadas a todos.

Estos lineamientos, así como la legislación aplicable, deberán constar en los TDR que incluyan la realización del EIAS (para mayor información consultar **Anexos 8 y 9** con TDR de PPI y PRI).

Los proyectos con clasificación **C** no necesitarán EIAS para cumplir con este MGAS. En su análisis se realizará el PAS, indicando la necesidad de cumplimiento de las normas técnicas de ingeniería de proyectos y construcción, las leyes, normas y criterios ambientales y sociales vigentes y las normas que este MGAS estipule como mínimo.

En todos los casos –e independientemente de la categoría del proyecto-, se requiere de una visita de inspección por parte del DSA al sitio donde se plantea emplazar el proyecto.

6.6.3. Etapas de Análisis, Evaluación y Aprobación

Los proyectos deberán ser presentados al DSA junto a los correspondientes EIAS, PGAS y estudios y planes complementarios que apliquen al proyecto. La EIAS obedecerá a la legislación local vigente y al presente MGAS. Previamente a la elevación de estos documentos (Proyecto Ejecutivo, EIAS y PGAS) al BID para su No Objeción (NO), los mismos deberán ser consensuados con las autoridades/organismos locales y verificados por el DSA.

Si bien el proceso de EIAS se da por finalizado con la autorización formal de la autoridad de aplicación correspondiente, la empresa contratista adjudicataria deberá elaborar, para su ejecución, con base en el EIAS/PGAS de los proyectos categoría B aprobados o del PAS para los proyectos Categoría C, un PMAS de la obra que deberá ser aprobado por la Inspección y el DSA, previo al comienzo de las obras, las que también supervisará el DSA (ver **Anexo 7**). Salvo indicación en contrario, el Contratista deberá incluir, como parte del Costo Total de la Obra, los de preparación e implementación del PMAS.

En los casos de los proyectos que requieren EIAS (Categorías B), el procedimiento, en cumplimiento con el presente MGAS y las políticas de salvaguarda del Banco, debe contar con la participación significativa de la población del AI del proyecto y de los organismos públicos competentes. Asimismo en el marco de la legislación ambiental y social vigente, debe culminar, en los casos que corresponda, con la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental o documento equivalente, emitido por el organismo público competente, donde se expresa el acuerdo entre la población, el organismo ejecutor y la autoridad ambiental competente, para la ejecución del proyecto con un definido diseño, con las obras necesarias, las actividades de construcción y operación y las correspondientes acciones de mitigación ambiental y social incluidas en el PGAS.

La gestión del permiso ambiental será responsabilidad del organismo municipal o provincial beneficiario de las obras y debe ser comunicado oportunamente al DSA del FFFIR.

Para el caso de los proyectos de Categoría C, la aprobación para el comienzo de su ejecución se dará a partir de la revisión del PAS y el PGAS, por la DSA del FFFIR y sometido a la NO del Banco.

6.7. Etapa de construcción (ejecución y monitoreo de las obras)

En esta etapa se implementarán las medidas establecidas en el PMAS.

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las normativas argentinas, ambientales, sociales, laborales, de riesgo del trabajo y seguridad e higiene laboral y, con toda aquella legislación- que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en los documentos de Licitación, en particular el PMAS. Asimismo, deberá cumplir con las normativas y reglamentos que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato, tanto de los 3 niveles institucionales de Argentina, como de las salvaguardias ambientales y sociales del BID. Deberá cumplir, además, con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las Autoridades y Organismos de Control, nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo por cuenta propia los costos, impuestos, derechos y/o multas por cualquier concepto.

Previo a instalar: obrador/campamentos, maquinarias, eventual planta fija de mezcla, el Contratista deberá realizar los estudios técnicos pertinentes para verificar y re-determinar, si fuera necesario, la línea de base ambiental y social (LBAS) del lugar para

poder realizar, al final del proyecto, la recomposición de todos los factores afectados. Será el único responsable de mitigar y corregir los pasivos ambientales generados por la obra. Este requisito es fundamental para la recepción de las obras.

El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental y/o social en las tareas a su cargo, y prestará toda colaboración en caso de serle requerida ante eventuales reclamos.

El Contratista deberá responsabilizarse, a partir del inicio del Contrato de obra –y en el caso de los proyectos que lo requieran -, del análisis y evaluación de los datos climáticos y de la situación de los cursos de aguas superficiales y de los niveles freáticos, para establecer mecanismos de alerta y acción frente a contingencias que podrían afectar a las obras, personas y bienes, quedando a su exclusivo riesgo los potenciales daños por contingencias climáticas. Mantendrá informado al Comitente respecto de los datos que se obtengan.

El Comitente no aceptará bajo ninguna circunstancia, realizar pagos adicionales ni aceptar ampliación de los plazos de entrega de la Obra, por incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados.

El Contratista tiene la obligación de permitir a la Inspección el libre acceso a todos los sectores de obra: campamento/obrador, laboratorio, depósito de materiales, acopio de residuos comunes y especiales, durante la ejecución de la obra.

El contratista deberá presentar un Informe Final de los resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental y Social de la Etapa de Construcción, a partir de la experiencia acumulada durante la ejecución del proyecto, dichos documentos se deberán entregar con la Recepción provisoria de la Obra.

El contratista deberá concentrar los esfuerzos en la generación de capacidades y empleos en los que participen prioritariamente la población local y regional, incentivando la participación de las mujeres.

El contratista con la recepción de la obra tendrá que incorporar dentro del Manual de Operación y mantenimiento, Programas para el buen manejo del sistema ambiental y social, en el marco de la legislación aplicable y contemplarlo para toda la vida útil del proyecto.

Todas las obras de los proyectos financiados por el BID del Programa de Obras Viales y del Programa de Energía, Agua y Saneamiento del FFFIR deberán contar con un Responsable Ambiental y Social (RAS) responsable de la implementación del PMAS. El RAS, contará con título universitario, conocimientos y experiencia en puestos similares y cumplir con las normas y reglamentaciones provinciales y/o municipales habilitantes. Sólo cuando Comitente y el DSA lo consideren necesario por la complejidad social del proyecto (por ejemplo, frente a la presencia de pueblos indígenas o la necesidad de reasentamiento involuntario) se incluirá, adicionalmente, un Responsable Social (RS), cuyos requisitos a cumplir serán equivalentes a los del RAS, aunque específicos para los

requerimientos sociales. El RAS –o eventualmente el Responsable Ambiental (RA) y el RS— efectuará(n) las presentaciones, ante las Autoridades de gobierno nacional, provincial, municipal y Organismos de Control, y será(n) quien(es) deberá(n) responsabilizarse por su cumplimiento durante todo el desarrollo de las obras. Asimismo, actuará(n) como interlocutor(es) en todos los aspectos ambientales y sociales entre la Contratista, la Inspección, las Autoridades de Gobierno y las comunidades locales y regionales. El RAS (o el RA y el RS conjuntamente) llevará(n) a cabo las auditorías de diagnóstico en todas las etapas de la obra, para medir el grado de cumplimiento de lo estipulado en el PMAS y toda otra normativa que corresponda. Elevará (n) un informe mensual a la Inspección designada por el Comitente.

Responsable en Seguridad e Higiene Laboral (SHL). Será su obligación desarrollar las funciones establecidas en la legislación vigente, como ser, elaborar el Legajo Técnico de Obra, y actualizar, durante todo el desarrollo de la construcción, registros, informes de investigación y estadísticas, tales como: accidentes de trabajo, incendios, derrames, capacitaciones a operarios, entrega de elementos de protección personal, estudio de carga de fuego, estudio de medición de puesta a tierra, y todo aquello relacionado con su incumbencia. El legajo será firmado en la primera hoja, por el RAS y por la Inspección, donde esta última asentará en sus observaciones, para que el Contratista las implemente. El servicio estará dirigido por graduados universitarios, conforme a lo establecido en la legislación vigente. De ser el caso, además deberán contar con la asistencia de personal técnico auxiliar.

De igual manera, la Contratista, contará con un Servicio de Medicina del Trabajo (SMT) cuyas funciones, idoneidad y horas profesionales serán las establecidas en la normativa vigente. Serán sus obligaciones, entre otras, llevar durante todo el desarrollo de la construcción, registros en obra donde asentarán los aspectos más importantes y relevantes tales como enfermedades, exámenes médicos, derivaciones frente a contingencias, documentación de estadística, cursos de capacitación en salud, medidas correctivas etc., que se presenten o desarrollen durante la obra del Proyecto. Estos registros permanecerán disponibles en la obra.

Tanto el Responsable en SHL como el SMT serán designados por el Contratista y deberán poseer la necesaria idoneidad en sus respectivas áreas de incumbencia, acreditar título universitario y matriculación que los habilite para sus funciones, estar inscriptos en el, o los, respectivo(s) Registro(s) Profesional(es) de la(s) especialidad(es), especialmente en la jurisdicción correspondiente al proyecto. El Contratista deberá presentar sus CV, a la aprobación de la Inspección. Tanto el Responsable en SHL como el SMT efectuarán las presentaciones pertinentes a sus áreas y solicitarán los permisos correspondientes ante las Autoridades de Aplicación en todos los niveles de gobierno que correspondan y serán quienes deberán cumplirlos a lo largo de toda la obra. Elevarán informes mensuales a la Inspección.

La responsabilidad de implementación de los programas del PMAS es del Contratista durante la Obra y del beneficiario responsable u otras instituciones provinciales que

correspondan, según el contenido de cada programa, durante la Operación/ Mantenimiento.

Durante las obras, el Contratista ejecutará el monitoreo y control ambiental y social a través del RAS; otros agentes pueden, igualmente actuar en programas de comunicación social, establecimiento de LBAS para monitoreo posterior, capacitación institucional para la operación de las estructuras que se están construyendo, etc.

La responsabilidad de la supervisión de los programas incluidos en el PMAS es de la DSA. Durante la Construcción, Operación y Mantenimiento, podrán participar organismos provinciales, organizaciones de beneficiarios y otros organismos o instituciones, de acuerdo a las particularidades del proyecto y a la capacidad de estos organismos para realizar la inspección y/o supervisión.

Cuando Comitente y el DSA lo consideren necesario por la complejidad, el FFFIR contratará un Inspector Ambiental y Social de Obras (IASO) para realizar la Inspección de Obra, y deberá velar por el cumplimiento de los aspectos Ambientales y Sociales, de Seguridad e Higiene Laboral y de Medicina del Trabajo por parte del Contratista. Las responsabilidades del IASO serán: (i) seguir y controlar el proyecto en su etapa de obras de acuerdo al PMAS, (ii) elaborar los informes mensuales ambientales y sociales, de Seguridad e Higiene Laboral y de Medicina Laboral y remitirlos a la Inspección de Obra y al DSA (iii) realizar inspecciones periódicas según el cronograma definido a fin de controlar el cumplimiento de lo establecido en el PMAS, (iv) informar de manera inmediata a la Inspección de Obra, al organismo provincial correspondiente y al DSA, sobre los hallazgos de interés y contingencias ambientales y sociales relevantes, (v) informar a la Inspección de Obra, al DSA y al organismo provincial correspondiente, sobre quejas y reclamos relevantes de la comunidad del AI, beneficiaria, o no, del proyecto.

La Inspección está facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y solicitar al Contratista mediante orden de servicio (OS) las adecuaciones y modificaciones pertinentes. A su vez, el Contratista está obligado a adecuar lo que la Inspección le observase, sin que ello origine reclamos o a la ampliación de los plazos de entrega.

Previamente a la autorización de ejecución de la obra, la Contratista deberá contar con las factibilidades emitidas por los organismos competentes, sean técnicos, sectoriales, ambientales o sociales.

Para el PMAS y para los PPI o PRI (cuando correspondan) se detallará(n) por separado, el o los, cronograma(s) de actividades, la(s) responsabilidad(es) de ejecución, las medidas de mitigación, los procesos de consulta y las actividades de monitoreo y seguimiento. El RAS será el responsable de verificar y monitorear el cumplimiento de los mismos y elaborar, para su aprobación, los informes con los resultados de dicho monitoreo y seguimiento, que se elevarán a la Inspección, al DSA y al organismo provincial.

El DSA realizará visitas a los proyectos en ejecución y solicitará información de los mismos, como parte de su control y seguimiento de la ejecución de los PMAS.

Luego de toda visita de supervisión el DSA preparará un Informe que será elevado a la Coordinación del Programa correspondiente, con el objetivo de reflejar el estado de avance de la ejecución del PMAS del proyecto.

Para aquellos programas de ejecución indirecta, la **Unidad Ejecutora Provincial** (UEP) deberá presentar un Informe Semestral del Desempeño Ambiental y Social de proyectos (ISDASP, **Anexo 3**), que recogerá el estado de situación global de la ejecución ambiental y social del proyecto. Será completado y adjuntado como parte del Informe de Ejecución que, de conformidad con las Normas Generales del Contrato de Préstamo, la UEP debe presentar al DSA y/o al Banco. En el caso de Programas de ejecución directa, el DSA elaborará el informe.

Los proyectos de Categoría C, que comprendan obras deberán contar con un PGAS, basado en las recomendaciones u observaciones del PAS, y el DSA podrá proveer apoyo en la definición de las mismas. Para la implementación de las mismas, se elaborará un PMAS de acuerdo a lo establecido en el **Anexo 7** que será aprobado por el DSA e inspeccionado a través del IASO (si hubiera).

7. COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL MGAS, DIVULGACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA

7.1. Requerimientos de Consulta Publica

La difusión de la información y la consulta pública son parte de las acciones para promover la sostenibilidad ambiental y social del proyecto, impulsar el desarrollo local, mitigar impactos negativos y potenciar los positivos, así como propiciar el involucramiento de la comunidad en el ciclo de un proyecto. Se trata de la generación de espacios de consulta, reflexión y discusión donde, a través de un diálogo constructivo basado en información pertinente, fidedigna, precisa, comprensible al receptor y oportuna, los distintos actores sociales transmitan sus puntos de vista, inquietudes y necesidades respecto de las características del proyecto vial, de sus estudios ambientales y sociales y de su plan de gestión ambiental y social.

Todos los proyectos financiados del Programa de Obras Viales o el Programa de Energía, Agua y Saneamiento del FFFIR objeto de financiación por el BID, deberán ser objeto de divulgación y consulta pública.

En el caso de proyectos viales de **categoría B**, sus respectivos EIAS y PGAS requerirán como mínimo una **Consulta Pública** (CP) significativa con las partes afectadas y las interesadas, y se considerarán sus puntos de vista, preferentemente durante la preparación o revisión del EIAS y del PGAS. Ambos documentos podrán ser modificados para incorporar las sugerencias y acuerdos surgidos en ese proceso.

El procedimiento de la CP deberá considerar las modalidades necesarias para asegurar la participación efectiva de los o las representantes de las organizaciones locales y en particular contemplando de forma prioritaria la participación igualitaria de hombres y mujeres.

Los proyectos de **categoría C** no requieren --necesariamente— consulta, pero la decisión de llevarla a cabo o no, dependerá del acuerdo entre el FFFIR y la Autoridad de Aplicación.

Al comienzo y durante la preparación del Proyecto, del EIAS y del PGAS, resulta deseable y, de ser necesario, efectuar reuniones entre los técnicos que lo preparan, los responsables del proyecto y representantes de la población afectada y de organismos públicos y ONGs, con competencia en los temas en cuestión, incluyendo la autoridad ambiental, para considerar las observaciones y recomendaciones que se efectúen acerca de las posibles implicancias ambientales y sociales del proyecto.

En los casos de provincias que tienen legislación sobre impacto ambiental y social con procedimientos definidos de Participación Pública (PP), (ya sea **Audiencia Pública** (AP) u otra instancia indicada por la normativa), será aplicado el mecanismo provincial, asegurando, en todos los casos, el cumplimiento de los procedimientos previstos por este MGAS y la Política OP-102 de Acceso a Información del BID y su Guía Operativa o Directrices de Implementación.

Cuando se establezca una instancia de AP, una vez finalizado la versión borrador del EIAS y del PGAS, y examinado por el área ambiental y social del FFFIR, el organismo responsable del proyecto realizará la convocatoria, notificando de ello al DSA social y a la Autoridad Ambiental de Aplicación correspondiente.

Para ello, a través de un medio de comunicación local idóneo, deberá anunciar que pone a disposición para consulta de los actores interesados, en sitio físico que deberá definir conjuntamente con el proponente del proyecto, el área ambiental y social del FFFIR y la Autoridad Ambiental de Aplicación, los documentos del Proyecto y el EIAS y su PGAS, por un plazo no menor de 15 días, a fin de que los interesados puedan analizarlos. Si la institución provincial convocante no hubiera fijado la fecha en el anuncio inicial, pasado el plazo indicado, dicho organismo deberá proceder a convocar una AP o CP.

En el caso de que se haya implementado previamente un procedimiento de audiencia o consulta pública como resultado del cumplimiento de la normativa local, se analizará las características del proceso (difusión, convocatoria, implementación, representatividad, resultados, etc.) a fin de validarla o no en el marco de los requerimientos de este MGAS y de la Política OP-102 de Acceso a Información del BID.

En el proceso de consulta pública, deberá tenerse en cuenta, además de OP-102 ya mencionada, la normativa local y las indicaciones del área ambiental y social del FFFIR.

7.2. El Plan de Consulta

Para todos proyectos de Categoría B se preparará un Plan de Consulta, el cual incluirá:

- preparación de los documentos a socializar
- elaboración del mapa de actores y lista de invitados
- difusión del evento en diferentes medios
- cursado de invitaciones
- desarrollo del evento
- registros de consultas
- elaboración del informe de Consulta y eventuales ajustes en EIAS y PGAS

7.3 Divulgación de Información Ambiental y Social

La difusión de información ambiental y social relacionada con el proyecto (EIAS y PGAS) a la población afectada y a las partes interesadas, se deberá ejecutar, principalmente, a través de tres formas:

- el sitio web del organismo proponente (Dirección Provincial de Vialidad, Obras públicas, Servicios de Agua y Saneamiento u otro organismo, según sea la característica del Proyecto).
- los medios locales de la Provincia a los cuales tiene más acceso la población (televisión, radio, prensa, boletines informativos, carteleros en los municipios, etc.)
- el sitio web del BID.

La información a publicar será como mínimo la siguiente:

- características básicas del proyecto
- versiones borradores del EIAS y PGAS preparadas para su difusión
- fechas clave del proceso de consulta / socialización, lugares de implementación de la consulta, formas de participación, etc.
- descripción del sistema de recepción y procesamiento de quejas y reclamos; en los casos que aplique, medidas de mitigación de impactos por reasentamiento involuntario (a través de Plan de Reasentamiento Involuntario / PRI), afectación de pueblos indígenas (a través del Plan de Pueblos Indígenas), Gestión de riesgos y amenazas naturales y el Plan de protección del patrimonio físico y cultural;
- compromisos sociales y ambientales a ejecutarse durante la implementación del proyecto, complementarios al PRI y PPI;
- cualquier otro estudio importante ambiental o social que se haya producido para el proyecto en cuestión.

Cada proyecto que se postula dentro del Programa de Obras Viales o el Programa de Energía, Agua y Saneamiento del FFFIR para ser financiado por el BID, tiene que pasar por la No Objeción (NO) del Banco.

Al momento de presentar el Proyecto al BID debe contar con el EIAS y el PGAS (previamente aprobados por autoridad de aplicación y con la conformidad del FFFIR), los cuales el Banco publicará en su página web para el caso correspondiente.

- Categoría B: Divulgación del EIAS / PGAS al menos 5 días hábiles antes de la aprobación del proyecto b.
- Categoría C: Divulgación de los estudios ambientales y sociales y del PGAS, al menos 5 días hábiles antes de la aprobación del proyecto

7.4. Buenas Prácticas para la Consulta Pública de un proyecto

Las consultas significativas, uno de los requisitos entre las políticas del BID, implican un diálogo y una participación bidireccional, es un proceso; e involucra a las personas en las comunidades afectadas y a otras partes interesadas relevantes⁴.

Las buenas prácticas internacionales actuales establecen diez elementos clave que ayudan a orientar el desarrollo y ejecución de consultas significativas:

1. *Identificación de asuntos prioritarios: ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades probables que surgen del proyecto?*
2. *Análisis de las partes interesadas y plan de consultas: ¿A quién afecta el proyecto y quién tiene intereses que pueden influir en los resultados? ¿Cómo se relacionará el proyecto con ellos?*

⁴ Meaningful Stakeholder Consultation, Kwam, Reidar. IDB. 2017

3. *Información previa: ¿Cómo se proporcionará información a las partes interesadas antes de la consulta y de los eventos de consulta de manera significativa?*
4. *Foros y métodos adecuados para el proceso de consulta: ¿Cómo deberían organizarse los eventos de consulta?*
5. *Mecanismos de quejas y reclamos: ¿Cómo pueden pedir reparación las partes interesadas cuando piensan que el proyecto les está causando un daño a ellos o al medio ambiente?*
6. *Decisiones sobre el diseño e implementación que tienen en cuenta las perspectivas de las partes interesadas: ¿Cómo se abordarán las preocupaciones y recomendaciones de las partes interesadas en la toma de decisiones del proyecto y en el sistema de gestión general?*
7. *Retroalimentación a las partes interesadas y transparencia en la toma de decisiones: ¿Cómo se informará a las partes interesadas sobre las decisiones del proyecto y la manera en que se han incorporado sus opiniones y aportes?*
8. *Datos de línea de base, planes de acción y sistemas de gestión: ¿Cuáles son los planes de acción que implementará el proyecto para reducir el riesgo y mejorar los beneficios para las partes interesadas del proyecto? ¿De qué forma el proyecto establecerá y mantendrá un sistema de gestión adecuado para abordar los asuntos ambientales y sociales?*
9. *Documentación y divulgación pública: ¿Cuáles son los mecanismos establecidos para documentar y divulgar información relevante del proyecto?*
10. *Consultas continuas con las partes interesadas durante la implementación: ¿Cuáles son los mecanismos establecidos para asegurar que se mantiene a las partes interesadas informadas e involucradas durante la implementación del proyecto?*

8. SISTEMA DE INTERACCIÓN, ATENCIÓN DE RECLAMOS Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL MGAS

8.1. Objetivos y alcances

El **Sistema de Interacción, Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos** del presente MGAS tiene como objetivo definir los procedimientos e instrumentos para la recepción, registro y resolución de consultas, reclamos y quejas de las partes afectadas y/o interesadas en los diferentes Proyectos en los que intervenga el FFFIR financiados por el BID, con la finalidad de brindar solución, previniendo el surgimiento de potenciales conflictos y fortaleciendo la sostenibilidad ambiental y social del Programa.

Si a pesar de la debida diligencia, el conflicto no pudiera evitarse, deberá promoverse el diálogo y la negociación tratando de resolver el mismo buscando una solución que

beneficie a todos los involucrados, incluido el Proyecto. En este sentido, antes de recurrir a la vía judicial, se promoverá el recurso de procedimientos alternativos de resolución de controversias como la mediación o el arbitraje

8.2. Procedimientos e instrumentos generales

El Programa contará con un sistema de interacción permanente con la comunidad del entorno del proyecto, para la recepción de opiniones, consultas, sugerencias, así como un módulo de gestión de reclamos y resolución de conflictos, cuyos detalles serán especificados en cada proyecto de acuerdo a sus características particulares. Esta gestión será transversal a toda su operatoria

El Sistema, que deberá estar disponible durante todo el ciclo de los Proyectos, deberá ser implementado por todos los Proyectos del FFFIR financiados por el BID en el Programa de obras viales o el Programa de Energía, Agua y Saneamiento.

A efectos de la puesta en funcionamiento del Sistema:

- la página web del FFFIR publicará las características y etapas de las obras a ejecutar en el marco de los Proyectos en los que intervenga, incluidos los modos de atención de quejas y reclamos.
- será habilitado, dentro de la página web del FFFIR, un sitio específico que contenga el procedimiento de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos destacando que la utilización del mismo no inhibe la presentación de cualquier reclamo administrativo o judicial que resultare pertinente.
- tanto en la locación de la obra como en las inmediaciones del área de intervención, deberá contarse con cartelería que contenga información del Proyecto, así como los medios de contactar a las instituciones responsables del mismo.
- se llevarán a cabo consultas significativas en las localidades cercanas a la obra con el objeto de difundir las actividades relacionadas con el proyecto y las medidas de mitigación y compensación definidas en el mismo, así como el sistema de atención de quejas y reclamos disponible.
- se llevará registro actualizado de todas las actuaciones gestionadas en el marco de cada uno de los Proyectos
- en todos los casos se informará a los interesados que a efectos de la atención de quejas y reclamos, podrán comunicarse asimismo con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, a través de la línea de teléfono designada para este fin o de su página web: www.fffir.gob.ar

8.3. Aspectos complementarios

Complementando los procedimientos generales indicados en el ítem precedente, se considera que:

a) La gestión de interacción, reclamos y conflictos será canalizada con un enfoque escalonado de tratamiento, dependiendo de la complejidad y severidad de los casos a través de cuatro instancias

- una interna (administrativa, que incluye los procedimientos y recursos de:
 - los responsables de la construcción y operación / concesión de la obra vial
 - la autoridad de aplicación provincial o municipal, responsable de la contratación y /o concesión de la obra
 - el FFFIR, como responsable de la aplicación de este MGAS
- tres externas a la Provincia y al FFFIR: Mediación, Defensor del Pueblo y Recurso Judicial.

b) Para atender los reclamos y resolver los conflictos que pudieran generarse durante las obras y la operación de cada proyecto, y una vez agotadas las vías administrativas, se promoverá la adopción voluntaria de procedimientos alternativos de solución de los mismos, como la mediación o el arbitraje, en forma previa a la resolución por vía judicial.

c) Los principales elementos del sistema de interacción, tales como atención de reclamos y resolución de conflictos, incluyen:

- el proceso que se seguirá
- los plazos de tratamiento de los casos
- las responsabilidades institucionales entre el FFFIR / Organismo Provincial, Mediador y Afectado.

Procesos, plazos y responsabilidades, serán diseñados según las necesidades de cada etapa del ciclo del proyecto. Asimismo, el Sistema de Interacción, preverá los mecanismos y medios necesarios acordes al contexto local y las características socio-culturales de los grupos involucrados y/o afectados por el Proyecto, con especial consideración y respeto por los grupos sociales más vulnerables, entre los cuales se cuentan los pobladores urbanos y rurales de bajos ingresos y los pueblos indígenas.

d) En todos los casos se llevará un registro de recepción de interacción, y de todos los pasos para la resolución de reclamos y conflictos por cada obra o proyecto.

e) Los casos de resolución de reclamos o conflictos serán sufragados por la Provincia o Municipio, según corresponda.

FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL

MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Anexos

VERSIÓN FIT FOR DISCLOSURE

**Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación**

República Argentina

Mayo 2019

CONTENIDO DE LOS ANEXOS:

Anexo 1. Perfil Ambiental y Social

Anexo 2. Informe de Seguimiento Socio Ambiental

Anexo 3. Informe Semestral del Desempeño Ambiental y Social de Proyectos

Anexo 4. Legislación Ambiental y Social Nacional

Anexo 5. Contenidos Mínimos para la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de los Proyectos

Anexo 6. Contenidos mínimos y requisitos de un Plan de Gestión Ambiental y Social

Anexo 7. Plan de Manejo Ambiental y Social de Obras

Anexo 8. Términos de Referencia para la elaboración del Plan de Pueblos Indígenas

Anexo 9. Términos de Referencia para elaborar el Plan de Reasentamiento Involuntario

Anexo 10. Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales de Resolución a Cargo del Contratista

ANEXO 1. PERFIL AMBIENTAL Y SOCIAL (PAS)

Perfil Ambiental y Social del Proyecto		
Nombre del Proyecto		
Descripción Breve del Proyecto (objetivos y principales acciones)		
Ubicación Geográfica (localidad, provincia, longitud y latitud)	Imagen Satelital / Mapa de Ubicación	
Monto (US\$)		
Descripción Breve del Entorno Ambiental y Social del Proyecto		
Riesgos e impactos posibles según la información disponible		
Medidas de mitigación, manejo y monitoreo		
Legislación y Reglamentación Ambiental y Social más Relevante		
Existencia de Legislación específica de EIAS	Necesidad de realizar Audiencia Pública (o consulta equivalente) según Legislación Local	
Autoridad Ambiental de Aplicación (entidad responsable de emitir la licencia ambiental)		
Nombre y Especialidad del Responsable de elaborar el PAS		
Tipo de Obra		
I: Construcción Nueva	II: Ampliación	III: Rehabilitación

Otros datos relativos al Proyecto				
Localización de los sitios de disposición final de áridos (escombreras)	Las escombreras se ubican en:			
	Terrenos privados	<input type="checkbox"/>	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>
	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>	Terrenos Provinciales, Nacionales	<input type="checkbox"/>
	Estos terrenos corresponden a:			
	Asentamientos humanos	<input type="checkbox"/>	Áreas agrícolas	<input type="checkbox"/>
	Bosques naturales	<input type="checkbox"/>	Bosques artificiales	<input type="checkbox"/>
	Áreas protegidas	<input type="checkbox"/>	Cauces naturales	<input type="checkbox"/>
	Zonas de potencial turístico	<input type="checkbox"/>	Zonas escénicas únicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor histórico	<input type="checkbox"/>	Zonas arqueológicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor cultural	<input type="checkbox"/>	Nacimientos de ríos	<input type="checkbox"/>
	Ladera debajo de carretera	<input type="checkbox"/>	Áreas sensibles	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Otros (especificar)			
Localización de los sitios de préstamo (canteras)	Las escombreras se ubican en:			
	Terrenos privados	<input type="checkbox"/>	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>
	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>	Terrenos Provinciales, Nacionales	<input type="checkbox"/>
	Estos terrenos corresponden a:			
	Asentamientos humanos	<input type="checkbox"/>	Áreas agrícolas	<input type="checkbox"/>
	Bosques naturales	<input type="checkbox"/>	Bosques artificiales	<input type="checkbox"/>
	Áreas protegidas	<input type="checkbox"/>	Cauces naturales	<input type="checkbox"/>
	Zonas de potencial turístico	<input type="checkbox"/>	Zonas escénicas únicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor histórico	<input type="checkbox"/>	Zonas arqueológicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor cultural	<input type="checkbox"/>	Nacimientos de ríos	<input type="checkbox"/>
	Ladera debajo de carretera	<input type="checkbox"/>	Áreas sensibles	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Otros (especificar)			
Localización de campamentos, talleres y obradores	Las escombreras se ubican en:			
	Terrenos privados	<input type="checkbox"/>	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>
	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>	Terrenos Provinciales, Nacionales	<input type="checkbox"/>
	Estos terrenos corresponden a:			
	Asentamientos humanos	<input type="checkbox"/>	Áreas agrícolas	<input type="checkbox"/>
	Bosques naturales	<input type="checkbox"/>	Bosques artificiales	<input type="checkbox"/>
	Áreas protegidas	<input type="checkbox"/>	Cauces naturales	<input type="checkbox"/>
	Zonas de potencial turístico	<input type="checkbox"/>	Zonas escénicas únicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor histórico	<input type="checkbox"/>	Zonas arqueológicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor cultural	<input type="checkbox"/>	Nacimientos de ríos	<input type="checkbox"/>
	Ladera debajo de carretera	<input type="checkbox"/>	Áreas sensibles	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Otros (especificar)			
Localización de áreas industriales (plantas de asfalto, de hormigón, etc.)	Las escombreras se ubican en:			
	Terrenos privados	<input type="checkbox"/>	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>
	Terrenos municipales	<input type="checkbox"/>	Terrenos Provinciales, Nacionales	<input type="checkbox"/>
	Estos terrenos corresponden a:			
	Asentamientos humanos	<input type="checkbox"/>	Áreas agrícolas	<input type="checkbox"/>
	Bosques naturales	<input type="checkbox"/>	Bosques artificiales	<input type="checkbox"/>
	Áreas protegidas	<input type="checkbox"/>	Cauces naturales	<input type="checkbox"/>
	Zonas de potencial turístico	<input type="checkbox"/>	Zonas escénicas únicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor histórico	<input type="checkbox"/>	Zonas arqueológicas	<input type="checkbox"/>
	Zonas de valor cultural	<input type="checkbox"/>	Nacimientos de ríos	<input type="checkbox"/>
	Ladera debajo de carretera	<input type="checkbox"/>	Áreas sensibles	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Otros (especificar)			

Impactos	Si/No	Tipo de Impacto		Magnitud (alto, medio, bajo)	Reversibilidad	Otras Observaciones
		+	-			
Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)						
Medio Natural						
Afectación de áreas naturales protegidas o sus áreas de amortiguamiento.						
Afectación de hábitats naturales o a ecosistemas sensibles.						
Afectación de terreno montañoso o con relieve accidentado (>35% de pendiente).						
Afectación de terrenos ondulados (15 a 35 % de pendiente).						
Afectación a especies frágiles.						
Afectación a la fauna (silvestre, doméstica).						
Afectación de la vegetación.						
Pérdida de árboles del sitio de implantación y/o del entorno.						
Afectación de recursos hídricos (ríos, arroyos, lagos, etc.)						
Deposición de material particulado a fuentes de agua (sedimentación).						
Afectación a la escorrentía (superficial, subterránea).						

Alteración a los patrones de drenaje.						
Alteración a los patrones de infiltración.						
Alteración de la calidad del aire.						
Alteración de los niveles sonoros.						
Afectación del suelo.						
Generación de grandes volúmenes de excavación.						
Generación de grandes volúmenes de residuos sólidos.						
Generación de residuos peligrosos.						
Medio Social, Cultural y Económico						
Afectaciones a individuos, familias o grupos en estado de vulnerabilidad.						
Agudización de conflictos sociales y políticos preexistentes.						
Limitación del acceso de la población local a los recursos naturales.						
Afectación de áreas con mediano a alto valor cultural, arqueológico, histórico, o de otro tipo.						

Afectación a espacios públicos (escuelas, hospitales, cementerios, plazas, parques, paseos, etc.).						
Afectación a las interacciones sociales o prácticas culturales.						
Afectación a actividades económicas.						
Afectación del tránsito vehicular, peatonal, etc.						
Afectación a la accesibilidad a predios, viviendas o negocios (durante construcción).						
Alteración de los precios de los predios aledaños al proyecto.						
Cambios en la tenencia, el uso y el valor del suelo.						
Incremento en la probabilidad de invasiones de predios circundantes.						
Generación de molestias a la comunidad (ruido, polvo, etc.)						
Interrupción de servicios básicos.						
Incremento en la demanda de servicios básicos por encima de la capacidad disponible.						
Ruptura de la continuidad del espacio urbano (efecto barrera).						

Generación de estímulos a la migración hacia el área del Proyecto						
Contribución a la creación o fortalecimiento de relaciones económicas desiguales.						
Incremento del riesgo de accidentes.						
Reasentamiento Involuntario (OP-7 10)						
Desplazamiento físico de la población (reasentamiento).						
Desplazamiento de actividades comerciales.						
Necesidad de expropiaciones.						
Riesgo de empobrecimiento de personas afectadas por desplazamiento físico o económico que no tienen derechos legales reconocidos sobre las tierras o viviendas afectadas.						
Pueblos Indígenas (OP-765)						
Afectaciones a los derechos colectivos de poblaciones indígenas.						
Afectaciones a la cultura, organización social, lengua o seguridad física y alimentaria de poblaciones indígenas.						
Gestión del Riesgo de Desastres (OP -704)						

Vulnerabilidad del proyecto a desastres naturales (zona inundable o vulnerable a eventos climáticos, sismos, etc.).						
Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761)						
Acceso equitativo de hombres y mujeres a los beneficios del proyecto.						
Incremento del riesgo de violencia de género, explotación sexual y tráfico de personas.						
Incremento de la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en los trabajadores alojados en los campamentos y las comunidades circundantes.						

Clasificación Ambiental y Social según MGAS (A, B o C)	
Estudios Complementarios requeridos para cumplir con las Salvaguardias del BID	
Plan de Reasentamiento Involuntario	Sí / No
Plan de Pueblos Indígenas	Sí / No
Otros	Cuál?

Clasificación Ambiental y Social según Legislación Provincial
Plan de Reasentamiento Involuntario

Diagnóstico Visual	
Descripción	Imagen

ANEXO 2. INFORME DE SEGUIMIENTO SOCIO AMBIENTAL (ISSA)

Informe de Seguimiento Socio Ambiental				
Nombre de proyecto		Provincia		
Fecha de Aprobación		Categoría Ambiental y Social		
Fecha de última Visita de Inspección		Responsable		
Fecha de la visita actual de Inspección		Responsable		
Porcentaje de Avance Financiero	Detalle	Previsto	Actual	Diferencia
	1. Acumulado hasta el informe anterior	0.00%	0.00%	0.00%
	2. Entre el informe anterior y el actual	0.00%	0.00%	0.00%
	3. Acumulado hasta el informe actual	0.00%	0.00%	0.00%
Comentarios:				
Porcentaje de Avance Físico	Detalle	Previsto	Actual	Diferencia
	1. Acumulado hasta el informe anterior	0.00%	0.00%	0.00%
	2. Entre el informe anterior y el actual	0.00%	0.00%	0.00%
	3. Acumulado hasta el informe actual	0.00%	0.00%	0.00%
Comentarios:				
Grado de Avance de las Actividades Ambientales y Sociales	1. Descripción de la situación hasta el informe anterior			
	2. Descripción del eventual cambio de situación entre el informe anterior y el actual			
	3. Descripción de la situación actual			
Comentarios generales sobre el avance de las actividades ambientales y sociales:				
Hallazgos Principales ⁸				

Estado de Cumplimiento de Disposiciones Contenidas en las Licencias o Permisos Ambientales y los Planes Sociales Ambientales			
Disposición	Estado de Cumplimiento (Cumplida, No Cumplida, En Proceso)	Observaciones	
Detalle de Sanciones Aplicadas por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)			
Sanción	Motivo	Actividades a ser realizadas para levantar la sanción	Observaciones

Recomendaciones y Observaciones:
Estado de las No Conformidades según la(s) Autoridad(es) Ambiental(es)

No Conformidad	Estado			Observaciones
	A*	C ⁺	P ⁻	
A= Abierta; C= Cerrada; P= Pendiente				
Situación de las Acciones Correctivas Previas				
Acción	Fecha acorda	Observaciones	Estatus*	
* C= Cumplida; PC= Parcialmente Cumplida; NC= No Cumplida				
Desempeño Ambiental, Social y de Seguridad Ocupacional				
Temas de Salvaguardia	Indicadores Clave de		Observaciones	Estado de Cumplimiento
	Proceso	Resultado		
I.ASPECTOS AMBIENTALES				
1. Cumplimiento de especificaciones técnicas ambientales				
2. Cumplimiento de los condicionamientos de la licencia ambiental				
3. Esquema de gestión ambiental y social				

4. Estado ambiental de campamentos y obradores				
5. Estado ambiental de canteras y fuentes explotación de material				
6. Estado ambiental de escombreras y depósitos de material sin clasificar.				
7. Estado ambiental de las plantas de asfalto				
8. Estado de ejecución del Plan de Manejo y Gestión Ambiental y Social				
9. Estado de la calidad del agua (superficial y subterránea)				
10. Estado de la calidad del aire				
11. Estado de las no conformidades abiertas				
12. Estado de las plantas de concreto				
13. Manejo de los excedentes de excavación				
14. Manejo de residuos líquidos domésticos				
15. Manejo de residuos líquidos peligrosos				
16. Manejo de residuos sólidos domésticos.				
17. Manejo de residuos sólidos peligrosos				
18. Manejo del tránsito vehicular				

19. Niveles de ruido y vibraciones				
20. Señalización ambiental				
21. Vigencia y disponibilidad de permisos ambientales y de construcción				
22. Vulnerabilidad a desastres naturales				
II.ASPECTOS SOCIALES				
23. Actividades de comunicación y participación comunitaria				
24. Aspectos de género				
25. Captura, manejo y resolución de quejas y reclamos				
26. Educación ambiental comunitaria				
27. Estado de ejecución del Plan de Reasentamiento Involuntario				
28. Manejo de los impactos a comunidades indígenas				
29. Relacionamiento con comunidades indígenas				
30. Constitución del derecho de vía				
31. Aspectos de Salud y Seguridad				
32. Aspectos de Patrimonio Cultural				
III. Aspectos de Salud y Seguridad Ocupacional				

33. Capacitación ambiental y de salud ocupacional del personal				
34. Estado de seguridad ocupacional de campamentos y obradores				
35. Estado de seguridad ocupacional de canteras y fuentes explotación de material				
36. Estado de seguridad ocupacional de escombreras y depósitos de material sin clasificar.				
37. Estado de seguridad ocupacional de las plantas de asfalto				
38. Estado de seguridad ocupacional de las plantas de concreto				
39. Gestión y manejo de emergencias (incluyendo gestión del riesgo de desastres naturales)				
40. Salud y Seguridad (estadística de accidentes de personal propio y contratado, valores mensuales y acumulados de los índices de siniestralidad)				
41. Seguridad vial				
42. Señalización de salud y seguridad				
IV. Aspectos Logísticos				

43. Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del plan de manejo.				
44. Disponibilidad de recursos físicos para la ejecución del plan de manejo.				
45. Disponibilidad de recursos humanos para la ejecución del plan de manejo.				
46. Manejo y proceso de la documentación socioambiental y de salud y seguridad (registros).				
47. Gestión de la supervisión (inspectoría, interventoría)				
48. Gestión del ente fiscalizador (autoridad ambiental competente)				
49. Gestión del auditor (si lo hubiere)				
Calificación Agregada S=Satisfactorio; PS=Parcialmente Satisfactorio I= Insatisfactorio PI=Parcialmente Insatisfactorio				S, PS, I
Plan de Acción⁹				
Acción				Responsable
				Fecha acordada
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

9.	
10.	
⁹ Resume los acuerdos a los que se ha llegado entre contratista(s) e Inspección para corregir los problemas socio ambientales y de salud y seguridad ocupacional que se han detectado en la visita.	

Plan de Acción¹⁰ Etapa de Operación y Mantenimiento		
Actividades Socio Ambientales de Mantenimiento Rutinario por parte de la(s) Empresa(s) Contratada(s)¹¹		
Acción de Coordinación	Responsable	Fecha
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
¹⁰ Resume los acuerdos a los que se ha llegado entre contratista(s) e Inspección para corregir los problemas socio ambientales y de salud y seguridad ocupacional que se han detectado en la visita.		
¹¹ Coordinación con las instancias locales (Gobiernos Provinciales, Municipales) y Nacional del área de intervención para minimizar los impactos indirectos identificados en la Licencia / Permiso Ambiental del Proyecto Constructivo.		

ANEXO 3. INFORME SEMESTRAL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS (ISDASP)

Informe Semestral del Desempeño Ambiental y Social de Proyectos						
Nombre de proyecto		Provincia				
Fecha de Aprobación		Categoría Ambiental y Social				
Periodo que cubre el informe		Responsable(s) del informe:				
Calificación Desempeño Socioambiental		Semestre anterior		Semestre actual		
Introducción y Antecedentes del Período ¹²						
Logros en el Período						
Logros técnicos: Logros alcanzados en el Programa de Gestión Ambiental, Social y de Seguridad Ocupacional (y otros planes como, de Reasentamiento Involuntario; para Pueblos Indígenas; para Patrimonio Cultural, u otros aplicables)						
Análisis de los impactos Ambientales y Sociales en el Período ¹³						
Directos						
Indirectos						
Acumulativos						
Regionales						
Detalle de los Avances						
Proyectos en Ejecución						
Proyecto	Long. (km) / Sup. (m ²) / Vol. (m ³)	Localización	Ejecutor	Tipo de Intervención*	Fechas de obra	
					inicio	Fin

*Construcción o reconstrucción, Ampliación, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento					

Describir brevemente las situaciones más importantes ocurridas en el período, tanto en relación a los previstos durante la preparación del Proyecto, cuanto a los imprevistos. previstos durante la preparación del Proyecto, cuanto a los imprevistos.

Estado de las No Conformidades abiertas por la Supervisión					
Proyecto	No Conformidad	Estado			Observaciones
		A*	C+	P-	
*Abierta, +Cerrada, -Pendiente					
Problemas Encontrados en el Presente Período					
Proyecto	Problema	Causa(s)	Acciones tomadas para remediar y prevenir el problema*	Observaciones	
*Cumplida, No Cumplida, En Proceso					
Lecciones Aprendidas ¹⁴					
Riesgos y Desafíos para el Siguiete Período ¹⁵					
Conclusiones y Próximos Pasos para el Siguiete Período ¹⁶					
¹⁴ Resultados o situaciones que podrían replicarse en el futuro para manejar de mejor manera los proyectos. ¹⁵ De carácter técnico, financiero, ambiental, político, de amenaza natural o de cualquier índole que pudiera interferir en la buena ejecución de los proyectos en el siguiente periodo de análisis. ¹⁶ De manera muy sucinta, deben describirse lo que se espera en términos ambientales y sociales para el siguiente periodo de análisis.					

Estado de Ejecución									
Proyecto	Avances Acumulados en la Ejecución (%)								
	Física			Financiera			Ambiental y Social		
	Teórica*	Real	Diferen.	Teórica*	Real	Diferen.	Teórica*	Real	Diferen.
*Contenida en el cronograma de ejecución aprobado									
Estado de Cumplimiento de Cláusulas Ambientales y Sociales									
Proyecto	CláusulaAplicable	Estado de Cumplimiento*			Observaciones				
*Cumplida, No Cumplida, En Proceso									
Estado de Cumplimiento de Otras Disposiciones									
Disposiciones contenidas en las Licencias o Permisos Ambientales									
Proyecto	Disposición	Estado			Observaciones				
		C*	N+	P-					
*Cumplida, +No Cumplida, -En Proceso									
Disposiciones contenidas en el Reglamento Operativo de la Operación									
Proyecto	Disposición	Estado			Observaciones				
		C*	N+	P-					
*Cumplida, +No Cumplida, -En Proceso									
Detalle de sanciones aplicadas por la(s) autoridad(es) ambiental(es)									
Proyecto	Sanción	Motivo	Actividades a ser realizadas para levantar la sanción		Observaciones				
Recomendaciones, Observaciones									

ANEXO 4. LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL NACIONAL

1. Convenios y Pactos Internacionales

Los principales Convenios Internacionales, dentro del marco ambiental, en los cuales la República Argentina ha ratificado adhesión y que muestran incidencia sobre el proyecto en estudio son:

- Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Ley N° 21.836)
- Convenio de Viena- Protección de la capa de Ozono (Ley N° 23.724)
- Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (Ley 23.918)
- Convenio de Ramsar (Ley N° 23.919)
- Convenio de Basilea (Ley N° 23.922)
- Conservación de Biodiversidad Biológica (Ley N° 24.375)
- Convenio Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 24.295)
- Convenio de Lucha contra la Desertificación (Ley N° 24.701)
- Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Ley N° 24.071).
- Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las naciones americanas, Convención de San Salvador (Ley 25.568).
- Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (Ley N° 25.841)
- Convenio de Estocolmo de reducción y eliminación de Compuestos Orgánicos Persistentes (COP's) (Ley N° 26.011)
- Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad Cultural (Ley N° 26.305).
- Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático (Ley N° 27.270)

1.1. Marco Legal Nacional

1.1.1. Constitución Nacional

La Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994, ha incorporado el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo. Si bien sólo un artículo trata en forma específica el tema ambiental, sus disposiciones complementarias son lo suficientemente amplias como para lograr un marco de protección del medio ambiente, creando obligaciones a todos los habitantes, y en especial a quienes desarrollan actividades susceptibles de impactar en el ambiente.

Entre los artículos a considerar en relación al presente EslA se deben mencionar, el artículo 41, que garantiza el derecho a un ambiente sano, el artículo 43, referido al derecho a presentar Recursos de Amparo, y el artículo 124, que hace referencia al dominio de los recursos naturales en jurisdicciones provinciales.

Así, el artículo 41 en su primer párrafo establece que *“todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”*. Este artículo introduce el concepto de desarrollo sustentable, señalando en forma clara la protección de los derechos de las generaciones futuras e introduce disposiciones aplicables a quienes ocasionen un daño al ambiente, señalando la recomposición del daño ambiental perpetuado.

En el segundo párrafo del artículo 41, la Constitución contiene en forma específica las obligaciones del Estado en materia ambiental *“... Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales...”*. El artículo además de establecer las obligaciones del Estado en cuanto a la protección y preservación de los recursos naturales, el patrimonio cultural y la diversidad biológica, le ordena el cumplimiento de dos obligaciones esenciales que se complementan entre sí para poder lograr la participación ciudadana, pues impone la obligación de educar a la población y brindar la información ambiental que posea. El último párrafo del artículo 41 establece la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.

Como garantía Constitucional, y a los fines de lograr el cumplimiento efectivo de los derechos receptados en el artículo 41 antes enunciados, el Constituyente instituyó en el artículo 43 la Acción de Amparo, de la siguiente forma: *“Contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un Tratado, o una Ley, podrá interponerse acción de amparo. En cuanto al derecho al ambiente, podrá interponerla tanto el afectado, como el Defensor del Pueblo, como aquellas asociaciones que propendan a esos fines, debidamente registradas conforme lo establecido por la Ley.”*

La Constitución Argentina, en su artículo 124 afirma que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias. En consecuencia, y considerando que quien detenta el dominio de los recursos naturales es quien debe ejercer la jurisdicción ambiental, se infiere que las provincias son quienes ejercen jurisdicción y retienen el poder de policía en materia ambiental conforme lo determina el artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional.

1.1.2. Normativa nacional

La Constitución de 1994 encarga a la Nación el dictado de normas que contengan los

presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias el dictado de las normas necesarias para complementarlas, sin que las primeras alteren las jurisdicciones locales.

Sin perjuicio de ello, se debe señalar además la importancia en relación a esta obra de artículos específicos del Código Civil, como el art. 1.113 que hace referencia a los daños por riesgos; y el art. 2.499, referido al daño de bienes.

- Leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental:

Por otra parte, en lo que hace estrictamente a la legislación ambiental, se deben mencionar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental relacionadas con la obra en estudio, que han sido sancionadas y publicadas hasta el presente:

- Ley N° 25.675 General del Ambiente, promulgada el 28 de noviembre de 2002.
- Ley N° 25.688 de Presupuestos Mínimos que aprueba el Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas, promulgada el 3 de enero de 2003.
- Ley N° 25.743/03. Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, promulgada el 25 de junio de 2003
- Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, promulgada el 8 de enero de 1992.
- Ley N° 25.916 de Gestión de residuos domiciliarios, promulgada el 3 de septiembre de 2004.
- Ley 25.612 para la Gestión de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio, promulgada el 3 de julio de 2002.
- Ley N° 25.831 de Presupuestos Mínimos de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, promulgada el 26 de noviembre de 2003.
- Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, promulgada el 19 de diciembre de 2007.
- Ley N° 22.421/81 Protección y conservación de la fauna silvestre, 5 de marzo de 1981.
- Ley N° 22.428 de Suelos, 16 de marzo de 1981
- Ley N° 21.836/78 Aprobación de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial y Natural, 6 de julio de 1978.
- Ley N° 26.562 de Presupuestos mínimos de protección ambiental para el control de actividades de quema.

En cuanto a la naturaleza jurídica de estas normas, se dice que las Leyes de presupuestos mínimos son dictadas para regir en todo el territorio de la nación, pero no son federales, sino que podrían resultar asimilables en cierta forma a las leyes de fondo enunciadas en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional (Código Civil, Penal, Comercial, de Minería, etc.), lo que permite que las Provincias las reglamenten en forma

directa sin alterar su letra o sancionen normas en su consecuencia respetando su contenido, pero pudiendo ser más exigentes.

- Ley N° 25.675/02. Ley General del Ambiente (LGA):

La Ley General del Ambiente 25.675/02, que responde al artículo 41 de la Constitución Nacional, *“establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”* (art. 1). Define como objetivo una gestión sustentable y adecuada del ambiente, su preservación; la protección de la biodiversidad y la implementación del desarrollo sustentable, y establece también diez principios de la política ambiental: *congruencia, prevención, precautorio, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación*. Señala también los objetivos y principios que deberá seguir la política ambiental nacional y da intervención al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

La Ley General del Ambiente N° 25.675, regló en su artículo 6 que, *“se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene como objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga, y en general asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”*. Asimismo, instituye y define una serie de instrumentos de política y gestión ambiental, tales como el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Con relación al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley establece en su art. 11 que *“toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.”*

Por su parte en el art. 12 establece que *“Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados.”*

Finalmente, en su art. 13 establece que *“Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del Proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.”*

El artículo 27 define el daño ambiental de incidencia colectiva y el artículo 28 establece la recomposición del daño ambiental.

- Seguro Ambiental

El Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) es la garantía financiera exigible a toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, según lo establece la Ley General del Ambiente (LGA) –Ley Nacional N° 25.675- y su decreto reglamentario 1.638/12. La LGA dispone en su artículo 22 que *“toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente tendrá la obligación de contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir...”*. La norma define al daño ambiental colectivo en su artículo 27 como *“toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos”*. En este sentido, en el artículo 28 se establece que *“el que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental”*.

Con el objeto de concretar la implementación del SAO, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) actual MAyDS, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación (SF) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictaron en conjunto una serie de resoluciones, cuya finalidad ha sido dar formato jurídico al instituto en cuestión, y de alguna forma efectivizar la obligación del artículo 22 de la LGA (FARN, 2010):

- Resoluciones SAyDS N° 177/073, N° 303/074 y N° 1.639/075

Con estas resoluciones se delinean las normas operativas para la contratación de seguros, reglamentarias del artículo 22 de la LGA. También se definen los lineamientos para la categorización de actividades riesgosas según su nivel de complejidad ambiental (NCA), para determinar si éstas quedan alcanzadas por la obligación de contratar un seguro o constituir una garantía financiera por daño ambiental a partir del establecimiento de criterios y metodologías de cálculo (FARN, 2010).

- Resolución SAyDS N° 177/07

Dicha norma crea la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), que tiene como objetivo el desarrollo de tareas técnicas relacionadas con la determinación de actividades riesgosas, el alcance del daño al ambiente, la viabilidad de los planes de recomposición, y establecer parámetros y pautas de recomposición del daño basados en criterios de riesgo (FARN, 2010).

- Resolución conjunta S AyDS N° 178/07 y Secretaría de Finanzas N° 12/07

Mediante dichas normas se crea la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA) para asesorar a la S AyDS. Su deber reside en analizar y formular propuestas referidas a diversas cuestiones tales como normas generales de regulación de las pólizas de seguro ambiental, los requisitos mínimos y la forma de instrumentación de los autos seguros. Además dicha comisión fomenta la participación de representantes de los distintos sectores involucrados y de expertos en la materia.

- Resolución conjunta S AyDS N° 1.973/07 y SF 98/077

Ambas normas establecen las pautas básicas para las condiciones de contratos de las pólizas de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva, tales como los sujetos del contrato de seguro, la autoridad de aplicación, el objeto y alcance de la cobertura, la situación ambiental inicial, la suma asegurada, entre otras (FARN, 2010).

- Resolución S AyDS N° 1.398/08

Mediante esta norma se establecen los Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente (MMES) a través de la introducción de una metodología de cálculo en función de los riesgos de las actividades. El MMES será la suma que asegure la recomposición del daño ambiental de incidencia colectiva producido por un siniestro contaminante; y está determinado por diferentes variables, entre ellas cabe nombrar el Nivel de Complejidad Ambiental de la Actividad (NCA), la existencia de materiales peligrosos y la vulnerabilidad del emplazamiento (FARN, 2010).

- Resolución SSN N° 35.168/10

Esta norma determina que el otorgamiento de la conformidad ambiental por parte de la S AyDS será condición causal y elemento esencial del acto administrativo por el que se aprueben planes de seguro, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales correspondientes a la cobertura de riesgos previstos en el artículo 22 de la LGA (FARN, 2010).

- Ley N° 25.916/04. Gestión de Residuos Domiciliarios

Establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades competentes. Generación y Disposición inicial. Recolección y Transporte. Tratamiento, Transferencia y Disposición final. Coordinación interjurisdiccional. Autoridad de aplicación. Infracciones y sanciones. Disposiciones complementarias.

- Ley Nacional N° 24.585/95 de Protección Ambiental de la Actividad Minera (Código de Minería)

La presente Ley rige *“la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, que pueda ser afectado por la actividad minera”* (art. 1). Están comprendidas dentro de esta Ley *“todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados y descentralizados y las empresas del Estado Nacional, Provincial y Municipal que desarrollen actividades”* tales como las comprendidas en los procesos de trituración, molienda, sinterización, briqueteo, refinación, aserrado, tallado *“...y otros que pueden surgir de nuevas tecnologías y la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza”* (art. 4).

Asimismo, conforme el art. 18 de la presente Ley, *“...todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo, según correspondiere”*.

- Ley N° 25.688/03. Ley de Gestión Ambiental de las Aguas:

Por su parte, la Ley de Gestión Ambiental de las Aguas 25.688/03 establece *“los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional”* (art. 1), mientras que en su art. 6 señala que *“para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente (...)”*.

- Ley N° 25.743/03. Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico:

Establece como objeto en su art. 1 la *“preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo. El decreto reglamentario de esta última establece en su art. 13 que “La obligación de denunciar el descubrimiento a que se refiere el artículo 13 de la ley implica la de suspender toda actividad en el lugar hasta tanto la autoridad competente, según la jurisdicción de que se trate, tome la intervención prevista legalmente, debiendo adoptarse, hasta entonces por responsables del predio, todas las medidas tendientes a la conservación del yacimiento y/o los objetos arqueológicos o paleontológicos. En los casos en que corresponda, se convendrá con los propietarios de los inmuebles, el tiempo y las características de la ocupación y, de no lograrse un acuerdo, se tramitará la ocupación temporánea o la imposición de servidumbre, mediante la sanción de una ley por las respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las medidas judiciales que puedan solicitarse cuando razones de urgencia así lo exijan. Las personas físicas o jurídicas, responsables de emprendimientos deberán prever la necesidad de realizar una prospección previa a la iniciación de las obras con el fin de detectar eventuales restos, yacimientos u objetos arqueológicos o paleontológicos. De verificarse su existencia, deberán facilitar el rescate de los mismos. Las tareas que se realicen a ese efecto deberán ser aprobadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional. (...) Si en el curso de ejecución de obras públicas o privadas, que implique movimientos de tierra, se hallaren fósiles u objetos arqueológicos, o se supiera que determinados sectores, regiones o zonas, constituyen yacimientos paleontológicos y/o*

arqueológicos, que por su tamaño, valoración patrimonial, científica y/o estado de preservación requieran especial cuidado, protección absoluta o parcial, trabajos de rescate o preservación, la autoridad de aplicación jurisdiccional podrá solicitar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de adoptar medidas tendientes a lograr la suspensión de las obras o proyectos en forma definitiva o temporal, según el caso”.

- Ley N° 24.051, Residuos Peligrosos.

La Ley de “Residuos Peligrosos” sancionada en 1991 y publicada en 1992 (reglamentada mediante el Decreto 831/93), regula la *“generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (...) cuando se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión económica sensible (...)”.*

El artículo 2 de la Ley de Residuos Peligrosos, señala que *“...será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley. Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales”.*

- Ley N° 25.831/04. Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental:

En cuanto a la *Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental 25.831/04*, establece *“los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.”* Señala que *“el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada”* (art. 3). Cabe acotar que *“se considerarán infracciones a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece”* (art. 9).

El Decreto 1172/03: aprueba los Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la Elaboración Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Formularios de inscripciones, registro y

presentación de opiniones y propuestas. Asimismo, establece el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial de la República Argentina.

- Ley N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos

La ley 26.331 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.

Tiene como objeto “a) *Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que benefician a la sociedad; d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles en la actualidad; e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos.*” (Art. 3)

La ley de referencia señala en su Capítulo 2 las pautas sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que establece como presupuesto mínimo, donde establece que cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo de dicha normativa, estableciendo a su vez las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios que estos presten.

Establece a su vez las categorías de conservación de los bosques nativos, en:

“Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.

Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.” (Art. 9)

Por otra parte, dicho marco regulatorio establece las pautas de autorizaciones para desmontes y de aprovechamiento sostenible, donde dice que *“todo desmonte o manejo sostenible de bosques nativos requerirá autorización por parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente.”* (Art. 13). *“No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).”* (Art. 14). Seguidamente, en su art. 16 establece que las solicitudes de autorización para llevar a cabo el manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II y III, deberán sujetar su actividad en un Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos, cumpliendo con las condiciones mínimas de persistencia, producción sostenida y mantenimiento de los servicios ambientales que dichos bosques prestan.

Finalmente, se destaca que en su Anexo establece los criterios de sustentabilidad ambiental para el ordenamiento territorial de los bosques nativos.

- Ley N° 22.421/81 Protección y conservación de la fauna silvestre

Protección, Conservación, Propagación, Repoblación y Aprovechamiento Racional de la Fauna Silvestre.

- Ley N° 22.428/81 Conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.

Declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.

- Ley N° 22.351 de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales

Dice en su art. 1 que *“... podrán declararse Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional, las áreas del territorio de la República que por sus extraordinarias bellezas o riquezas en flora y fauna autóctona o en razón de un interés científico determinado, deban ser protegidas y conservadas para investigaciones científicas, educación y goce de las presentes y futuras generaciones, con ajuste a los requisitos de Seguridad Nacional.”*

Por su parte, el art. 4 norma que *“Serán Parques Nacionales las áreas a conservar en su estado natural, que sean representativas de una región fitoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. En ellos está prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la Autoridad de Aplicación.”*

En su art. 8 dice que *“Serán Monumentos Naturales las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por la autoridad de aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención de los visitantes.”*

Finalmente, el art. 9 establece que *“Serán Reservas Nacionales las áreas que interesan para: la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional contiguo, o la creación de zonas de conservación independientes, cuando la situación existente no requiera o admita el régimen de un Parque Nacional. La promoción y desarrollo de asentamientos humanos se hará en la medida que resulte compatible con los fines específicos y prioritarios enunciados.”*

- Decreto N° 2.148 de Reservas Naturales Estrictas

Serán Reserva Natural Estricta aquellas *“áreas del dominio de la Nación de gran valor biológico que sean representativas de los distintos ecosistemas del país o que contengan importantes poblaciones de especies animales o vegetales autóctonas”*.

- Decreto N° 453 de Reservas Naturales Silvestres y Educativas

Reserva Natural Silvestre *“serán aquellas áreas de extensión considerable que conserven inalteradas o muy poco modificada la cualidad silvestre de su ambiente natural y cuya contribución a la conservación de la diversidad biológica sea particularmente significativa en virtud de contener representaciones válidas de uno o más ecosistemas, poblaciones animales o vegetales valiosas a dicho fin, a las cuales se les otorgue especial protección para preservar la mencionada condición”*.

- Ley N° 21.836: Aprobación de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1978).

Esta ley incluye el texto de la "Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural, y Natural" adoptado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO), en su decimoséptima reunión celebrada en la ciudad de París el 16 de noviembre de 1972.

- Ley N° 26.562/09: Presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema.

Esta ley tiene por objeto, según su Art. N°1 *“...establecer presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.”*. Las autoridades pertinentes de cada jurisdicción, según las asignen las

provincias, serán las encargadas de establecer condiciones y requisitos para la realización de las quemas.

- Ley N° 24.449/95 y Decreto N° 779/95. Ley Nacional de Tránsito

Establece condiciones de seguridad para el tránsito automotor y diversos aspectos ambientales como los límites permitidos sobre emisiones contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas.

- Ley N° 19.587/72, Decreto N° 351/79, Decreto N° 911/96 y Decreto 1338/96 de Higiene y Seguridad de Trabajo.

Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustaran en todo el territorio de la República Argentina a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en consecuencia se dicten. La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicológica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

- Ley N° 26.485. Protección Integral a las Mujeres.

Promulgada en el año 2009. En pos de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Promueve y garantiza la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

- Ley N° 23.302. Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes.

Promulgada en 1985. Reconoce la personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país. Crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y aborda la

adjudicación de tierras, la creación de planes de educación, salud y vivienda. Decreto N° 155/89 Reglamentario de la Ley N° 23.302.

- Ley N° 24.071 ratificatoria del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Este Convenio promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas y tribales.

- Decreto 672/2016

El Gobierno nacional crea mediante el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Entre sus principales objetivos, el Consejo deberá proponer un proyecto de reglamentación del derecho de consulta previa, libre e informada, de los pueblos indígenas, establecido en el convenio 169 de la OIT, e impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para “la efectiva posesión de las tierras por las comunidades”. Además deberá impulsar una reforma de la Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes (N° 23.032) que proponga una reglamentación al derecho a la consulta previa, libre e informada que se establece en el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

- Resolución Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) N° 4.811/96

Establece los requisitos para la inscripción de las Comunidades Indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI).

- Resolución INAI N° 152/2004 y su modificatoria N° 301/2004

Establece la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI)

- Ley 26.160 que suspende los desalojos en comunidades indígenas.

- Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2010

Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la comunicación con identidad, particularmente mediante la provisión de radioemisoras en las comunidades indígenas.

- Ley N° 21.499. Régimen de Expropiaciones.

Se refiere a la utilidad pública como fundamento de expropiación, los sujetos que pueden actuar como expropiantes, el objeto expropiable, la indemnización, el procedimiento judicial y el plazo de la expropiación. Particularmente sobre la indemnización se establece en el artículo 10 que “La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del

bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses.” En su Art. 4° se cita la calificación de utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, “comprendiendo todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual”. Su art. 5° dice que la “expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. Su Artículo 8° dice que: “Si se tratase de la expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble”. El Artículo 10° dice: “La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante.” La consulta previa no está contemplada en el régimen específico de la Ley 21.449.

ANEXO 5. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS PROYECTOS (EIAS)

Este anexo incluye los contenidos mínimos para una EIAS. Casi todos los proyectos requerirán mayor o menor énfasis en ciertas áreas, y los responsables deben adaptar TDR cuidadosamente para ajustarlo a las necesidades y características específicas de un proyecto.

Contenidos Mínimos: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL [NOMBRE DEL PROYECTO]

1. **Introducción.** *[Esta sección debe enunciar el objetivo de la evaluación, identificar el proyecto que será evaluado, y explicar los arreglos de ejecución para la EIAS]*
2. **Información de Antecedentes.** Los consultores o agencias del gobierno encargados de realizar la EIAS, deberán incluir una breve descripción de los principales componentes del proyecto propuesto, un enunciado sobre su necesidad y los objetivos que buscará alcanzar, la agencia implementadora, una historia breve del proyecto (incluyendo las alternativas consideradas), el estado actual y el cronograma, y la identificación de cualquier otro proyecto con que esté relacionado. También se incluirá una breve descripción de otros estudios (ej. análisis legal, análisis institucional, análisis económico, evaluación social, estudio de LB), ya que quién está llevando a cabo la EIAS debe coordinar con otros equipos, según sea necesario, para asegurar un intercambio de información efectivo y eficiente. También identificar otros proyectos planeados o en progreso en la región que pudieran tener efectos sinérgicos con el que resulta objeto de esta evaluación]
3. **Objetivos.** *[Necesidad a resolver con la EIAS, su relación con el ciclo total del proyecto involucrado concretamente y el producto entregable]*
4. **Requerimientos de la EIAS.** *[Normativas y criterios que rigen la realización de la EIAS, de acuerdo a la categoría del proyecto según la normativa provincial/municipal y la OP-703 del BID (A, B o C) para el tipo de proyecto. También debe incluir los requerimientos de otras políticas o normas del Banco pertinentes (según características sociales de la población involucrada, vulnerabilidad, situaciones de conflictos, hábitats naturales, propiedad cultural, manejo de pesticidas, reasentamiento involuntario, así como la política de acceso a la información); normas nacionales, provinciales o municipales sobre EIAS; regulaciones sobre EIAS de cualquier otra organización financiera involucrada en el proyecto]*
5. **Área de estudio.** *[Límites territoriales del área considerada para la EIAS (ej. población involucrada, régimen de ocupación del territorio, recolección de agua, atmósfera, etc.) y cualquier área adyacente o posiblemente afectada que deba ser considerada con*

respecto a los impactos particulares. Esta delimitación será la base para definir el alcance geográfico de las AID y AI del proyecto]

6. Alcance del Trabajo. *[En algunos casos, las tareas a ser realizadas serán conocidas con certeza suficiente como para ser completamente especificadas. En otros casos, deben ser resueltas deficiencias en la información o se deben realizar estudios de campo específicos o actividades de modelación para evaluar los impactos, y se deberán definir tareas particulares en más detalle].*

7. Tarea 1. Descripción del Proyecto. Breve descripción de sus partes relevantes, usando cartografía cuando sea necesario, e incluyendo, entre otros aspectos: localización; diseño general; tamaño, capacidad, etc.; actividades previas a la construcción; actividades de construcción; cronograma; contratación de personal y apoyo; instalaciones y servicios; actividades de operación y mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; y tiempo de vida útil. Identificar y describir el contexto estratégico en el cual se inserta el proyecto propuesto (p.ej. planes de gestión integrada de recursos hídricos, de ordenamiento territorial, de acción estratégica, etc.).

8. Tarea 2. Descripción Socio-Ambiental. Recopilar, evaluar y presentar información de LBAS relevante del AI. Se deberá complementar el relevamiento de información secundaria, con estudios de campo para recopilar datos primarios. Se sugiere evitar información general o estadísticas no conectadas con el objeto del estudio.

(a) Aspectos físicos: geología; topografía, suelos (incluyendo capacidad de filtración de los mismos); clima; calidad del aire; agua superficial y subterránea, hidrología; parámetros oceánicos y de costas; fuentes existentes de emisiones de aire; descargas de aguas contaminadas existentes; y calidad del agua recibida.

(b) Aspectos bióticos y ecológicos: flora; fauna; especies raras o amenazadas; hábitats sensibles, incluyendo parques y reservas; sitios naturales con importancia para la conservación, etc.; especies de importancia comercial; y especies con potencial de causar molestias, vectores o peligrosas.

(c) Pasivos Ambientales. Relevamiento, definición y, en su caso, caracterización, de la existencia de situaciones de contaminación vinculadas al sitio de emplazamiento del proyecto o sus alrededores, que pudiesen afectar el desarrollo de éste y que deban ser atendidas para su correcta implementación.

(d) Aspectos socio-culturales. Población; uso y ocupación del territorio; actividades de desarrollo planificadas; estructura de la comunidad; relaciones de género; empleo; distribución del ingreso, bienes y servicios; recreación; salud pública; patrimonio cultural; pueblos indígenas/tribales; y costumbres, aspiraciones y actitudes; organizaciones de base existentes, mapeo de actores, relaciones interinstitucionales, programas de desarrollo local, nacional o provincial.

(e) Relevamiento de la infraestructura presente en el AI, considerando las posibles afectaciones a las mismas.

[Se sugiere evitar la compilación de datos irrelevantes]

Tarea 3. Consideraciones legales y regulatorias. Describir las leyes, regulaciones y estándares pertinentes que regulen los derechos humanos, la interculturalidad, el género, el acceso a la información, así como también la calidad ambiental, la salud y la seguridad, la protección de áreas sensibles, la protección de especies amenazadas y sus hábitats, emplazamientos, control del uso de la tierra, etc., a nivel nacional, provincial y local. La descripción debe destacar su aplicabilidad en el proyecto.

[Especificar la legislación y las regulaciones conocidas e investigar acerca de otras, incluyendo consideraciones específicas del sector (ej. regulaciones de gestión de residuos, etc.)]

Tarea 4. Determinaciones de los Potenciales Impactos del Proyecto. Describir y analizar todos los impactos potenciales significativos del proyecto, distinguiendo entre negativos y positivos, directos e indirectos, acumulativos, e inmediatos y de largo plazo, así como los inevitables o irreversibles. En lo posible, describir los impactos cuantitativamente, en términos de costos y beneficios ambientales y sociales, asignando valores económicos cuando sea factible. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos disponibles, explicando las deficiencias de información significativa y cualquier incertidumbre asociada a las predicciones del impacto. Adicionalmente, identificar qué políticas de salvaguardia del BID serán aplicadas por las actividades del proyecto.

[Si fuera necesario, indicar: (i) cualquier estudio específico que posiblemente será necesario realizar para la evaluación de los impactos, o (ii) destacar las áreas que deben recibir énfasis especial (p. ej., mujeres, jóvenes, aspectos hidrológicos, etc.). Los estudios específicos o las áreas de énfasis son usualmente determinados por la aplicación de las políticas de salvaguardia, y pueden incluir temas tales como hábitats naturales críticos y no críticos, bosques, patrimonio cultural; tierras indígenas, riesgos de peligros naturales, etc.]

Tarea 5. Análisis de Alternativas para el Proyecto. Describir las alternativas examinadas durante el desarrollo del proyecto e identificar otras que podrían alcanzar los mismos objetivos. El concepto de alternativas se extiende al emplazamiento (selección de sitio), diseño, extensión, selección de tecnología, técnicas de construcción y establecimiento de etapas, minimización de impactos y procedimientos de operación y mantenimiento. Comparar las alternativas, tanto en términos de impactos ambientales potenciales, costos de capital y operativos, ajuste a las condiciones locales, y requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo, como en términos de impactos sociales y medidas de mitigación o de modificación del diseño de la obra en función de las necesidades de la población local. Al describir los impactos, indicar los irreversibles o inevitables y los posiblemente mitigables. Analizar las alternativas de tratamiento de efluentes, como p.ej. plantas biológicas. Incluir estudios sobre la generación de GEI, para c/u de las alternativas propuestas. En lo posible, cuantificar costos y beneficios de cada alternativa, cantidad de beneficiarios de las alternativas propuestas incorporando los costos estimados de cualquier medida de mitigación asociada. Incluir la alternativa “sin proyecto”, para demostrar qué se podría esperar razonablemente que ocurra a las condiciones ambientales y sociales en el futuro inmediato (basados en el desarrollo existente en marcha, uso de la tierra, y prácticas regulatorias y otros factores relevantes). Discutir la correspondencia de la alternativa seleccionada con el contexto estratégico (si

existiera) en el cual se inserte (planes de gestión integrada de recursos hídricos, de ordenamiento territorial, de acción estratégica, etc.).

[El análisis de las alternativas es requerido para proyectos de Categoría A y B]

Tarea 6. Desarrollo del PGAS para mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos. Recomendando medidas factibles y costo-efectivas. Estimar los impactos y los costos de dichas medidas, y los requerimientos institucionales y de capacitación para implementarlas. Considerar la compensación para las partes afectadas por impactos no mitigables. Incluir programas de trabajo propuestos, estimaciones de presupuesto, cronogramas, requerimientos de personal y capacitación, y otros servicios de apoyo necesarios para implementar las medidas de mitigación / potenciación (ver guía al final de este documento). Explicar cómo el proyecto cumplirá con los requerimientos (incluyendo las consultas) de la OP-703 y de los requerimientos ambientales de otras políticas de Salvaguardia aplicables como OP-761, OP-765, OP-710, OP-102. *[Dependiendo de las actividades del proyecto se deberá establecer si el PGAS debe incluir una parte o toda la información abajo listada.]*

- Cronograma del proyecto. Compuesto por:
 - Un cronograma de todas sus actividades, incluyendo las de capacitación;
 - Plan de adquisición de terrenos usados por el proyecto;
 - Monitoreo y evaluación; y
 - Supervisión
- Operación del Proyecto. Describe cómo el proyecto será ejecutado enfatizando, según sea necesario:
 - Operación general;
 - Capacitación ambiental y social que será dada a los operadores;
 - Niveles de ruidos esperables durante la operación;
 - Manejo de desechos sólidos (cajas, plásticos, llantas, tubos, etc.) y líquidos (aceite usado, pinturas y disolventes, aguas residuales);
 - Manejo de desechos patogénicos (desde la generación hasta la disposición), tipos de procesos y tecnologías usadas para tratarlos;
 - Fuentes de agua para consumo humano y operaciones del proyecto;
 - Tipos y volumen de materiales que serán obtenidos (ej. pozos, extracción de ríos; origen y especie de la madera usada), cómo serán transportados hasta el sitio del proyecto, y sitios propuestos para la disposición de los escombros);
 - Planes para el manejo adecuado de pesticidas, en caso que se utilicen para operar el proyecto.
 - Planes de operación y mantenimiento específicos.

Tarea 7. Identificación de las Necesidades Institucionales para Implementar las Recomendaciones de la EIAS. Revisar los niveles de autoridad intervinientes y capacidad de las instituciones a nivel local, provincial, y nacional y recomendar los pasos para fortalecerlas o expandirlas para poder implementar los planes y programas de la EIAS. Recomendar nuevas leyes y regulaciones, nuevas agencias o nuevas funciones de agencias, arreglos intersectoriales, procedimientos administrativos y capacitación, contratación de personal, capacitación en operación y mantenimiento, presupuesto, y apoyo financiero.

Tarea 8. Desarrollo de un Plan de Monitoreo de la implementación de las medidas de mitigación /potenciación y los impactos del proyecto durante construcción y operación. Incluir un estimativo de los costos de capital y de operación del plan y una descripción de otros recursos (como ser capacitación y fortalecimiento institucional) que sea necesario llevar a cabo. El plan de monitoreo debe incluir también una descripción de la LBAS para la evaluación de largo plazo de los impactos del proyecto.

Tarea 9. Consultas públicas (CPs). Asistir en la Consulta Pública/ONGs. Asistir en la coordinación de la EIAS con otras agencias gubernamentales, para obtener la visión de las ONGs locales y de los grupos afectados, y mantener un archivo de las reuniones y otras actividades, comunicaciones, y comentarios y su disposición acerca del proyecto.

[Especificar las actividades planeadas para CP.]

Informe. El informe de EIAS debe ser conciso y limitado a temas ambientales y sociales significativos. El texto principal debe enfocarse en hallazgos, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por resúmenes de los datos recopilados y en las citas de cualquier referencia usada para la interpretación de los mismos. Datos detallados o sin interpretar no son apropiados para el texto principal y deben ser presentados en apéndices o en volúmenes separados. El uso en la EIAS, de documentos sin publicar puede que no esté lista para su uso y también deben formar parte de un apéndice.

Organizar el informe de EIAS de acuerdo con los siguientes lineamientos:

(a) Resumen ejecutivo. Discute concisamente los hallazgos significativos y las acciones recomendadas.

(b) Marco de política, legal y administrativo. Discute el marco de política, legal y administrativo dentro del cual la EIAS es llevada a cabo. Explica los requerimientos ambientales y sociales de cualquier otro co-financiante. Identifica los acuerdos ambientales y sociales internacionales de los cuales el país es parte. En todos los casos se especifica la aplicabilidad del tal marco en el proyecto.

(c) Descripción del proyecto. Describe concisamente el proyecto propuesto y su contexto geográfico, ecológico, social y temporal, incluyendo cualquier inversión fuera del sitio que pueda ser requerida (ej. tuberías dedicadas, rutas de acceso, plantas de energía, provisión de agua, alojamiento, y materiales crudos y lugares de almacenamiento de

productos). Indica la necesidad de cualquier PRI o PPI (ver también párrafo (h) abajo). Normalmente incluye un mapa señalando el sitio del proyecto y el AI del proyecto.

(d) Datos de LBAS. Evalúa las dimensiones del área del estudio y describe las condiciones físicas, biológicas, y socioeconómicas relevantes, incluyendo cualquier cambio anticipado antes de que comience el proyecto. Describirá separadamente, cuando corresponda, la problemática de Pasivos Ambientales y Sociales Identificados. También tiene en cuenta las actividades de desarrollo actuales y propuestas dentro del AI del proyecto, pero no directamente conectadas al mismo. Los datos deben ser relevantes para las decisiones sobre localización, diseño, operación y medidas de mitigación del proyecto. La sección indica la exactitud, confiabilidad, y fuentes de los datos.

(e) Impactos ambientales y sociales. Predice y evalúa los probables impactos positivos y negativos, en términos cuantitativos hasta el punto en que sea posible. Identifica las medidas de mitigación y cualquier impacto negativo residual que no pueda ser mitigado. Explora oportunidades para la mejora del ambiente y de los/as pobladores locales. Identifica y estima la cantidad y calidad de los datos disponibles, datos clave faltantes, e incertidumbres asociadas con predicciones, y especifica temas que no requieren atención adicional.

(f) Análisis de alternativas. Sistemáticamente compara alternativas factibles al sitio, la tecnología, el diseño y la operación del proyecto – incluyendo la situación “sin proyecto” – en términos de sus impactos ambientales potenciales y considerando las características sociales de la población y su régimen de ocupación y vinculación con el territorio; la factibilidad de mitigar estos impactos; los costos de capital y recurrentes; su ajuste a las condiciones locales; y sus requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo. Para cada una de las alternativas, cuantifica los impactos ambientales y sociales siempre que sea posible, y adjunta valores económicos cuando sea factible. Establece la base para la selección del diseño particular del proyecto elegido y justifica los niveles recomendados de emisión y enfoques de prevención y reducción de la contaminación.

(g) PGAS. Cubre las medidas de mitigación, el cronograma de implementación, el monitoreo, el fortalecimiento institucional, y los costos estimados;

(h) Apéndices

(i) Lista con los autores del informe de la EIAS – individuos y organizaciones.

(ii) Referencias – materiales escritos (publicados y no publicados) usados en la preparación del estudio.

(iii) Minutas de las reuniones de consulta, incluyendo las consultas para la obtención de las visiones informadas de comunidades/personas afectadas y organizaciones no gubernamentales locales (ONGs). Especifica cualquier medio aparte de las consultas (ej. encuestas) que fueron usados para obtener la visión de los grupos afectados y las ONGs locales.

(iv) Tablas presentando los datos relevantes a los que se refieren o que fueron presentados en forma resumida en el texto principal.

(v) Lista de informes relacionados (ej. PRI o PPI).

Otra información. *[Incluir aquí listas de fuentes de datos, informes y estudios de antecedentes del proyecto, publicaciones relevantes, y otros ítems a los que debe prestar atención el consultor]*

ANEXO 6. CONTENIDOS MÍNIMOS Y REQUISITOS DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

El PGAS a realizar estará fundamentado, principalmente, en la EIAS (y en otros instrumentos como el plan de reasentamiento, plan de comunicación, desarrollo institucional, monitoreo, etc.) y deberá considerar las normativas sociales y ambientales nacionales, provinciales y/o municipales como, de estar involucradas, aquellas de régimen de protección de áreas.

El citado PGAS contemplará los permisos, seguros y autorizaciones de las Autoridades de Aplicación competentes que requerirá el Contratista para la ejecución del proyecto, los que deberán ser gestionados y obtenidos antes del inicio de la obra. Entre los permisos que deberán obtenerse, pueden incluirse:

- Certificado de Calidad Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera; Ley N° 24.585).
- Permisos de captación de agua.
- Disposición adecuada de materiales de desbosque y de excavaciones.
- Localización de obrador y campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas a zonas urbanizadas).
- Inscripción como generador de residuos peligrosos.
- Disposición de residuos sólidos.
- Permisos de transporte y disposición final de residuos: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).
- Transporte, vuelco y disposición final de efluentes líquidos.
- Vuelco de Efluentes Gaseosos.
- Utilización y Explotación de Recursos Hídricos.
- Habilitación y Permisos de los vehículos que transportan materiales para la obra o sustancias químicas o peligrosas.
- Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural o histórico, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
- Habilitación de depósitos de combustible por parte de la autoridad competente.
- Extracción de especies forestales.
- Manejo de áreas y de especies naturales protegidas.
- Permisos para reparación de caminos, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construcción de vías de acceso.
- Seguro Obligatorio de Caución por daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

Los requisitos de estos permisos y de otros que podrán solicitarse, de acuerdo a las características particulares de los sectores interesados por la obra, deberán ser acatados por el Contratista durante su ejecución.

El PGAS a realizar contendrá todas las medidas de manejo ambiental y social específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, identificadas en el Pliego Técnico Particular, tendientes a eliminar o minimizar todos los aspectos que resulten focos de conflictos socio-ambientales, tales como (lista no taxativa): selección de los sitios de campamento, préstamo de material, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, afectación a actividades productivas (pesquerías, explotación de recursos forestales), y la fase de abandono, relaciones intercomunitarias. Asimismo, incluirá los requerimientos para el desarrollo de un plan de operación y mantenimiento y de los principales lineamientos de manejo ambiental y social que corresponden a la fase operacional del proyecto.

El PGAS detallará en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental y social posible. Para la elaboración del PGAS, se deberán contemplar aspectos atinentes a:

Diseño y organización

Para el diseño del PGAS, se desagregará el proyecto en sus actividades, identificando el riesgo socio-ambiental que cada una de ellas ofrece y estableciendo las correspondientes medidas y procedimientos de manejo para prevenir o mitigar dicho riesgo, en consistencia con las medidas de mitigación identificadas en la EIAS. Asimismo, determinará la organización que permita la ejecución y control efectivo de las actividades de manejo ambiental y social que realizará el Contratista, el que deberá contar con un Responsable Ambiental y un Social encargado de la ejecución el PGAS. En esa misma línea, se identificará las medidas y las responsabilidades ambientales y sociales para la fase de operación.

Plan de Capacitación del PGAS

Se definirá un Plan de Capacitación que el Contratista llevará a cabo desde la fase de admisión de personal (inducción ambiental y social) en forma verbal y escrita, a fin de proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que su personal y subcontratistas deberán utilizar para el cumplimiento del PGAS en la obra.

Para la fase de operación, se deberá prever una instancia de capacitación relacionada con el plan de operación y mantenimiento del proyecto.

Plan de Acción del PGAS

Con base en los estudios ambientales y sociales efectuados, se definirán las actividades que garanticen la eliminación, prevención o control de los riesgos ambientales y sociales detectados, con el respectivo cronograma de ejecución de las medidas identificadas. Los principales componentes a ser considerados, entre otros posibles, son:

ETAPA PRE-CONSTRUCTIVA

- Programa de difusión del proyecto y comunicación social (asociado a la Consulta Pública)
- Programa de difusión del proyecto e información a la comunidad (post licitatorio)

ETAPA CONSTRUCTIVA

- Programa de gestión ambiental y social de la obra y control de la contaminación ambiental
 - Subprograma de manejo de fauna, vegetación y arbolado
 - Subprograma de gestión del movimiento de suelos
 - Subprograma de manejo de canteras
 - Subprograma de protección de los recursos hídricos y drenaje
 - Subprograma de gestión de residuos
 - Subprograma de manejo y transporte de materiales contaminantes y peligrosos
 - Subprograma de gestión ambiental y social del obrador
 - Subprograma de maquinaria y equipos
 - Subprograma de plantas de materiales
 - Subprograma de manejo de las interferencias
 - Subprograma de suspensión temporal por períodos prolongados
 - Subprograma de transporte durante la construcción
 - Subprograma de desmovilización y restauración. Cierre de obrador
- Programa de equidad de género y código de conducta del personal
- Programa de salud y seguridad en el trabajo
- Programa de contingencias
- Programa de seguridad vial y de bicicletas, ordenamiento de tránsito y señalización
- Programa de luminarias
- Programa de comunicación social
- Programa de gestión de quejas y reclamos durante la etapa de construcción
- Programa para evitar/minimizar afectaciones a actividades económicas
- Programa de protección del patrimonio cultural
- Programa de supervisión del cumplimiento de las medidas de mitigación

ETAPA OPERATIVA

- Programa de gestión de quejas y reclamos durante la etapa operativa
- Programa de control del tránsito y seguridad vial
- Programa de respuesta ante contingencias
- Programa de instalación y mantenimiento del sistema de cartelería

De aplicar, en el PGAS se integrarán el Plan de Reasentamiento Involuntario y el Plan de Pueblos Indígenas, como así otros Planes de Manejo Especial eventualmente desarrollados.

Medidas de mitigación:

Medidas de mitigación sobre el medio físico- natural

- MM – 1: Aire (emisiones sonoras, vibraciones y calidad del aire)
- MM – 2: Agua (calidad del agua, drenaje y escurrimiento)
- MM – 3: Relieve y suelo (topografía, estructura y calidad de suelos)
- MM – 4: Vegetación y fauna (abundancia y diversidad)
- MM – 5: Paisaje (arbolado y espacios verdes)

Medidas de mitigación sobre el medio socio-económico

- MM – 6: Calidad de vida de la población, junto con “Buenas prácticas destinadas a la prevención y protección del personal en obra (salud y seguridad ocupacional)”.
- MM – 7: Infraestructura de servicio y equipamiento
- MM – 8: Actividades productivas y económicas
- MM – 9: Turismo y esparcimiento
- MM – 10: Aspectos socioculturales, actividades y usos del suelo
- MM – 11: Tránsito y transporte vial, junto con “Buenas prácticas destinadas al control del tránsito y seguridad (vial y peatonal)”.

Plan de Retiro de Obra

Se determinarán las actividades que aseguren durante esta fase el tratamiento ambiental de los sectores interesados por la obra a los efectos de lograr su restauración, como asimismo evitar la generación de impactos. Se considerarán aspectos tales como: transporte de equipos, desmantelamiento de campamentos-obradores y otras instalaciones, demolición de construcciones, limpieza y disposición de residuos y

escombros. Para zonas de explotación de materiales se prepararán los esquemas de revegetación.

Plan de Seguimiento

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la Unidad responsable del proyecto establecerá los mecanismos y acciones que deberá implementar el Contratista para un adecuado seguimiento del PGAS. Las actividades a desarrollar son: (i) Monitoreo; (ii) Inspecciones; (iii) Informes.

(i) Se programará los muestreos a efectuar por el Contratista a fin de constatar la buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones.

(ii) Se elaborará una lista de chequeo para ser completada por el Contratista, que tendrá por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PGAS.

(iii) Se fijará el contenido de los Informes mensuales a ser elevados por el Contratista, conteniendo el avance y estado de cumplimiento del PGAS que incluirá un resumen de los incidentes y accidentes ambientales y sociales con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas.

El PGAS elaborado deberá incluirse dentro de los Pliegos de Licitación, a fin de que el Contratista incluya en su oferta las acciones y medidas a implementar a fin de prevenir, mitigar y/o compensar los potenciales impactos en la etapa de ejecución de la obra.

Al PGAS lo acompañarán el Plan de Reasentamiento Involuntario y/o el Plan de Pueblos Indígenas, de acuerdo a lo previsto en el MPRI y MPPI, cuando sea pertinente.

Ficha tipo de los PGAS para los programas:

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL					
Área de Aplicación	Área Operativa		De influencia directa		De influencia indirecta
Responsables por la contratista	Implementación				
	Supervisión				
Objetivo					
Características y Contenidos					
Medidas de mitigación relacionadas					

PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y COMUNICACIÓN SOCIAL	
Indicadores de éxito	
Supervisión externa	
Observaciones	

Ficha tipo de los PGAS para las medidas de mitigación:

FACTOR AMBIENTAL	NOMBRE DEL FACTOR AMBIENTAL
MM – 1	
Principales acciones potencialmente causante de impactos negativos	<u>[Listar Etapas y tareas de obra pertinentes a esta MM]</u>
Descripción de la Medidas: <ul style="list-style-type: none"> <u>[Describir las MM planteadas para este componente]</u> 	
Indicadores de éxito: <ul style="list-style-type: none"> <u>[Describir los indicadores de éxito de las MM planteadas para este componente]</u> 	

ANEXO 7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS)

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) puede considerarse como complementario del Plan de Gestión Ambiental y Social y se elabora y aplica luego de la licitación y adjuncación de la obra, por parte del contratista. Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales y sociales, la consideración de medidas de mitigación provenientes de la aprobación de la autoridad competente luego de la Consulta Pública, la prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el desarrollo de proyectos, a los fines de cumplir con las especificaciones técnicas, la legislación ambiental y garantizar que se alcancen los estándares que se establezcan. Conforme el MEGA (Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, elaborado por la Dirección Nacional de Vialidad), su aplicación es principalmente a escala local y sobre el área operativa, aunque no debe excluirse la consideración del área de influencia si la complejidad del caso lo justifica. El PMAS se desarrolla para las instancias de construcción (PMASc), de mantenimiento (PMASm) y de operación (PMASo). Sus contenidos y su cumplimiento es responsabilidad de la Autoridad de Aplicación local y es materializado por la empresa contratista o entidad responsable.

2. OBJETIVOS

El objetivo general del PMAS es asegurar la correcta gestión ambiental y social de las diferentes acciones de la obra vial durante las fases de construcción (PMASc), de mantenimiento (PMASm) y de operación (PMASo), como así también evitar la afectación de la calidad ambiental y social del medio receptor del emprendimiento, en sus aspectos naturales y socioeconómicos.

En cuanto a los objetivos particulares, el PMAS debe exponer, de manera detallada y ordenada, el conjunto de Programas, Subprogramas, acciones y recomendaciones dirigidas a evitar, mitigar y/o controlar los efectos negativos de la materialización del proyecto. El PMAS se elabora en base al proyecto ejecutivo e incluye las decisiones del contratista respecto de la gestión y cronograma de obra.-

3. CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDOS

Conforme el MEGA, las acciones y cronograma del PMAS deberá correlacionarse con el Plan de trabajo, en cada etapa del proyecto. El PMAS debe incluir los responsables de su ejecución, el cronograma y los recursos necesarios para su adecuada implementación en el sitio de obra y en el área de influencia del emprendimiento vial.

Los Programas y Subprogramas que integrarán el PMAS debe realizarse de acuerdo a la etapa del ciclo del proyecto y a la complejidad del medio receptor y de la obra vial. En

el siguiente cuadro se resumen los diferentes alcances del PMAS para cada etapa del ciclo del proyecto vial.

Para cada uno de los Programas y Subprogramas deberá especificarse la siguiente información:

- Cronograma de aplicación
- Responsables de su ejecución y control
- Localización espacial de las actividades de cada Programa y Subprograma
- Recursos tecnológicos disponibles y metodologías a implementar
- Recursos económicos a aplicar
- Procedimientos de comunicación

Se destaca que la operacionalización de las medidas y acciones de mitigación de impactos negativos y de optimización de impactos positivos, ya identificadas a nivel del EIAS constituyen el objetivo fundamental del PMAS. La citada operacionalización está relacionada con:

- Construcción de las Obras
- Áreas de asentamiento humano
- Áreas con actividades productivas
- La protección contra accidentes y contingencias
- La protección de la salud
- El control de ruidos
- La geología y geomorfología
- La hidrología superficial y subterránea
- La protección de los suelos
- La vegetación
- La fauna
- El paisaje
- La conservación de la naturaleza
- El patrimonio cultural
- El ordenamiento territorial
- La capacitación laboral
- El fortalecimiento institucional de las organizaciones de base: pequeños productores, micro y pequeñas empresas, instituciones municipales, etc.
- Empoderamiento de la mujer a través de un Plan de Desarrollo Local Integrado.

4. PENALIDADES

Finalmente, en cuanto a las penalidades, el contratista deberá ajustarse estrictamente a los tiempos y secuencias establecidas en el Plan de Trabajo acordado con la Inspección de Obra, previo al inicio de la misma.

En el caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en estas Especificaciones del PMAS será advertido mediante Orden de Servicio (OS) por la Inspección, la que dará un plazo para su corrección.

Por incumplimiento de lo dispuesto por la Inspección en la OS, el Contratista será pasible de las siguientes sanciones u otras que se establezcan en el documento de la licitación:

a) La Inspección reiterará nuevamente por escrito al Contratista de las no conformidades observadas en la OS y lo intimará a dar cumplimiento de inmediato.

b) Por infracción a los dos llamados de advertencia por parte de la Inspección, ésta notificará a la brevedad al Comitente y, dependiendo de cada Programa se procederá, ya sea, a la Retención del Monto Mensual del Certificado de Obra correspondiente a la designación indicada en el PMAS, o bien a multar al Contratista. En el primer modelo de sanción, pasados los dos meses de Retención consecutiva del Certificado de Obra, el Comitente se quedará con dicha suma en concepto en Multa y el Contratista no podrá realizar reclamo alguno.

c) También en el caso del primer modelo de sanción, si continuara el incumplimiento por parte del Contratista, además de la retención del monto mensual del certificado de obra correspondiente a la designación PGAS, que no tendrá reintegro alguno, se aplicará la Multa mensual del 5% del monto total del Contrato asignado para el PMAS.

No se realizará la Recepción Provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado, a satisfacción de la Inspección, los trabajos de limpieza, revegetación y restauración de las zonas de préstamo.

ANEXO 8. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PROYECTO

1.1. Objetivo General

El Plan de Pueblos Indígenas pretende que las obras del proyecto logren:

- Garantizar la participación informada y culturalmente apropiada de las Comunidades Indígenas Afectadas (CIAs).
- Evitar y/o mitigar los posibles impactos adversos de las obras del proyecto en las CIAs así como en la población que habita en el área de influencia operativa del proyecto.
- Generar beneficios directos para las CIAs para mejorar sus condiciones de vida en general.
- Favorecer la recepción de beneficios sociales y económicos generados por el proyecto por parte de las CIAs de forma tal que sean culturalmente apropiados e inclusivos desde el punto de vista inter -generacional y de género.
- Promover el fortalecimiento de las capacidades organizativas, asociativas y de gestión de las CIAs, a través de planes de capacitación específicos.

1.2. ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PPI

La elaboración del Plan de Pueblos Indígenas implicará las siguientes acciones:

- Intercambios para el mutuo conocimiento entre representantes de la Contratista, el Organismo Ejecutor, la UEC, las Comunidades Indígenas Afectadas (CIAs) y las organizaciones sociales presentes en el área de influencia.
- Realización de reuniones con los/as líderes de las CIAs en forma conjunta con funcionarios de la Empresa y representantes del Organismo Ejecutor, de la UEC, y representantes de la sociedad civil, asegurando la representatividad de todos los grupos indígenas presentes en el área de influencia.
- Recolección de información de los trabajos previos descriptivos acerca de la situación de estas comunidades.
- Consideración del hecho de que donde haya pueblos no indígenas que habiten en la misma zona que las CIAs, el Plan de Pueblos Indígenas se elabore y desarrolle de manera tal que se eviten desigualdades innecesarias entre los grupos sociales.
- Realización de reuniones y talleres con líderes indígenas y criollos, instituciones y organismos atinentes y beneficiarios/as futuros/as de las CIAs.

1.3. DIVULGACIÓN Y CONSULTAS DEL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS

La publicación de los resultados de la Evaluación Social, incluidas las consultas y el PPI deben ser publicadas en las páginas web de la UEC.

Asimismo, las consultas continuarán durante todo el proceso de implementación del PPI, particularmente en los talleres de desarrollo de los Planes de Acción Anuales y Monitoreo y Evaluación que incluyen diferentes líneas de actividades, entre ellas, el Programa de divulgación, consulta y comunicaciones culturalmente adecuadas (por ejemplo en forma bilingüe). Otros detalles de difusión y consulta del PPI relacionados con el ciclo del proyecto, serán desarrollados con las CIAs en el marco de la línea de actividades, tendientes a la instrumentación de la Política. Todas las acciones de divulgación y consulta serán realizadas en forma culturalmente adecuada (por ejemplo en lengua indígena si fuera conveniente) para asegurar la difusión y comprensión de la información y para generar las condiciones para que todos los pobladores indígenas puedan canalizar sus inquietudes y consultas y reclamos.

Del mismo modo, se asegurará que el proceso de consultas a las CIAs:

- Favorezca la inclusión inter-generacional y de género;
- Brinde, en cada etapa de la preparación y ejecución del proyecto, oportunidades de consulta a las CIAs, y otras organizaciones de la sociedad civil que señalen las CIAs;
- Emplee métodos de consulta adecuados a los valores y condiciones sociales y culturales de las CIAs y a sus condiciones locales y, en el diseño de estos métodos.
- Preste especial atención a las inquietudes de las mujeres, los jóvenes y los niños indígenas, para que todos ellos puedan acceder a las oportunidades y ventajas que ofrezca el proyecto.
- Informe a las CIAs de todo lo pertinente al proyecto de una manera apropiada desde el punto de vista cultural en cada etapa de la preparación y ejecución de la obra, utilizando un enfoque bilingüe para asegurar la correcta transmisión a las CIAs.

Se garantizará que las CIAs:

- Participen de la etapa de identificación del proyecto, aportando sus visiones, necesidades en pos de lograr impactos positivos directos para las comunidades.
- Reciban la documentación y el material correspondiente al proyecto, en formato y lengua apropiados culturalmente y en lengua originaria;
- Tengan conocimiento sobre la evaluación social y/o el Plan de Pueblos Indígenas a través de medios apropiados;
- Sean abordadas durante el proceso por personal idóneo, incorporando personal indígena al equipo de trabajo.

1.4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE PUEBLOS INDÍGENAS

Las Propuestas elaboradas por el equipo técnico de evaluación social deberán tomar en consideración los siguientes ejes temáticos:

- Mejorar el acceso a los beneficios de la obra
- Fortalecimiento de la gestión local en distintos temas de relevancia para cada CIA en particular, que tiene como objetivos:
 - Establecer acuerdos que posibiliten la definición de estrategias comunitarias que fortalezcan a cada Asociación en relación a los beneficios y oportunidades de las obras.
 - Generar espacios, donde en relación a los beneficios y oportunidades de las obras.
 - Se fortalezcan prácticas de intercambio entre las/os integrantes de las CIAs, a fin de compartir experiencias de cada zona, identificar situaciones comunes y acordar estrategias conjuntas.
 - Se analicen distintas problemáticas relacionadas con aspectos vinculados a cuestiones de carácter socio comunitario.

1.5. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PPI

El PPI contará con un sistema de monitoreo y evaluación, que se presupuesta y que consensua con las CIAs antes del inicio de la implementación del Proyecto, en el desarrollo del Plan de Acción del PPI. El objetivo del sistema de monitoreo y evaluación es facilitar la realización de ajustes o refuerzos a las actividades previstas y medir el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos inicialmente.

También se contará con una evaluación independiente. Los aspectos a monitorear y evaluar incluyen aspectos tales como implementación de las líneas de actividades, procesos y productos, ejecución del presupuesto, participación de las CIAs, profesionales que trabajen con las CIAs, grado de adecuación de las actividades y materiales a las características culturales indígenas, impactos en las CIAs.

El personal y las organizaciones que realicen las actividades del PPI serán capacitados en técnicas de monitoreo y de evaluación participativos con pueblos indígenas.

ANEXO 9. TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO

El Plan de Reasentamiento (PR) pretende:

- Identificar a los grupos de personas, hogares y actividades formales e informales que serán afectados por el desplazamiento físico y/económico;
- Determinar las principales características de los predios, las diferentes formas de tenencia de la tierra y condiciones de los afectados;
- Asegurar que las personas, hogares y actividades afectados por el desplazamiento sean indemnizadas y compensadas de manera equitativa y adecuada;
- Mejorar, o al menos restablecer, los medios de vida y las condiciones de vida de las personas y hogares afectados conforme a lo definido por el PRI;
- Realizar el seguimiento del cumplimiento del PRI en cuanto a verificar que los compromisos y acciones relacionadas con el acceso a la vivienda, con las medidas económicas y de asistencia social planteadas se cumplan; y
- Realizar el monitoreo del restablecimiento de las condiciones de vida de los hogares y actividades desplazadas conforme a lo prescrito en el PRI.

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE BASE DEL REASENTAMIENTO

El estudio de base deberá incluir como mínimo las alternativas del proyecto evaluadas para evitar o minimizar las afectaciones, principales componentes del proyecto relacionados con las expropiaciones y reasentamientos, y caracterización socioeconómica de los afectados.

La caracterización socioeconómica incluirá detalle de los hogares y actividades afectadas por las obras como: análisis de género, nacionalidad, ingresos, cantidad de hogares por vivienda, presencia de personas con discapacidad, cobertura de salud, etc.

3. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y ACTIVIDADES AFECTADAS POR EL PROYECTO

- Definición de los derechos de las personas afectadas en relación con el acceso a la información sobre planes del proyecto y del traslado, lineamientos y normas de compensación, derechos y procedimientos conforme a la ley;
- Definición de la población afectada por el proyecto y, por ende, acreedora a una compensación (incluirá a todos los que pierdan tierras, acceso a recursos naturales, cambios significativos en sus formas de vida, etc. y a quienes sufran la pérdida de sus viviendas). Los criterios para ello deben ser claros y específicos y sentar las bases para determinar la elegibilidad, por ejemplo la antigüedad de la tenencia o la ubicación física en el lugar afectado. Hay que fijar los plazos para la tasación de las pérdidas y la definición de las unidades familiares y delinear claramente los criterios de selección;
- Descripción de la compensación que se ha de dar y de las normas de compensación por la pérdida de vivienda, tierras, propiedad, empleo y acceso a los servicios básicos;

- Descripción de los criterios de rehabilitación para el restablecimiento de los ingresos y el nivel de vida; y
- Descripción de los derechos y procedimientos para la solución de controversias relativas a las decisiones en materia de compensación y reasentamiento.

4. PROCEDIMIENTOS DE COMPENSACIÓN

- **Descripción de los procedimientos de compensación y su marco cronológico.**
- **Expropiación e indemnización:**
 - Descripción de los procedimientos de expropiación e indemnización.
 - Descripción de los procedimientos de reclamo por la compensación adjudicada.
- **Lugar de reasentamiento y soluciones de vivienda:**
 - Criterios para la selección del sitio, incluidos la ubicación geográfica, distancia de las zonas afectadas, fuentes de empleo, acceso a servicios como escuelas, centros de salud, transporte público;
 - Encuesta de la población de acogida en el lugar del reasentamiento o sus alrededores y de sus patrones de utilización de los recursos. Determinación de posibles fuentes de conflicto o cooperación entre la población de acogida y la población reasentada;
 - Limitaciones de carácter ambiental, social y de salud en la zona de acogida;
 - Definición y diseño de soluciones de vivienda (lotes y servicios, unidades de habitación mínima para construcción gradual, unidades completas, etc.);
 - Procedimientos de construcción (si las unidades han de ser construidas por organismos de gobierno o contratistas, identificación de las oportunidades de empleo para las personas afectadas. En los casos de lotes y servicios o de construcción gradual, identificación de fuentes de asistencia técnica y financiera para la construcción, por ejemplo bancos de materiales, manuales de normas mínimas);
 - Para los reasentamientos rurales, definición de las soluciones referentes a las tierras de agricultura o pastoreo, calidad de los suelos, declive, acceso al agua, preparación inicial y plantación, estrategia de uso óptimo y conjunto de insumos agrícolas iniciales;
 - Determinación de los mecanismos de financiamiento (subsidio inicial, determinación de los costos privados y la capacidad de pago, mecanismos de recuperación de costos y sus respectivas condiciones financieras);
 - Mecanismos para la transferencia de títulos; y
 - Disposiciones relativas a la infraestructura comunitaria y los servicios básicos. (electricidad, agua, alcantarillado, calles, escuelas, centros de salud, parques y espacios de recreo, transporte público, centros comunitarios y guarderías infantiles).

- **Rehabilitación económica y social:**
 - Descripción de las estrategias para la rehabilitación económica, por ejemplo capacitación laboral, crédito o extensión agrícola o préstamos para microempresas;
 - Descripción de las estrategias para la organización de la comunidad, en lo posible recurriendo a las instituciones y mecanismos sociales existentes, de manera que pueda lograrse la autonomía lo antes posible; y
 - Descripción de las estrategias de asistencia a quienes sufran traumas sociales y psicológicos.
- **Traslado y reubicación materiales:**
 - Calendario del traslado, estrategia y asistencia;
 - Medidas de transición a corto plazo (mantenimiento, organización de la comunidad, atención de salud, suplementos alimentarios, asistencia para la autoconstrucción, compensación de otra índole.); y
 - Planes de emergencia para casos de desastre o agitación social

5. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL

- Legislación aplicable a las expropiaciones y el reasentamiento.
- Designación de la entidad que tendrá la responsabilidad primordial por el reasentamiento:
 - Necesidades de personal; y
 - Necesidades de fortalecimiento institucional.
- Definición de la responsabilidad institucional por:
 - Avalúo y tasación de los bienes materiales.
 - Expropiación e indemnización.
 - Registro de propiedades y títulos de propiedad de las tierras.
 - Estudios de base.
 - Diseño del plan de reasentamiento.
 - Solución de controversias.
 - Construcción de viviendas.
 - Financiamiento de las viviendas.
 - Preparación del sitio y construcción de infraestructura.
 - Funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de servicios.
 - Servicios sociales.
 - Asistencia para el empleo y nueva formación profesional.
 - Traslado y transición.
 - Supervisión y evaluación.
 - Prevención de la reocupación.
- **Mecanismos de coordinación interinstitucional:**
 - Descripción de los mecanismos de coordinación; y

- Requisitos jurídicos para la coordinación interinstitucional (contratos, convenios, etc.).
- **Participación de organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria:**
 - Organizaciones existentes que puedan participar en la preparación, ejecución y supervisión del reasentamiento; y
 - Fortalecimiento institucional de las organizaciones de base comunitaria y no gubernamentales existentes.
- **Medidas para evitar la especulación con las tierras.**

6. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

- Estrategias de comunicación social e información pública. Explicación de la política de reasentamiento, fechas, procedimientos legales de recurso, cronograma del traslado, Mecanismos de transporte y acceso a la asistencia transitoria:
 - Anuncios por medios de difusión;
 - Reuniones públicas; y
 - Calendario de actividades de información pública.
- Participación de la comunidad en la preparación y supervisión de planes de reasentamiento. Debe incluir parámetros claramente definidos en cuanto a la función de:
 - las organizaciones de base comunitaria;
 - las organizaciones no gubernamentales;
 - los grupos consultivos y de expertos;
 - Disposiciones especiales para la participación de los grupos particularmente vulnerables y las minorías;
 - Estrategias de ayuda mutua; y
 - Funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de servicios.
- **Participación de la comunidad en la ejecución del proyecto:**
 - Estrategias de autoayuda.

7. MARCO CRONOLÓGICO

- Integración con los calendarios de construcción, desplazamiento, asignaciones temporales y asignaciones definitivas.
- Compatibilidad con los imperativos socioeconómicos (ciclo agrícola, año escolar, etc.).

8. PRESUPUESTO

El presupuesto debe incluir, además del costo de adquisición de tierras y construcción de viviendas, todas las necesidades de personal para la ejecución del plan, las asignaciones de equipo, el financiamiento de los mecanismos de consulta con la población y el costo de elaboración y ejecución de los programas de rehabilitación.

9. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

- Indicadores de la ejecución del proyecto.
- Indicadores de los efectos del proyecto.
- Supervisión independiente de los procedimientos de indemnización.
- Metodología para la reunión de datos: Estrategia; y Organismo responsable.
- Fechas y frecuencia de los informes.

10. NOTAS METODOLÓGICAS

Descripción de los métodos y técnicas utilizados o que se han de utilizar en los estudios de base y la preparación, ejecución, supervisión y evaluación del plan de reasentamiento.

ANEXO 10. MANUAL DE GESTIÓN DE RECLAMOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE RESOLUCIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA (MGRAS)

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Gestión de Reclamos Ambientales y Sociales (MGRAS) establece los objetivos y alcances de su aplicación, a cargo del contratista. En caso de no resolverse la queja o conflicto, se seguirá lo establecido en el MGAS.

2. GENERALIDADES, OBJETIVO Y ALCANCE

2.1. Generalidades

El análisis y resolución de reclamos y conflictos, deberá estar, en primera instancia, a cargo del Responsable Ambiental y Social (RAS) del Contratista.

El mecanismo de recepción de quejas y resolución de conflictos deberá garantizar la posibilidad de que todas las personas o instituciones afectadas por la implementación del proyecto puedan presentar su reclamo, queja o inquietud ante los responsables de la obra. Este mecanismo deberá facilitar la recepción de inquietudes de diversa índole (consultas, cuestionamientos, quejas) y la resolución de las mismas, con el propósito de evitar potenciales conflictos.

Si en una primera instancia no se resuelven los reclamos/conflictos, se procederá a ejecutar los procedimientos establecidos en el ítem correspondiente del MGAS.

Todos los gastos efectuados en la resolución de reclamos o conflictos serán sufragados por la empresa contratista.

2.2. Objetivo

El principal objetivo del presente Manual es poner en público conocimiento, o reforzar como sea necesario, los procesos y mecanismos de acción que se ejecutarán para resolver los reclamos y conflictos que pudieran generarse al llevar adelante el proyecto, por eventuales impactos negativos que pudiesen suscitarse en el entorno.

Este mecanismo involucra actividades para la contratista, el DSA del FFFIR y entidades provinciales competentes. Los mismos deberán ser divulgados ante quienes podrían alegar afectaciones.

2.3. Alcance de aplicación

La gestión de reclamos y conflictos incluye su tratamiento a partir de la solicitud de cualquier persona, comunidad, municipio o institución, hasta su resolución.

3. PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMOS Y CONFLICTOS

Previo al inicio de las obras y en coordinación con las autoridades municipales y líderes comunitarios se contactará a la comunidad localizada en el AI del proyecto para suministrarle la información relacionada con los aspectos técnicos (alcance de la obra) y de manejo ambiental y social del proyecto, así como para aclarar consultas, recibir observaciones y, de esta manera, mejorar el proceso de toma de decisiones y minimizar el riesgo de conflictos sociales.

Todos los reclamos recibidos durante el primer contacto y, posteriormente, hasta el fin de la obras deben ser gestionados por el RAS, quien los registrará en una planilla de seguimiento, y los remitirá a la Inspección de obra, al DSA del FFFIR y al organismo provincial competente, para su seguimiento y monitoreo.

3.1. Principios del proceso

De manera general, el Proceso de gestión de reclamos y quejas seguirá los siguientes lineamientos:

- Proporcional: tendrá en cuenta de manera proporcional el nivel de riesgo y los posibles impactos negativos en las zonas afectadas.
- Culturalmente apropiado: El Proceso está diseñado para tener en cuenta las costumbres locales de la zona.
- Accesible: El Proceso está diseñado de una manera clara y sencilla para que sea comprensible para todas las personas. No habrá ningún costo relacionado con el mismo.
- Anónimo: El demandante puede permanecer en el anonimato, siempre y cuando no interfiera con la posible solución a la queja o problema. El anonimato se distingue de la confidencialidad en que es una denuncia anónima, no se registran los datos personales (nombre, dirección) del demandante.
- Confidencial: El proyecto respetará la confidencialidad de la denuncia. La información y los detalles sobre una denuncia confidencial sólo se comparten de manera interna, y tan sólo cuando sea necesario informar o coordinar con las autoridades.
- Transparente: El proceso y funcionamiento del Mecanismo es transparente, previsible, y fácilmente disponible para su uso por la población.

3.2. Origen

El reclamo puede ser originado por:

- Ciudadano usuario o no usuario, reclamante en forma directa.
- Comisiones vecinales.
- Comunidades indígenas o no indígenas.

- Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
- Cualquier otro tipo de organización que alegara estar afectada por las obras.
- Otros casos.

3.3. Medios de Recepción

Las personas o instituciones afectadas contarán con diferentes alternativas para presentar sus inquietudes o reclamos. Los canales de recepción podrán ser:

- Oficinas del Contratista.
- Buzón de sugerencias / libro de quejas disponible en el Obrador.
- Oficinas de la Entidad Provincial.
- Número telefónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y consultas.
- Dirección de correo electrónico creado exclusivamente para la recepción de reclamos y consultas.

Los datos de los canales de recepción de reclamos deben especificarse en el cartel de obra.

Pudiendo existir otros modos en que los reclamos se manifestasen, en función de factores contextuales y socio-culturales, los receptores de la queja que formen parte del personal de la contratista deberán: o bien orientar a quien desea realizar la queja según el procedimiento formal, o bien actuar de oficio. Refiere a los casos tales como manifestaciones verbales de las quejas por parte de los posibles damnificados o quejas realizadas a través de medios de comunicación, entre otros.

3.4. Trámite / Proceso Institucional

3.4.1. Recepción y Registro de Datos

Se pretende que todos los reclamos sean atendidos, por alguno de los medios indicados u otros, exclusivamente por el contratista, quien determinará el tipo de intervención para la resolución del reclamo o conflicto. Estos reclamos, aún en caso de recepción telefónica o “de oficio”, serán consignados, deberán ser registrados y remitidos a las instituciones ya indicadas.

El personal de obra que reciba y registre el reclamo, lo derivará de inmediato al RAS, con copia al Responsable Técnico de la obra.

3.4.2. Prioridad de Atención del Reclamo

Si la inquietud es una duda o consulta de información con respecto a cualquier componente del proyecto, la misma deberá ser atendida y resuelta inmediatamente por el RAS.

Si la inquietud es una queja o reclamo con respecto a cualquier componente del proyecto, el Responsable Ambiental y Social (RAS) deberá evaluar su pertinencia, aunque siempre deberá dar acuse de recibo al reclamante. Y en caso no pertinente, responder como se indica más abajo.

3.4.3. Verificación in situ y Respuesta

Según la naturaleza del reclamo, se realizará una visita al lugar y/o a los reclamantes, dentro de un plazo de 3 días de recibido el reclamo.

En caso de ser pertinente, se tratará de medir los impactos reales, en el lugar en donde se perciba la afectación (molestias, ruidos, olores, vibraciones, deterioros edilicios, etc.) y se documentará la presencia y la severidad de las mismas.

Durante la visita se labrará un acta que puede ser de dos tipos:

Acta de Informe de Situación. Se realiza en presencia o ausencia del reclamante. El personal del contratista que participa de la visita, luego de analizar la situación, labrará un acta, donde se describirá técnicamente la situación denunciada. De estar presente el reclamante, el acta reflejará tanto la perspectiva de los técnicos presentes, como la del/os reclamantes.

Acta de Informe de Situación y Compromiso de Reparación. Se elaborará sólo en presencia del/os denunciante/s, y sólo si se llega a un compromiso de mutuo acuerdo. El proceso es el siguiente:

- Análisis in situ de la situación.
- Elaboración de un acta de informe de situación.
- Negociación entre contratista y reclamante/s.
- Si se produjera un acuerdo de solución, con plazos estipulados, se labrará el acta de compromiso y reparación.
- Para que este tipo de acuerdo se alcance deben darse dos condiciones: (a) que firma del compromiso involucre al RAS y (b) que el/los reclamante/s estén informados de que pueden no asumir un acuerdo en esta instancia y que consideren los tiempos asumidos como prudenciales. De no producirse estas condiciones, se fijará una reunión entre la contratista y el / los reclamante/s, con fecha de común acuerdo.

Ambos tipos de acta han de ser remitidos por el RAS al jefe de obra, a la Inspección de obra y al FFFIR, dentro de los 3 días siguientes a la firma de la misma. Las actas serán

respaldadas con las firmas de los involucrados, lista de participantes en caso de reuniones, informe de temas tratados, razones de consultas, tipo de conflictos emergentes o posibles, metodología de resolución, conclusiones y compromisos asumidos, respaldo fotográfico y cualquier otra forma de verificación del proceso de trabajo con el/los reclamante/s (o comunidades afectadas si se tratara de un grupo reclamante).

Las acciones en campo serán sistematizadas por los responsables de la contratista y monitoreadas por el DSA del FFFIR.

Luego de la visita in situ y del proceso descrito precedentemente, se da respuesta y solución al reclamo.

1) En el caso de haberse llegado a realizar un acuerdo (labrado de acta de compromiso de reparación), el contratista elaborará de inmediato y unilateralmente un documento, al que anexará el acta mencionada, donde se compromete a cumplir con dichos plazos y lo enviará por escrito al/los reclamante/s como respaldo del compromiso adquirido por la empresa. Al mismo tiempo será remitida con su anexo a la Inspección de Obra y al FFFIR.

2) En el caso de haberse llegado a un acta sin presencia de la parte reclamante, el RAS deberá remitir este acta al/los reclamante/s en el plazo de 3 días, con una sugerencia de posible fecha de reunión, sea en el lugar del reclamo o en las oficinas de la contratista. Tal documento será entregado en mano. Este proceso derivará en una reunión entre el/los reclamante/s y personal de la empresa (RAS y representante técnico). En esta instancia, parte del personal que acompaña al RAS deberá tener el nivel de responsabilidad y capacidad de decisión para asegurar el cumplimiento de los compromisos de solución que se acuerden, si es que esto ocurre. Luego se procederá, como en el caso 1) si es que se ha llegado a acuerdo, si no será remitido a segunda instancia de resolución, según el MGAS.

En caso de que el reclamo no sea considerado pertinente y se rechace, la parte reclamante deberá ser informada de la decisión y de los motivos fundados de la misma. Para ello, deberá brindarse información concreta, relevante y entendible de acuerdo a las características socioculturales del reclamante. El reclamante debe dejar una constancia de haber sido informado, la cual será archivada junto con la inquietud presentada.

Solución y Cierre del Reclamo

Habiéndose llegado a un acuerdo y contando con el compromiso de plazos de solución, la contratista deberá proceder en consecuencia. Una vez implementada la solución, la parte reclamante deberá dejar una constancia de conformidad y cierre del reclamo. La misma será archivada junto con la inquietud.

Las acciones de campo serán sistematizadas por los responsables de la contratista, la Inspección de obra y monitoreadas por el DSA.

3.5. Reclamos y Conflictos para Casos Específicos

3.5.1. Por Reasentamiento Involuntario

Para estos casos específicos deberán seguirse los lineamientos establecidos en el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI).

3.5.2. Por Afectación de Pueblos/Comunidades Indígenas

Para estos casos específicos deberán seguirse los lineamientos establecidos en el Plan para Pueblos Indígenas (PPI).

4. MONITOREO

En toda inquietud de queja o reclamo que fue cerrada con conformidad por parte del reclamante, la contratista realizará un monitoreo sistemático durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron efectivamente solucionados.

Los reclamos derivados de la implementación de los proyectos serán seguidos y monitoreados por el FFFIR.